



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

501

FORMA A-54

PROMOCIÓN:

CUADERNILLO RELACIONADO
CON EL AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011.

En quince de marzo de dos mil doce, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el escrito signado por los promoventes, personas físicas y por los representantes de las organizaciones; Asociación Civil, Asociación Civil,

Asociación Civil, Asociación Civil, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el catorce del mes en curso. Conste. -----

México, Distrito Federal, a quince de marzo de dos mil doce. -----

Visto el escrito de cuenta; fórmese cuadernillo con el escrito signado por los promoventes, personas físicas, y por los representantes de las siguientes organizaciones:

Asociación Civil, Asociación Civil,

Asociación Civil, Asociación Civil, en calidad de amicus curiae. -----

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ténganse por hechas las manifestaciones contenidas en el escrito de cuenta.

Devuélvanse los autos al **MINISTRO** que suscribe. -----

CUADERNILLO RELACIONADO
CON EL AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011.

- 2 -

Notifíquese.-----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO
ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza
y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes.-----



LSJ. 

16 MAR 2012 Por lista de la misma
fecha, se notificó el acuerdo anterior a
los interesados. Conste,

Siendo las catorce horas de la fecha antes
indicada, y en virtud de no haber compa-
recido los interesados a cit notificaciones,
se tiene por hecha dicha notificación por
medio de lista. Doy fe.



12:14
MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION: JORGE PARDO, JOSÉ RAMÓN COSSÍO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LA REA

PRESENTE

ADR 20/11
1a Sala

Como ciudadano mexicano, solicitando se reconozca mi derecho bajo la más estricta responsabilidad para formular por escrito, en pleno ejercicio de todas mis Libertades y Garantías Constitucionales. Además por un sentido de libertad, dignidad y solidaridad en razón del caso que viene afectando a la señorita

Independientemente de la violación a la Convención de Viena en contra de la Ciudadana y siendo este órgano competente, vengo a que se de entrada a este documento en la vía y forma propuestas, en el entendido tácito de que no existe relación jurídica con la parte sentenciada. Más sin embargo, puesto que no ha existido oportunidad de que el ministerio público objete las probanzas que merecen especial análisis. Si señalar que existe desmedidamente la incertidumbre en cuanto a lo que sucedió entorno a la señorita y el grupo delincuencial con quienes se le vincula y en cuanto a la verdad histórica de los hechos desde que la señorita conoció a todos y cada uno de los integrantes del grupo delincuencial denominado por lo tanto deben analizarse con precaución los elementos derivados de la investigación que he tenido a bien realizar. Podría desencadenar una serie de elementos para probar que no fue respetada la integridad psíquica de la señorita

RAIC
1. MARCO
DE LA
No puedo precisar ni señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar para que se actualice y demuestre dicho ambiente de violencia con contra de la señorita sin embargo eventualmente no podría establecerse ya una responsabilidad en contra de quien encubierta y ultrajada su voluntad bajo el manto de normalidad, ha resultado vinculada en responsabilidades por el testimonio de víctimas de secuestro, proceso del cual fue objeto la señorita hasta dictar sentencia. Sin embargo para que surta la hipótesis de legal vengo a señalar derivado de investigación realizada por el suscrito. Declarar que existen indicios de que pudo haber sucedido de otra forma, más cercana a la forma a continuación señalada:

Resulta más que probable que los delinquentes denominados los fueran adeptos a cierto tipo de practicas o pertenecieran algún tipo de SECTA RELIGIOSA PERSEVERA, en forma terca, de las cuales en sus malas prácticas que atentan contra la salud física, mental y social de sus adeptos y de la sociedad en general, por nombrar tan solo un ejemplo de una de ellas la denominada.

5-MAR-2012
15:50 P.M.

**SIN
TEXTO**



Gran fraternidad universal y para poder resumir entre los perjudicados y victimas se encuentran muchos niños, menores de edad, ciudadanos incautos a quienes se utilizan, manipulan y violan derechos irrenunciables,

El carácter religioso de la anterior y muchas otras sectas. Ostentan todos los elementos constituyentes de una religión:

- 1) Poseen en todas sus sedes templos o en su defecto altares que exigen sean contruidos con detalles arquitectónicos específicos justificados éstos por razones esotéricas, cabalísticas, religiosas (**indicio 1**) como la gran cruz de piedra y madera que resguarda la entrada principal del " " al fin. en ellos ejecutan diversas prácticas religiosas muy sui-géneris, ejs.:

2) misas, llamadas por ellos "ceremonias cósmicas"

3) casamientos, a su estilo.

3) bautismos

4) iniciaciones secretas que convierten al nuevo adepto en una pieza robótica de la jerarquía a la que obedecen ciegamente e idolatran hasta el fetichismo.

5) ostentan cruces equivalentes a los grados.

FEDERACIÓN
A DE LA FASCIA
POS
LA

6) realizan festejos con cierto tipo de copas ceremoniales (de plata)

Todo aquello que no concuerda con la filosofía y doctrina Acuariana es descalificado a priori con el mote de "profano". **en contraste cultivan: las "ciencias ocultas" como la ASTROLOGIA.**

Estudiosos de la materia como lo es el erudito en la materia, el sacerdote jesuita,

en su libro titulado justamente "Las sectas nos invaden" (Ediciones Paulinas, Caracas, 1978), les dedica el capítulo 15 ¿qué son los acuarios?. Refiriéndose a ésta secta expresa, a modo de conclusión: "la misión del acuario de la gran fraternidad es un ejemplo de a dónde puede llegar lo peor del sincretismo religioso y del gnosticismo"

7) El también experto en la materia define: "las sectas destructivas son organizaciones pseudo-religiosas, pseudo-filosóficas o pseudo-culturales, de estructura piramidal y totalitaria, que se dedican a la captación de adeptos para explotarlos mediante falsas promesas y técnicas de coerción psicológica, siempre en provecho del afán de poder y de lucro de sus líderes."

NTS
TEXT



REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
MANILA

era y se denominaba bajo ese signo zodiacal. Su hermano, sus sobrinos y, a quienes apodaban " - " y " "; así como su primo ". Posteriormente se integró al grupo : " " e

l: término utilizado para referirse a un miembro de la denominada gran fraternidad universal. (indicio 2) denota la alienante adicción que los integrantes de esta secta tienen por la astrología. es así como la mayoría de los rigen gran parte de sus vidas de acuerdo a la interpretación que el gurú o algún astrólogo de la secta haga de su carta natal. de tal manera que esta fe en los astros es otro instrumento astutamente utilizado por los jerarcas para manipular a los ingenuos discípulos.

Circunstancias que rodean desde el momento que arribó a territorio mexicano, conoció a todos los personajes de origen mexicano, desde que convivió con ellos, las actividades delictivas con las cuales la han involucrado y sobre todo la forma como pudo haber sido inducida, a aceptar, hasta desarrollar una compleja relación con sus igualmente captores. y luego ser acusada cómplice de los delitos que independientemente del testimonio de las víctimas de secuestro. La ciudadana NO participo en plena facultad de conciencia, raciocinio y voluntad. *Eventualmente habría que considerar este caso como el Síndrome < en el que existió no exclusivamente un lavado de cerebro en toda la regla> . Así mismo.* después de estudiar y analizar su personalidad, muy probablemente estos sujetos de manera progresiva fueron induciendo e incluso mediante sustancias difícil de especificar, eventualmente rituales o ceremonias hipnóticas y de brujería, de lo cual fue víctima hasta lograr los objetivos previstos en una persona muy sensible a las sugerencias de cualquier tipo como aparentemente lo es ella, sujeción de la voluntad por excitación de la emocionalidad, de sugerencias inmorales, un programa de lavado de cerebro, hasta llegar incluso a una hipnosis profunda, intentaron el efecto de la sugestión puramente mental de un programa de lavado de cerebro, de un seguimiento doloso y bien estructurado para, aprovechando la ingenuidad, buena fe y confianza depositada en amistades

SIN
TEXT



DEPARTMENT OF THE
INTERIOR
BUREAU OF LANDS
WASHINGTON, D. C.
PRIMEA

Inducir a la ciudadana actuar en presunta complicidad, puesto que esencialmente y ella así mismo lo entendía, únicamente y exclusivamente convivía con los sujetos con los cuales se le viene siguiendo un proceso.

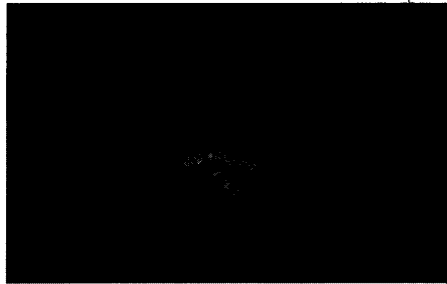
LA FINALIDAD DE TODOS los líderes de sectas es actuar sobre las fuerzas naturales. Se proponen dominar a las personas como a las infinitas fuerzas del cosmos y utilizarlas, como una espada, para sus propios fines. Por definición, un individuo que intenta servirse de esas fuerzas en beneficio propio, sin un propósito más elevado, practica la

NO SE HA DADO A CONOCER sin embargo es probable estos individuos, con los que se vincula a la señorita en complicidad, Ciertamente en algún momento histórico o etapa de su desarrollo, estudiaran



A PEDEI
CIA DE LA
ERDOS DELA
ALA

SI DESEO DAR A CONOCER LO SIGUIENTE CON LAS RESERVAS DEL CASO, PUESTO QUE EXISTE UN INDICIO MEDIANTE EL CUAL APARENTEMENTE EL O GENTE VINCULADA A EL MISMO SE ANUNCIABA EN INTERNET CON O SIN SEUDONIMOS Y OFRECIAN SERVICIOS COMO EL QUE SE ACONTINUACION SE ANEXA < indicio 3>



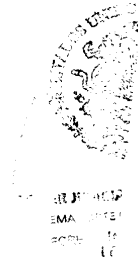
[visita otra de mis páginas](#)

Bienvenido a mi sitio, donde puedes conseguir ayuda.

Mi nombre es y puedo ayudarte haciendo uso de la magia.

Desarrollo mis capacidades desde hace unos años.

SIN TEXTO



Me especializo en la realización de Amarres de Amor, este tipo de amarres son los indicados para conseguir el Retorno de tu amado, ya sea que te haya abandonado por otra persona o simplemente se haya ido. También en los Amarres de enamoramiento, para conseguir que la persona de la que estas enamorado se acerque poco a poco hacia Ti.

También, si estas interesado,

Puedes escribirme a:

Atenderé gustoso tu consulta. Realiza tu consulta sin ningún tipo de compromiso, yo estoy aquí para ayudarte.

Tu mail será contestado lo antes posible y veremos cuales son las opciones más convenientes para ayudarte.

Puedes escribirme a:

Atenderé gustoso tu consulta. Realiza tu consulta sin ningún tipo de compromiso, yo estoy aquí para ayudarte.

Tu mail será contestado lo antes posible y veremos cuales son las opciones más convenientes para ayudarte.

JUZGO PERTINENTE MENCIONAR Y ABUNDAR MAS AL RESPECTO::

CATEMACO se encuentra al sur de Veracruz, (México) lugar donde practican la magia negra y hechizos, ahí existen maestros del oscurantismo y en la tradición del lugar se habla del nahual o personas que se dice pueden convertirse en animales, existen hierberos y hacen la curación a base de plantas medicinales, y es lo que en realidad ha dado fama mundial a esa localidad. Enclavada en la selva de los Tuxtlas, esos brujos suelen hacer invocaciones hacen pentagramas pintados en el suelo con cal y apagan las luces para encender antorchas, son rituales presenciados por otros hechiceros, hacen las llamadas limpies con yerbas y son creencias que se tienen en Catemaco.

SIN TEXTO

ESTADO UNIDO

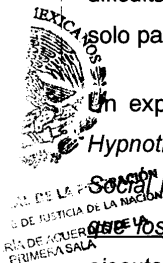
ESTADO UNIDO

En algún momento histórico previo a los hechos conocidos como secuestro de [redacted] y [redacted], junto con su hijo. La señorita [redacted]. En esencia de un pacto que la ciudadana [redacted] no firmó y reside en su eventual sacrificio al ser injustamente sentenciada a 60 años de prisión, seguramente fue sometida previamente a sesiones de hipnosis, ingestión de sustancias ajenas a su conocimiento y voluntad. Señalo esto porque el mayor peligro de la confabulación es que las personas que han sido hipnotizadas encuentran muy difícil separar sus recuerdos reales de los que fueron generados mediante hipnosis se ha descrito las dificultades asociadas a la deshipnotización. señala que algunos sujetos pueden ser solo parcialmente deshipnotizados y caer luego espontáneamente en hipnosis total.

Un experimento de laboratorio emprendido por [redacted] se publicó en "Hill Hypnotized Person Try To Harm Themselves Or Others? (Journal Of Abnormal Social Psychology, 1939). el propósito de los experimentos fue probar dos hipótesis: que los pacientes que se encontraran en estado hipnótico pueden ser inducidos a ejecutar acciones que son peligrosas para ellos mismos y que no efectuarían si no estuvieran hipnotizados; y que pacientes bajo hipnosis pueden ser inducidos a efectuar acciones perjudiciales para otras personas, que no ejecutarían en su estado normal.

Así mismo habría que recordar el caso del caso que ocurrió en 1954, en Copenhague, tuvo lugar en agosto de 1950 y marzo de 1951. Los personajes entre ellas existió robos y asesinatos; el hipnotizador se llamaba [redacted] y el sujeto receptor [redacted]. Así mismo el de la ciudadana [redacted]

[redacted], las condiciones de su cautiverio siempre han sido intensamente discutidas y nunca del todo aclaradas. Considerada la genuina víctima política de la década de los setenta, Dos mundos antagónicos conviviendo en la psicología de una bella y joven mujer, ya no se proclamaba secuestrada, era un miembro convencido de la guerrilla. La combinación de víctima y victimario en una sola persona bajo el nombre de Síndrome de Estocolmo. Abundando aun más sobre este caso. [redacted] es también saludada como ese extraño fallo del sistema. La condenaron a 35 años de prisión, pena conmutada luego a 7. El propio Presidente del país, Jimmy Carter, se aseguró de que [redacted] sólo estuviera 22 meses encarcelada.

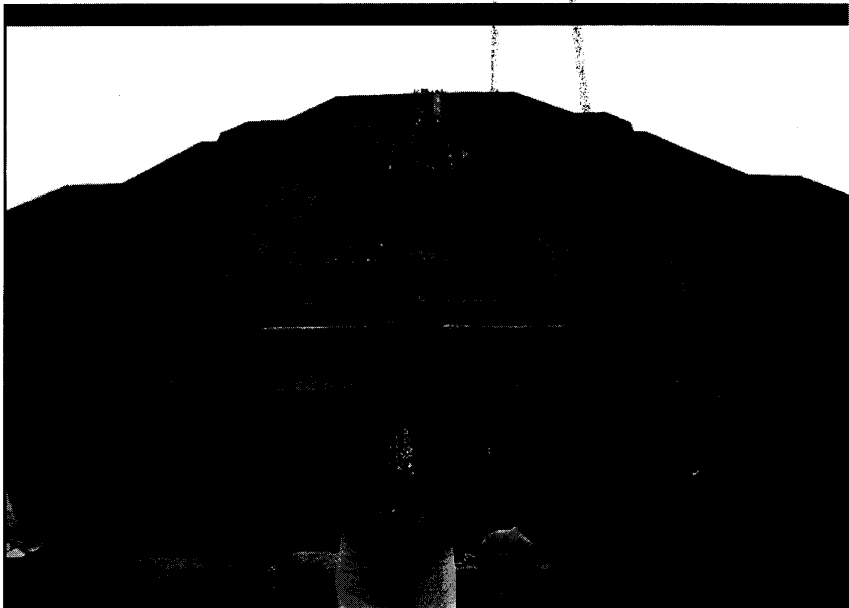


SIN TEXTO



En el expediente del caso [redacted], se encuentra asentado que en 2004 la [redacted] se integró a " [redacted] y de acuerdo con la declaración de " [redacted], la ahora sentenciada sembró la discordia, que incluso a los hermanos de [redacted] los hicieron a un lado y ella se encargaba de decidir los montos de dinero que cobrarían en los plagios y le sugirió a [redacted] que no le dijera al resto de la banda los montos que cobrarían. El [redacted] declaró que el 8 de diciembre de 2005, día de la captura de [redacted] : e [redacted]. Como en el caso I [redacted] nunca ha podido [redacted] ni ella misma lo sabe.

Motivo por el cual como en este caso se alegan todo tipo omisión y violaciones del derecho a un juicio justo Resultaría importante dilucidar si la señorita [redacted] alguna ocasión presencié lo antes descrito, si fue invitada, acudió personalmente a algún centro [redacted] si fue sometida a algún tipo de limpia con yerbas o ritual de alguna especie, en tanto existe una foto de la ciudadana [redacted] en donde se aprecian de fondo las pirámides de Teotihuacan y son lugares llamados ceremoniales, ahí suelen practicarse este tipo de ceremonias o rituales místicos, limpias, etc.



SIN TEXTO

ESTADO
PODER.
SUPREMA
SECF

Existen muchas señales de que las cosas pudieran haber sucedido de tal forma, y resultaría importante en bien de la verdad histórica de los hechos, conforme vinieran emergiendo y considerando por supuesto las violaciones ya conocidas al momento de su detención, se apliquen a favor de la ciudadana derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada"

LAS VICTIMAS DICEN E INSISTEN RECIENTEMENTE a instancias de la señora
que en todo momento reconocían la voz de la señorita
sin embargo no dicen que su voz se encontraba motivada por
alucinaciones que la ciudadana seguramente aceptaba por reales, por
sus ansias ingeridas y por sugestión que le habían causado una falsificación de la
memoria, esto muy probablemente en combinación de la sugestión hipnótica a la cual
fue inducida en cierto momento (os) histórico (os) de los hechos y que hasta el
momento la ciudadana no recuerda porque así convenía y conviene a sus
captores dicho de otra forma y he venido insistiendo en el cuerpo del

JUDICIAL DE LA SECCIÓN
CORTES DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ACUERDOS DE LA
PRIMERA

presente escrito también fue secuestrada por estos sujetos, fue secuestrada su
voluntad. La presunción de un proceso penal es la consecuencia de que, a partir de hechos conocidos o que se señalan en el juicio, se deduce por el tribunal, ya sea en términos de la Ley de cometer un delito, o en términos de las circunstancias en que se cometió, o en términos de su imputabilidad

Al mismo tiempo Además de constituir el mínimo más benéfico para el sentenciado. invocar el derecho expícito de la ciudadana se emita una medida cautelar. La entrevista psicológica personal, el método más utilizado para conocer la personalidad, es el medio que propongo y sirve para obtener un informe sobre el pasado, presente y previsibles reacciones futuras de un individuo en concreto. La mayoría de las entrevistas son desestructuradas, pero algunas emplean una serie de 'preguntas tipo' siguiendo una secuencia dada. De manera tal la señorita pudiera reconocer de existir tan solo algún indicio de lo que con todo lujo de detalle se ha venido manifestando. <exámenes toxicológicos>
Suplicando a sus señorías en el más estricto afán de protección a mi persona
y familiares, confidencialidad para guardar mi identidad y domicilio signado
para oír y recibir todo tipo de notificaciones en cuanto a las más extremas de
las cautelas..

SIN
TEXT

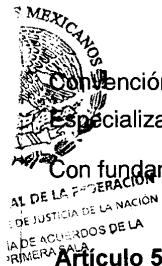
ESTADOS UNIDOS
PODER
SECRET

Por ultimo reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional.

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;

Convención Americana Sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos

Con fundamento en la convención citada anteriormente y.



Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

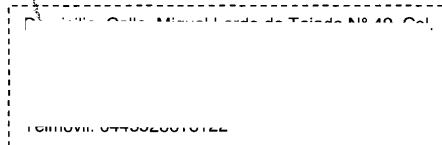
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

A USTEDES C. MINISTROS atentamente pido se sirvan.

UNICO. Tenerme por presentado, en términos del presente ocurso y acordar de conformidad lo solicitado.

PROTESTO LO NECESARIO
MEXICO DISTRITO FEDERAL A LA FECHA DEL SELLO

LIC.



015849

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 MAR 15 PM 12 14

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 MAR 15 PM 1 43

PRIMERA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

RECIBI DE UN ENVIADO, en (9) Folios
SIN ANEXO 8

ESTADOS UNIDOS
PODER JUDICIAL
SUPREMACENTE
SECRETARII
PV

12:14
MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION: JORGE PARDOS, JOSÉ RAMÓN COSSÍO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LA REA

PRESENTE

10R 10/11
10/11/10
Como ciudadano mexicano, solicitando se reconozca mi derecho bajo la más estricta responsabilidad para formular por escrito en pleno ejercicio de todas mis Libertades y Garantías Constitucionales. Además por un sentido de libertad, dignidad y solidaridad en razón del caso que viene afectando a la señorita

15-MARZO-2012
15:50 P.M.
Independientemente de la violación a la Convención de Viena en contra de la Ciudadana y siendo este órgano competente, vengo a que se de entrada a este documento en la vía y forma propuestas, en el entendido tácito de que no existe relación jurídica con la parte sentenciada. Más sin embargo, puesto que no ha existido oportunidad de que el ministerio público objete las probanzas que merecen especial análisis. Si señalar que existe desmedidamente incertidumbre en cuanto a lo que sucedió entorno a la señorita y el grupo delincuencia con quienes se le vincula y en cuanto a la verdad histórica de los hechos desde que la señorita conoció a todos y cada uno de los integrantes del grupo delincuencia denominado por lo tanto deben analizarse con precaución los elementos derivados de la investigación que he tenido a bien realizar. Podría desencadenar una serie de elementos para probar que no fue respetada la integridad psíquica de la señorita

No puedo precisar ni señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar para que se actualice y demuestre dicho ambiente de violencia con contra de la señorita, sin embargo eventualmente no podría establecerse ya una responsabilidad en contra de quien encubierta y ultrajada su voluntad bajo el manto de normalidad, ha resultado vinculada en responsabilidades por el testimonio de víctimas de secuestro, proceso del cual fue objeto la señorita hasta dictar sentencia. Sin embargo para que surta la hipótesis de legal vengo a señalar derivado de investigación realizada por el suscrito. Declarar que existen indicios de que pudo haber sucedido de otra forma, más cercana a la forma a continuación señalada:

Resulta más que probable que los delincuentes denominados ueran adeptos a cierto tipo de practicas o pertenecieran algún tipo de SECTA RELIGIOSA PERSEVERA, en forma terca, de las cuales en sus malas prácticas que atentan contra la salud física, mental y social de sus adeptos y de la sociedad en general, por nombrar tan solo un ejemplo de una de ellas la denominada.

**SIN
TEXTO**



Gran fraternidad universal y para poder resumir entre los perjudicados y víctimas se encuentran muchos niños, menores de edad, ciudadanos incautos a quienes se utilizan, manipulan y violan derechos irrenunciables,

El carácter religioso de la anterior y muchas otras sectas. Ostentan todos los elementos constituyentes de una religión:

- 1) Poseen en todas sus sedes templos o en su efecto altares que exigen sean contruidos con detalles arquitectónicos específicos justificados éstos por razones esotéricas, cabalísticas, religiosas (indicio 1) como la gran y que resguarda la entrada principal del al fin, en ellos ejecutan diversas prácticas religiosas muy sui-géneris, ejs.:

- 2) misas, llamadas por ellos "ceremonias cósmicas"

- 3) casamientos, a su estilo.
bautismos

- 4) iniciaciones secretas que convierten al nuevo adepto en una pieza robótica de la jerarquía a la que obedecen ciegamente e idolatran hasta el fetichismo.

- 5) ostentan cruces equivalentes a los grados.

- 6) realizan festejos con cierto tipo de copas ceremoniales (de plata)

Todo aquello que no concuerda con la filosofía y doctrina Acuariana es descalificado a priori con el mote de "profano". en contraste cultivan: las "ciencias ocultas" como la ASTROLOGIA.

Estudiosos de la materia como lo es el erudito en la materia, el sacerdote jesuita en su libro titulado justamente "Las sectas nos invaden" (Ediciones Paulinas, Caracas, 1978), les dedica el capítulo 15 ¿qué son los acuarios?. Refiriéndose a ésta secta expresa, a modo de conclusión: "la misión del acuario de la gran fraternidad es un ejemplo de a dónde puede llegar lo peor del sincretismo religioso y del gnosticismo"

- 7) El también experto en la materia define: "las sectas destructivas son organizaciones pseudo-religiosas, pseudo-filosóficas o pseudo-culturales, de estructura piramidal y totalitaria, que se dedican a la captación de adeptos para explotarlos mediante falsas promesas y técnicas de coerción psicológica, siempre en provecho del afán de poder y de lucro de sus líderes."

SIN
TEXT



era , y se denominaba bajo ese signo zodiacal. Su hermano
 , sus sobrinos y , a quienes apodaban "I i-
 " y " "; así como su primo ". Posteriormente
 se integró al grupo l " " e -
 " " .

término utilizado para referirse a un miembro de la denominada gran fraternidad universal. (indicio 2) denota la alienante adicción que los integrantes de esta secta tienen por la astrología. es así como la mayoría de los acuarianos rigen gran parte de sus vidas de acuerdo a la interpretación que el gurú o algún astrólogo de la secta haga de su carta natal. de tal manera que esta fe en los astros es otro instrumento astutamente utilizado por los jerarcas para manipular a los ingenuos discípulos.

Circunstancias que rodean desde el momento que , arribó a territorio mexicano, conoció a todos los personajes de desde que
 DE LA FISCALÍA DE LA PUNTA DE LA JUSTICIA DE LA NACIÓN
 DE ACUERDO CON LA LEY DE AEROS SALA
 convivió con ellos, las actividades delictivas con las cuales la han involucrado y sobre todo la forma como pudo haber sido inducida, a aceptar, hasta desarrollar una compleja relación con sus igualmente captores, y luego ser acusada cómplice de los delitos que independientemente del testimonio de las víctimas de secuestro. La ciudadana NO participo en plena facultad de conciencia, raciocinio y voluntad. *Eventualmente habría que considerar este caso como el Síndrome* *< en el que existió no exclusivamente un lavado de cerebro en toda la regla> . Así mismo.* después de estudiar y analizar su personalidad, muy probablemente estos sujetos de manera progresiva fueron induciendo e incluso mediante sustancias difícil de especificar, eventualmente o y de de lo cual fue víctima hasta lograr los objetivos previstos en una persona muy sensible a las sugerencias de cualquier tipo como aparentemente lo es ella, sujeción de la voluntad por excitación de la emocionalidad, de sugerencias inmorales, un programa de lavado de cerebro, hasta llegar incluso a una hipnosis profunda, intentaron el efecto de la sugestión puramente mental de un programa de lavado de cerebro, de un seguimiento doloso y bien estructurado para, aprovechando la ingenuidad, buena fe y confianza depositada en amistades

**SIN
TEXTO**



**PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SECRETARÍAS
P.R.**

Inducir a la ciudadana actuar en presunta complicidad, puesto que esencialmente y ella así mismo lo entendía, únicamente y exclusivamente convivía con los sujetos con los cuales se le viene siguiendo un proceso.

LA FINALIDAD DE TODOS los líderes de secta, es actuar sobre las fuerzas naturales. Se proponen dominar a las personas como a las infinitas fuerzas del cosmos y utilizarlas, como una espada, para sus propios fines. Por definición, un individuo que intenta servirse de esas fuerzas en beneficio propio, sin un propósito más elevado, practica la x

NO SE HA DADO A CONOCER sin embargo es probable estos individuos, con los que se vincula a la señorita en complicidad, Ciertamente en algún momento histórico o etapa de su desarrollo, estudiaran

SI DESEO DAR A CONOCER LO SIGUIENTE CON LAS RESERVAS DEL CASO, PUESTO QUE EXISTE UN INDICIO MEDIANTE EL CUAL APARENTEMENTE EL O GENTE VINCULADA A EL MISMO SE ANUNCIABA EN INTERNET CON O SIN SEUDONIMOS Y OFRECIAN SERVICIOS COMO EL QUE SE ACONTINUACION SE ANEXA < indicio 3>



visita otra

Bienvenido a mi sitio, donde puedes conseguir ayuda.

Mi nombre es y puedo ayudarte haciendo uso de la
Desarrollo mis capacidades desde hace unos años.

SIN
TEXTO



Me especializo en la realización de Amarres de Amor, este tipo de amarres son los indicados para conseguir el Retorno de tu amado, ya sea que te haya abandonado por otra persona o simplemente se haya ido. También en los Amarres de enamoramiento, para conseguir que la persona de la que estas enamorado se acerque poco a poco hacia Ti.

También, si estas interesado,

Puedes escribirme a:

Atenderé gustoso tu consulta. Realiza tu consulta sin ningún tipo de compromiso, yo estoy aquí para ayudarte.

Tu mail será contestado lo antes posible y veremos cuales son las opciones más convenientes para ayudarte.

Puedes escribirme a:

Atenderé gustoso tu consulta. Realiza tu consulta sin ningún tipo de compromiso, yo estoy aquí para ayudarte.

Tu mail será contestado lo antes posible y veremos cuales son las opciones más convenientes para ayudarte.

JUZGO PERTINENTE MENCIONAR Y ABUNDAR MAS AL RESPECTO::

CATEMACO se encuentra al sur de Veracruz, (México) lugar donde practican la magia negra y hechizos, ahí existen maestros del oscurantismo y en la tradición del lugar se habla del nahual o personas que se dice pueden convertirse en animales, existen hierberos y hacen la curación a base de plantas medicinales, y es lo que en realidad ha dado fama mundial a esa localidad. Enclavada en la selva de los Tuxtlas, esos brujos suelen hacer invocaciones hacen pentagramas pintados en el suelo con cal y apagan las luces para encender antorchas, son rituales presenciados por otros hechiceros, hacen las llamadas limpies con yerbas y son creencias que se tienen en Catemaco.



DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
ACUERDOS DE LA
GRASALA

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE JUSTICIA
PRIMER VICE

En algún momento histórico previo a los hechos conocidos como secuestro de [redacted] y [redacted], junto con su hijo. La señorita [redacted]. En esencia de un pacto que la ciudadana francesa no firmó y reside en su eventual sacrificio al ser injustamente sentenciada a 60 años de prisión, seguramente fue sometida previamente a sesiones de hipnosis, ingestión de sustancias ajenas a su conocimiento y voluntad. Señalo esto porque el mayor peligro de la confabulación es que las personas que han sido hipnotizadas encuentran muy difícil separar sus recuerdos reales de los que fueron generados mediante hipnosis se ha descrito las dificultades asociadas a la deshipnotización. señala que algunos sujetos pueden ser solo parcialmente deshipnotizados y caer luego espontáneamente en hipnosis total.

Un experimento de laboratorio emprendido por I. W. Rowland se publicó en "Hill Hypnotized Person Try To Harm Themselves Or Others? (Journal Of Abnormal Social Psychology, 1939). el propósito de los experimentos fue probar dos hipótesis: que los pacientes que se encontraran en estado hipnótico pueden ser inducidos a ejecutar acciones que son peligrosas para ellos mismos y que no efectuarían si no estuvieran hipnotizados; y que pacientes bajo hipnosis pueden ser inducidos a efectuar acciones perjudiciales para otras personas, que no ejecutarían en su estado normal.

Así mismo habría que recordar el caso del caso que ocurrió en 1954, en Copenhague, tuvo lugar en agosto de 1950 a marzo de 1951. Los personajes entre ellas existió robos y asesinatos; el hipnotizado se llamaba [redacted] y el sujeto receptor [redacted]. Así mismo el de la ciudadana estadounidense [redacted]

las condiciones de su cautiverio siempre han sido intensamente discutidas y nunca del todo aclaradas. Considerada la genuina víctima política de la década de los setenta, Dos mundos antagónicos conviviendo en la psicología de una bella y joven mujer, ya no se proclamaba secuestrada, era un miembro convencido de la guerrilla. La combinación de víctima y victimario en una sola persona bajo el nombre de Síndrome de Estocolmo. Abundando aun más sobre este caso. [redacted] es también saludada como ese extraño fallo del sistema. La condenaron a 35 años de prisión, pena conmutada luego a 7. El propio Presidente del país, Jimmy Carter, se aseguró de que [redacted] sólo estuviera 22 meses encarcelada.

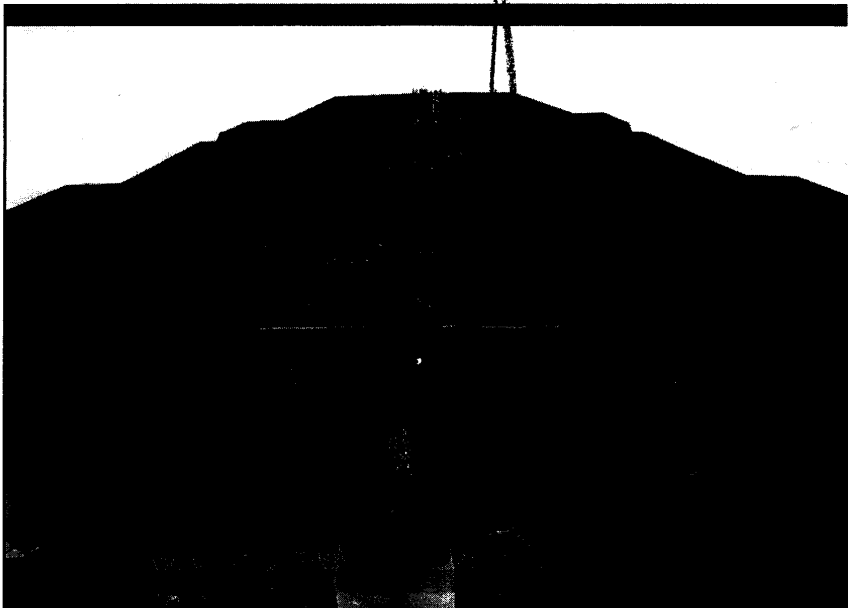
SIN TEXTO

PODER JUDICIAL
SUPLENTE
SECRETARÍA



En el expediente del caso , se encuentra asentado que en 2004 la se integró a " y de acuerdo con la declaración de "(, la ahora sentenciada sembró la discordia, que incluso a los hermanos de los hicieron a un lado y ella se encargaba de decidir los montos de dinero que cobrarían en los plagios y le sugirió a que no le dijera al resto de la banda los montos que cobrarían. El declaró que el 8 de diciembre de 2005, día de la captura de . Como en el caso nunca ha podido expresar toda la verdad, quizás como en el de ni ella misma lo sabe.

Motivo por el cual como en este caso se alegan todo tipo omisión y violaciones del derecho a un juicio justo Resultaría importante dilucidar si la señorita alguna ocasión presencié lo antes descrito, si fue invitada, acudió personalmente a algún centro esotérica o hechicería, si fue sometida a algún tipo de limpia con yerbas o ritual de alguna especie, en tanto existe una foto de la ciudadana en donde se aprecian de fondo las piramides de Teotihuacan y son lugares llamados ceremoniales, ahí suelen practicarse este tipo de ceremonias o rituales místicos, limpias, etc.



EL CANO
E LA
JUSTICIA DE L
CUERPOS DE
MEHASALA

SIN TEXTO



Existen muchas señales de que las cosas pudieran haber sucedido de tal forma, y resultaría importante en bien de la verdad histórica de los hechos, conforme vinieran emergiendo y considerando por supuesto las violaciones ya conocidas al momento de su detención, se apliquen a favor de la ciudadana [redacted] derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada”

LAS VICTIMAS DICEN E INSISTEN RECIENTEMENTE a instancias de la señora
que en todo momento reconocían la voz de la señorita

sin embargo no dicen que su voz se encontraba motivada por
alucinaciones que la ciudadana francesa seguramente aceptaba por reales, por
sustancias ingeridas y por sugestión que le habían causado una falsificación de la
memoria, esto muy probablemente en combinación de la sugestión hipnótica a la cual
fue inducida en cierto momento (os) histórico (os) de los hechos y que hasta el
momento la ciudadana no recuerda porque así convenía y conviene a sus
captadores, dicho de otra forma y he venido insistiendo en el cuerpo del

presente escrito también fue secuestrada por estos sujetos, fue secuestrada su
voluntad. La presunción de un proceso penal es la consecuencia de que, a partir de hechos conocidos o que se señalan en el juicio, se deduce por el tribunal, ya sea en términos de la Ley de cometer un delito, o en términos de las circunstancias en que se cometió, o en términos de su imputabilidad

Al mismo tiempo Además de constituir el mínimo más benéfico para el sentenciado. invocar el derecho expícito de la ciudadana [redacted] se emita una medida cautelar. La entrevista psicológica personal, el método más utilizado para conocer la personalidad, es el medio que propongo y sirve para obtener un informe sobre el pasado, presente y previsible reacciones futuras de un individuo en concreto. La mayoría de las entrevistas son desestructuradas, pero algunas emplean una serie de 'preguntas tipo' siguiendo una secuencia dada. De manera tal la señorita [redacted] pudiera reconocer de existir tan solo algún indicio de lo que con todo lujo de detalle se ha venido manifestando. <exámenes toxicológicos>
Suplicando a sus señorías en el más estricto afán de protección a mí persona
y familiares, confidencialidad para guardar mi identidad y domicilio signado
para oír y recibir todo tipo de notificaciones en cuanto a las más extremas de
las cautelas.

EXICANOS
LA FUEERACIÓN
STICIA DE LA N
QUERIDOS DE LA
RA SALA

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTI DE JUS
SECRETARIO DE LA
PRIMER

Por ultimo reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional.

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;

Convención Americana Sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos

Con fundamento en la convención citada anteriormente y.

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

A USTEDES C. MINISTROS atentamente pido se sirvan.

UNICO. Tenerme por presentado, en términos del presente ocuro y acordar de conformidad lo solicitado.

PROTESTO LO NECESARIO
MEXICO DISTRITO FEDERAL A LA FECHA DEL SELLO

LIC

E
C
M
C
T

015849

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 MAR 15 PM 12 14

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 MAR 15 PM 1 43

PRIMERA SALA
SECCION DE ACUERDOS

RECIBI DE UN ENVIADO, en (9) Folios
SIN ANEXO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SEGRETARIA
PF

1005
D, L
700
1102/2011

[illegible]

100-443887-1

Me permito expresar como mexicano y como abogado (*con cédula profesional número de fecha*), mis puntos de vista respecto del proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por el que se pretende liberar a la ciudadana absolviéndola de los delitos de secuestro y otros por los que se encuentra sentenciada, en razón de que como se establece en dicho proyecto, le fue violada su garantía del “debido proceso legal”.

El proyecto del ministro Zaldívar parte de la premisa de que no está a discusión la culpabilidad o inocencia de la ciudadana [redacted], sino que lo que se encuentra a discusión, es si le fueron respetadas sus garantías constitucionales, especialmente la de "debido proceso legal", la cual consiste en el estricto apego a la ley en el desarrollo tanto de la averiguación previa como del juicio, de lo que se desprenden las siguientes consideraciones:

Desde una postura meramente garantista, es decir aquella que pone por sobre cualquier consideración jurídica el respeto irrestricto a las garantías individuales, postura con la que estoy de acuerdo, pues efectivamente nuestro sistema constitucional y nuestra sistema de control constitucional practicado a través del Juicio de Amparo, se basan primordialmente en el respeto a las garantías constitucionales del gobernado; ahora bien, el hecho de que exista la garantía del "debido proceso legal", obedece a la estimación de que no siempre se observa el

SIN TEXTO



mencionado "debido proceso legal", lo cual indudablemente es indebido, como también es indebido dar a esta garantía un alcance tan desproporcionado que trasciende a afectar las garantías de otros igualmente involucrados en el proceso como son las víctimas y en este caso a todos los mexicanos, las garantías de las víctimas fundamentalmente se encuentran contenidas en el artículo 20 constitucional, el cual es de la misma jerarquía del 14 constitucional donde se encuentra la mencionada garantía de "debido proceso legal", de esta manera tenemos que la garantía del "debido proceso legal", cuando es violada trae como consecuencia que se anule el procedimiento, pero no siempre la violación a la garantía de "debido proceso legal", debe tener como consecuencia la anulación del proceso, sino solamente cuando tal violación o violaciones hayan trascendido al resultado del juicio y así lo ha sostenido esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, de esta manera lo que el proyecto debe examinar a partir de la premisa de que se violó la garantía de "debido proceso legal", es si las violaciones cometidas, trascendieron al resultado del fallo, consecuentemente no todas las violaciones al principio de "debido proceso legal", llevan a una anulación del proceso.

No debemos olvidar que el derecho ante todo es un elemento que hace posible la convivencia social y por lo tanto, debe obedecer dentro de los principios de la justicia a lo que la sociedad demanda y en esto estamos elevando un poco más el debate, ya no se trata de establecer si las garantías individuales de la señora fueron o no violadas, creo que de eso no hay duda, de lo que se trata es de establecer si la consecuencia absolutoria que se quiere dar en el proyecto del ministro Zaldívar a las violaciones cometidas en su perjuicio, es lo que la justicia más que el derecho, deben hacer en este caso, no es posible imaginar que la reparación constitucional de las violaciones a las garantías de la señora la tornen en inocente o impune, después de que como lo dice el ministro Zaldívar "está comprobada su culpabilidad" a mi parecer esto es demasiado grave para la sociedad, para la justicia y para el derecho".

La conducta violatoria de las garantías de la señora es algo que se debe sancionar y se debe castigar a quienes las hayan cometido, con todo el rigor de la ley como dicen los periodistas, ya sea con multas, indemnizaciones, inhabilitación para desempeñar cargos públicos, sujeción a proceso en caso de que tales violaciones impliquen un delito etcétera, "pero de ninguna manera absolver o declarar inocente o impune a quien comete un delito".

La consecuencia social que puede tener la absolución de la señora a mi parecer es más grave de lo que hasta ahora se ha dicho, tanto por especialistas como en los medios de comunicación, es indudable que acertada o equivocada la política de combate a la delincuencia organizada emprendida por el actual gobierno,

SIN TEXTO



ha resultado en un número aproximado de 70.000 muertos; la delincuencia organizada no sólo es el narcotráfico, la delincuencia organizada también es el secuestro, del que participó la señora : también es la extorsión en lo que también participó la señora por lo tanto su aprehensión y sujeción a proceso, fue parte del combate a esta delincuencia organizada por cuya causa el país se encuentra ensangrentado, por lo que liberarla en razón de que se violaron sus derechos, en lugar de castigar a quienes le violaron esos derechos, es privar de toda razón las 70.000 muertes que esta lucha ha significado para México.

Es en este último tenor, es en el que me rebelo contra la sola posibilidad ya realizada, de que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un prurito mal entendido a mi juicio, de apego al derecho, este faltando al más elemental sentido de justicia, que es "que quien delinque debe ser castigado" y me refiero a la señora y a quienes le violaron sus garantías, pero no a la sociedad a la que se le está castigando con la impunidad que se pretende para la señora

No debemos olvidar que nuestra Suprema Corte es de Justicia, lo que significa que la Justicia, es el valor primordial que se debe alcanzar con sus resoluciones.

Finalmente, me permito recordar uno de los pensamientos contenidos en el decálogo del abogado, atribuido al jurista Eduardo J. Couture:

LUCHA:
TU DEBER ES LUCHAR POR EL DERECHO,
PERO EL DÍA EN QUE ENCUENTRES EN CONFLICTO EL DERECHO CON LA
JUSTICIA,
LUCHA POR LA JUSTICIA

Atentamente

Licenciae

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
CIVIL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
SALA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

016184

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 MZO 16 PM 2 03

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDIENTE

*Recibí de un enviado en (3) Fotos con
una copia del mismo*

R.



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SECRETARIA C
PRIN

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 MZO 16 PM 2 36

PRIMERA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

México Distrito Federal a 15 marzo 2012.

SEÑORES MINISTROS DE LA
H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
P R E S E N T E S .

Me permito expresar como mexicano y como abogado (*con cédula profesional número de fecha*), mis puntos de vista respecto del proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por el que se pretende liberar a la ciudadana *absolviéndola* de los delitos de secuestro y otros por los que se encuentra sentenciada, en razón de que como se establece en dicho proyecto, le fue violada su garantía del "debido proceso legal".

El proyecto del ministro *parte* de la premisa de que no está a discusión la culpabilidad o inocencia de la ciudadana *sino* que lo que se encuentra a discusión, es si le fueron respetadas sus garantías constitucionales, especialmente la de "debido proceso legal", la cual consiste en el estricto apego a la ley en el desarrollo tanto de la averiguación previa como del juicio, de lo que se desprenden las siguientes consideraciones:

Desde una postura meramente garantista, es decir aquella que pone por sobre cualquier consideración jurídica el respeto irrestricto a las garantías individuales, postura con la que estoy de acuerdo, pues efectivamente nuestro sistema constitucional y nuestra sistema de control constitucional practicado a través del Juicio de Amparo, se basan primordialmente en el respeto a las garantías constitucionales del gobernado; ahora bien, el hecho de que exista la garantía del "debido proceso legal", obedece a la estimación de que no siempre se observa el

SIN TEXTO



THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE ARMY
WASHINGTON, D. C. 20315

mencionado "debido proceso legal", lo cual indudablemente es indebido, como también es indebido dar a esta garantía un alcance tan desproporcionado que trasciende a afectar las garantías de otros igualmente involucrados en el proceso como son las víctimas y en este caso a todos los mexicanos, las garantías de las víctimas fundamentalmente se encuentran contenidas en el artículo 20 constitucional, el cual es de la misma jerarquía del 14 constitucional donde se encuentra la mencionada garantía de "debido proceso legal", de esta manera tenemos que la garantía del "debido proceso legal", cuando es violada trae como consecuencia que se anule el procedimiento, pero no siempre la violación a la garantía de "debido proceso legal", debe tener como consecuencia la anulación del proceso, sino solamente cuando tal violación o violaciones hayan trascendido al resultado del juicio y así lo ha sostenido esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, de esta manera lo que el proyecto debe examinar a partir de la premisa de que se violó la garantía de "debido proceso legal", es si las violaciones cometidas, trascendieron al resultado del fallo, consecuentemente no todas las violaciones al principio de "debido proceso legal", llevan a una anulación del proceso.

No debemos olvidar que el derecho ante todo es un elemento que hace posible la convivencia social y por lo tanto, debe obedecer dentro de los principios de la justicia a lo que la sociedad demanda y en esto estamos elevando un poco más el debate, ya no se trata de establecer si las garantías individuales de la señora [redacted] fueron o no violadas, creo que de eso no hay duda, de lo que se trata es de establecer si la consecuencia absolutoria que se quiere dar en el proyecto del ministro Zaldivar a las violaciones cometidas en su perjuicio, es lo que la justicia más que el derecho, deben hacer en este caso, no es posible imaginar que la reparación constitucional de las violaciones a las garantías de la señora [redacted] la tornen en inocente o impune, después de que como lo dice el ministro Zaldivar "está comprobada su culpabilidad" a mi parecer esto es demasiado grave para la sociedad, para la justicia y para el derecho".

La conducta violatoria de las garantías de la señora [redacted] es algo que se debe sancionar y se debe castigar a quienes las hayan cometido, con todo el rigor de la ley como dicen los periodistas, ya sea con multas, indemnizaciones, inhabilitación para desempeñar cargos públicos, sujeción a proceso en caso de que tales violaciones impliquen un delito etcétera, "pero de ninguna manera absolver o declarar inocente o impune a quien comete un delito".

La consecuencia social que puede tener la absolución de la señora [redacted] a mi parecer es más grave de lo que hasta ahora se ha dicho, tanto por especialistas como en los medios de comunicación, es indudable que acertada o equivocada la política de combate a la delincuencia organizada emprendida por el actual gobierno,

LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE LA NACIÓN
GUERREROS DEL A
NACIONAL

**SIN
TEXTO**



PODER JUDICIAL DI
SUPREMA CORTE DE JU
SECRETARÍA DE F
PRIMER

ha resultado en un número aproximado de 70.000 muertos; la delincuencia organizada no sólo es el narcotráfico, la delincuencia organizada también es el secuestro, del que participó la señora también es la extorsión en lo que también participó la señora por lo tanto su aprehensión y sujeción a proceso, fue parte del combate a esta delincuencia organizada por cuya causa el país se encuentre ensangrentado, por lo que liberaría en razón de que se violaron sus derechos, en lugar de castigar a quienes le violaron esos derechos, es privar de toda razón las 70.000 muertes que esta lucha ha significado para México.

Es en este último tenor, es en el que me rebelo contra la sola posibilidad ya realizada, de que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un prurito mal entendido a mi juicio, de apego al derecho, este faltando al más elemental sentido de justicia, que es "que quien delinque debe ser castigado" y me refiero a la señora y a quienes le violaron sus garantías, pero no a la sociedad a la que se le está castigando con la impunidad que se pretende para la señora.

No debemos olvidar que nuestra Suprema Corte es de Justicia, lo que significa que la Justicia, es el valor primordial que se debe alcanzar con sus resoluciones.

Finalmente, me permito recordar uno de los pensamientos contenidos en el decálogo del abogado, atribuido al jurista Eduardo J. Couture:

LUCHA:

TU DEBER ES Luchar POR EL DERECHO;

PERO EL DÍA EN QUE ENCUENTRES EN CONFLICTO EL DERECHO CON LA JUSTICIA,

LUCHA POR LA JUSTICIA

Atentamente

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LA FEDERACIÓN
DE LA NACIÓN
DE LOS DE LA
LUCHA

**SIN
TEXTO**



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTI
SECRETAR

8.43



525
526

1^{er} C. J. G.

517/2011

**HONORABLE PLENO DE LA PRIMERA SALA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**

Los integrantes del Colegio

Asociación Civil, teniendo en consideración la importancia trascendental que reviste la preeminencia de nuestro estado de derecho y la ineludible obligación de las autoridades a las cuales se les ha conferido el control y respeto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de constreñir su actuar al estricto respeto de la legalidad y de las normas que de ella emanan, consideramos, que en el caso concreto que actualmente nos ocupa a los mexicanos, relativo al Amparo Directo en revisión número 517/2011 (caso I _____), esta H. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ningún motivo deberá de pasar por alto, la competencia que la ley le otorga, sin invadir esferas jurisdiccionales que no le corresponden, ya que tiene el deber jurídico de circunscribir su actuación a lo que al efecto le impone la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque consideramos fundándonos en la citada ley, que esta Primera Sala únicamente puede resolver en un amparo directo en revisión sobre las decisiones o cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras de diversa naturaleza. Esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exclusivamente debe conocer de aquéllos casos o juicios en los cuales los Tribunales Colegiados hubiesen decidido en amparo directo sobre dos exclusivas o únicas hipótesis:

- a.- Sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la Republica de acuerdo con lo ordenado en la fracción I del 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados o;*
- b.- Cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.*

Todo lo anterior tiene su fundamento en el texto contemplado en el texto del artículo 83 fracción V de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

"Artículo 83.- Procede el recurso de revisión:.....

V.- Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan

20-11-2011
11:00 A.M.
LA SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CUERPOS DE LA SALA

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SECRETARÍA DE
PRIM

sobre la constitucionalidad de leyes federales locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

Siendo de medular importancia la observancia por ese honorable Tribunal de Constitucionalidad el último párrafo transcrito en el que limita insoslayable, ineludible, inobjetable e imperativamente su actuar, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras, como consideramos lo está haciendo en el caso. Asimismo lo anterior también encuentra fundamento en lo ordenado en el texto de los artículos 84 fracción III y 93 de la Ley de Amparo que a la letra señalan:

"Artículo 84.- Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:

II.- Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que se esté en el caso de la fracción V del artículo 83.

Como consecuencia lógica jurídica de lo anterior este órgano colegiado deberá de acatar lo ordenado en el artículo 93:

"Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, la Suprema Corte de Justicia únicamente resolverá sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnados, o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, en los términos del artículo 83, fracción V de esta ley"

CONCLUSION: Consideramos los asociados de este honorable colegio de abogados, una vez que nos hemos impuesto del proyecto de resolución del amparo directo en revisión antes señalado, propuesto por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, disponible al público en la página electrónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual propone otorgar el amparo y ordenar la inmediata y absoluta libertad de la sentenciada. El proyecto referido constituye una franca violación

SECRET





a las normas esenciales que rigen el recurso de revisión, planteado en contra de una sentencia emitida por un tribunal colegiado en el trámite de un amparo directo. Ya que del mismo en lo absoluto se desprende que el ministro se somete a las hipótesis que la ley de amparo le impone y que ya han sido analizadas en el cuerpo de este libelo; lo que es más, consideramos está atendiendo hechos intraprocesales que ya han sido juzgados. POR TANTO, ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, DEBE CONSTREÑIRSE AL ANALISIS DE LA MATERIA CONSTITUCIONAL.

Finalmente es de hacer notar que raya en el absurdo la aclaración hecha por el ministro en el último párrafo de su proyecto de que NO SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS DEL OTRO DETENIDO:

ignorando que se trata de un mismo proceso criminal, y con su aseveración soslaya el principio de continencia de la causa que rige en materia penal y la extensión de las resoluciones que se emitan en el mismo a favor o en contra de cualquiera de los procesados en esa causa penal.

Sin otro asunto que tratar en la presente, nos despedimos de ustedes honorables ministros, quedando a sus finas atenciones para cualquier aclaración al respecto, en nuestra dirección en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco y teléfonos que obran al membrete, así como al siguiente correo electrónico

Guadalajara, Jalisco, 20 de marzo de 2012.

Justicia y Libertad

Arturo Escobar

P:

016242

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 MZO 20 AM 8 43

OFICINA DE SECRETARÍA
JUDICIAL Y NOTARÍA

*Recibo de un escrito en (3) Folios
con copia del mismo*



PREP. JUDICIAL DEL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 MZO 20 AM 9 55

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROM: (

CUADERNILLO RELACIONADO
CON EL AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011.

En veinte de marzo de dos mil doce, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los tres escritos signados por los promoventes, recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el quince y dieciséis y veinte del mes en curso. Conste. -----

México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil doce. -----

Agréguese al cuadernillo citado al rubro los tres escritos signados por los promoventes en calidad de amicus curiae. -----

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ténganse por hechas las manifestaciones contenidas en los escritos de cuenta. -----

Finalmente, en el momento procesal oportuno, agréguese el presente cuadernillo al expediente principal del amparo directo en revisión de mérito. --

Notifíquese. -----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes. -----

22 MAR 2012

Por lista de la misma
fecha, se notifico el acuerdo anterior a
los interesados. Consta,

Siendo las catorce horas de la fecha antes
indicada, y en virtud de no haber compa-
recido los interesados a dichas notificaciones,
se tiene por hecha dicha notificación por
medio de lista. Doy fe.



Por el Jefe
del Departamento
de Justicia

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2001.
Quejosa y Recurrente:

OPINION AMICUS CURIAE.

COMPETENCIA DE LA PRIMERA SALA DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.-
LÍMITE CONSTITUCIONAL DERIVADO DEL
ARTÍCULO 107 FRACCIÓN IX.

H. PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

Ciudadano , Licenciado en , con
Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones, con domicilio en .

con el debido respeto a este Alto Tribunal comparezco a fin de presentar una Opinión Amicus Curiae
estictamente jurídica en relación al proyecto del Ministro Ponente en este amparo directo en revisión, Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, ampliamente difundido a la opinión pública con el objeto de que los interesados en
seguir este asunto tengan conocimiento de su contenido dada la importancia del caso por sus implicaciones
en los derechos humanos de la ciudadanía en general y de los extranjeros que se encuentran en nuestro país,
con el evidente propósito de escuchar puntos de vista al respecto, criterio personal que emito en los términos
de este escrito:

I.- ACLARACION PREVIA.-

Esta opinión constitucional, puramente jurídica, no prejuzga respecto del fondo del caso, de la inocencia o no
de la quejosa recurrente, ni mucho menos desconoce sus derechos humanos que son muy respetables, tanto
mas cuanto que se trata de una persona extranjera, como nuestros paisanos, que en ocasiones padecen la
violación a sus derechos humanos en el exterior: es la opinión de un Licenciado en cuyo
interés reside en que en el país todas las autoridades observen la Ley a fin de que las instituciones funcionen
conforme a nuestra Carta Magna, para el bien de todos, interés que explico con mas precisión en el
comentario final. De acuerdo al criterio que adelante expongo, debidamente fundamentado en la Constitución,
estoy convencido de que esta H. Primera Sala en el amparo directo en revisión del rubro sólo puede
pronunciarse respecto a cuestiones relativas a la presunta errónea interpretación directa de la constitución
realizada el Séptimo Tribunal Colegiado de en Materia Penal del Primer Circuito en la sentencia recurrida que
negó el amparo a la quejosa, y que por ello carece de competencia para resolver cuestiones diferentes, de
cualquier naturaleza o gravedad o trascendencia que puedan ser.

II.- OPINION.-

En términos del Artículo 107 fracción IX de la Constitución, la Suprema Corte no tiene facultades para
resolver en el recurso de revisión que se tramita ante esta H. Primera Sala sobre cuestiones diversas a las

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARIA DEL PODER JUDICIAL

propriadamente constitucionales, como erróneamente se propone en el proyecto, en que el Ministro Ponente se refiere a cuestiones de otra índole, como lo son la presunta ilegalidad del acto reclamado en el juicio de amparo directo y las consecuencias que de ello deriva en los cuatro puntos planteados como resolutivos del amparo, todo lo cual surge de un análisis pormenorizado que realiza de hechos y constancias del expediente del proceso penal, que desde luego nada tienen que ver con un estudio propiadamente de constitucionalidad.

El texto constitucional en la parte conducente, refiriéndose al recurso de revisión en un juicio de amparo directo, expresa:

"la materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiadamente constitucionales, sin poder comprender otras."

El Séptimo Tribunal Colegiado que emitió la sentencia recurrida es el que tiene competencia para conocer sobre la cuestión de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, puesto que al admitir la demanda de amparo directo, en la primera resolución del juicio, se declaró competente para resolverlo, sin que la Suprema Corte haya ejercido la facultad de atracción del mismo que le otorga la fracción V del Artículo 107 constitucional para estudiarlo y resolverlo, omisión por la que en su momento reconoció la competencia de aquél, de manera que no puede ahora desconocerla, tal como se propone en el proyecto que en su texto no hace alusión expresa ni declara que la Primera Sala ejerza o haya ejercido esa facultad de atracción. Además, pero sobre todo, la resolución del Séptimo Tribunal Colegiado por la que se declaró competente para conocer del juicio de amparo directo origen de la revisión, es una resolución firme que no puede modificarse por ningún motivo. No obstante, en el proyecto se estudia y propone resolver sobre cuestiones relativas a una presunta ilegalidad del acto reclamado, concluyéndose que se violaron derechos humanos fundamentales de la quejosa, cuestiones que por su naturaleza intrínseca no son propiadamente constitucionales y, por tanto, no pueden ser materia del recurso de revisión, tal como lo previene la fracción IX del Artículo 107.

Ahora bien, por otra parte, en caso de que exista una cuestión constitucional que deba repararse por una errónea interpretación directa de un precepto constitucional en que haya incurrido el Séptimo Tribunal Colegiado en la sentencia recurrida, lo que procede en ese supuesto es que esta H. Primera Sala declare fundado el recurso de revisión, la revoque y ordene a ese Tribunal que dicte una nueva sentencia con plenitud de jurisdicción, en la que conceda o niegue el amparo de acuerdo a su criterio, pero, eso sí, siguiendo las directrices de la cuestión constitucional que deba repararse, en los términos que resuelva esta H. Primera Sala.

Por último, si bien es cierto que las encomiables reformas al Artículo 1º Constitucional imponen la obligación genérica del Estado mexicano a que se refiere el proyecto en su parte final, y de que todas las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para reparar íntegramente las violaciones cometidas a los derechos fundamentales del gobernado, ello debe ser en la forma que expresamente y sin lugar a duda prescribe ese artículo, que es: **"en los términos que establezca la ley"**. En este caso la ley aplicable es la fracción IX del Artículo 109 Constitucional que establece que en el juicio de amparo directo la materia del recurso de revisión de las sentencias, que es competencia de la Suprema Corte, se limitará a las cuestiones propiadamente constitucionales, sin poder comprender otras. Así, esta H. Primera Sala de la Suprema Corte no puede resolver en el recurso de revisión del rubro sobre cuestiones de legalidad, declarando que se violaron los derechos fundamentales del quejoso, por graves que hayan podido ser las violaciones, sino que únicamente

SIN TEXTC

PODER
SUPREMA
SECO

puede pronunciarse respecto de cuestiones constitucionales, pues de otra forma ampliaría su competencia a límites francamente inconstitucionales, arrogándose en forma arbitraria facultades y competencia que no le corresponden conforme a la ley, en este caso, en detrimento de las del Séptimo Tribunal Colegiado, que está integrado por Magistrados conocedores del Derecho y de la Ley, juzgadores de carrera con una preparación similar a la de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho con todo respeto.

III.- COMENTARIO FINAL.-

Resultaría paradójico que la H. Suprema Corte, para reponer las presuntas violaciones cometidas a una persona extranjera en sus derechos fundamentales consagradas en la Constitución, lo hiciera violando a su vez la propia Constitución, lo cual sería muy comprometido para las instituciones del país atendiendo al contexto nacional e internacional en que ocurre este asunto y al presunto delito que subyace en el fondo del mismo, que ofende gravemente a la sociedad mexicana en momentos tan difíciles en que la delincuencia está desbordada.

Este asunto de las presuntas graves violaciones a los derechos fundamentales de la quejosa debe resolverse conforme a la ley. Esta H. Suprema Corte no debe festinar la resolución del mismo violando la Constitución. En caso de que efectivamente existan las presuntas violaciones graves a los derechos fundamentales de la quejosa, en su momento así lo determinará el Séptimo Tribunal Colegiado en la nueva sentencia que dicte en acatamiento de la orden que le llegue a girar esta H. Primera Sala, atendiendo a las cuestiones constitucionales que se le señalen.

Atentamente.

México, Distrito Federal, a 20 de marzo de 2012.

Lic.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JEFES DE LA PRIMERA SALA
CORTES DE JUSTICIA DE LA FEDERACION
SECRETARIA DE JUSTICIA DE LA FEDERACION
PRIMERA SALA

016322

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 MZO 20 PM 12 24

OFICINA DE CERTIFICACIÓN
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 MZO 20 PM 12 49

PRIMERA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

RECIBI DE UN ENVIADO
SIN ANEXO

en (3) form

SECRETARIA DE
JUSTICIA DE LA NACION
SECRETARIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

533
FORMA A-54

PROM:

CUADERNILLO RELACIONADO
CON EL AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011.

En veinte de marzo de dos mil doce, el Secretario de
Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
con el escrito signado por el promovente, recibido en
la Oficina de Certificación Judicial y
Correspondencia de este Alto Tribunal el veinte del
mes en curso. Conste. -----

México, Distrito Federal, a veinte de marzo de
dos mil doce. -----

Agréguese al cuadernillo citado al rubro el
escrito signado por el promovente en calidad de
amicus curiae. -----

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, ~~se~~ ^{se} consignan por hechas las
manifestaciones contenidas en el escrito de cuenta.

Notifíquese. -----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO
ZALDÍVAR CLEO DE LARREA**, Presidente de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza
y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes. -----

LSJ.

22 MAR 2012

Por lista de la misma fecha, se notifico el acuerdo anterior a los interesados. Consta.

Siendo las catorce horas de la fecha antes indicada, y en virtud de no haber comparecido los interesados a oír notificaciones, se tiene por hecha dicha notificación por medio de lista. Doy fe.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011
QUEJOSA Y RECURRENTE:

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Asunto: Intervención como *Amicus Curiae*

México, D.F., 20 de marzo de 2010.

SR. MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Doctor en , Profesor por oposición de ,
 en la Facultad de de la bajo
 protesta de decir verdad manifiesto no tener ningún interés personal en el asunto al rubro citado,
 por lo que mi intervención sólo se funda en un ánimo puramente científico y en la prevalencia de
 los intereses nacionales.

Respetuosamente deseo atraer la atención de su Señoría sobre el hecho de que utilizando como
 referente objetivo la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia, la notificación
 consular prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, presenta
 algunas notas que han sido malinterpretadas por los observadores multidisciplinarios:

1. No es un derecho humano.² Así lo reconoció la propia Corte Internacional de Justicia, desechando las opiniones consultivas de instancias regionales, que incluso le habían pretendido dar el carácter de *jus cogens*, sin tener el espectro competencial suficiente para interpretar una convención universal, como la que se comenta.
2. "Ni los términos de la Convención ni su objeto y fin permiten pensar que "sin retardo" deba entenderse como "inmediatamente después del arresto o antes del interrogatorio".³
3. La notificación consular es un derecho interestatal. Los ciudadanos en lo individual no tienen interés jurídico para invocar la deficiencia en la notificación, sino que dado que es un derecho exclusivo del Estado, sólo a este le corresponde invocar cualquier reparación bajo este título. En otras palabras sólo el Gobierno de puede dolerse como afectado ante las instancias respectivas.⁴

Debo agregar, que si la notificación consular es interpretada i.e. instaurada como una instancia adicional y exclusiva para los detenidos con una nacionalidad distinta de la mexicana, (práctica que ciertamente no encuentra sustento no sólo en el derecho internacional, sino en el derecho consuetudinario), se terminaría por vulnerar la Doctrina Calvo, afirmada en el derecho interamericano de los Estados nacionales.

Reitero a usted la seguridad de mi alta consideración.

¹ Cfr. (), Judgment, 31 March 2004, I.C.J. Reports, 2004.

² Num. "Whether or not the Vienna Convention rights is not a matter that this Court need decide. The Court would, however, observe that neither the text nor the object and purpose of the Convention, nor any indication in the *travaux préparatoires*, support the conclusion that Mexico draws from its contention in that regard."

"For these reasons, Mexico's fourth and fifth submissions cannot be upheld." nums. 124 *in fine* y 125.

³ *Ad litterim*, numeral 85 *in fine*.

⁴ numeral 153, apartado 6.

016593

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

2012 MAR 21 AM 8 51

2012 MAR 20 PM 8 15

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

OFICINA DE CERTIFICACIÓN
JUDICIAL Y CORRESPONDIENTE

RECIBI DE UN ENVIADO
SIN ANEXO



**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011
QUEJOSA Y RECURRENTE**

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

2010 MAR 20

Asunto: Intervención como *Amicus Curiae*

México, D.F., 20 de marzo de 2010.

SR. MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Doctor en _____, Profesor por oposición de _____
en la Facultad de _____ de la _____ I _____ bajo
protesta de decir verdad manifiesto no tener ningún interés personal en el asunto al rubro citado,
por lo que mi intervención sólo se funda en un ánimo puramente científico y en la prevalencia de
los intereses nacionales.

Respetuosamente deseo atraer la atención de su Señoría sobre el hecho de que utilizando como
referente objetivo la sentencia _____ dictada por la Corte Internacional de Justicia, la notificación
consular prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, presenta
algunas notas que han sido malinterpretadas por los observadores multidisciplinarios.

1. No es un derecho humano.² Así lo reconoció la propia Corte Internacional de Justicia, desechando las opiniones consultivas de instancias regionales que incluso le habían pretendido dar el carácter de *jus cogens*, sin tener el espectro competencial suficiente para interpretar una convención universal, como la que se comenta.
2. "Ni los términos de la Convención ni su objeto y fin permiten pensar que "sin retardo" deba entenderse como "inmediatamente después del arresto o antes del interrogatorio".³
3. La notificación consular es un derecho interestatal. Los ciudadanos en lo individual no tienen interés jurídico para invocar la deficiencia en la notificación, sino que dado que es un derecho exclusivo del Estado, sólo a este le corresponde invocar cualquier reparación bajo este título. En otras palabras sólo el Gobierno de Francia puede dolerse como afectado ante las instancias respectivas.⁴

Debo agregar, que si la notificación consular es interpretada i.e. instaurada como una instancia adicional y exclusiva para los detenidos con una nacionalidad distinta de la mexicana, (práctica que ciertamente no encuentra sustento no sólo en el derecho internacional, sino en el derecho comparado), se terminaría por vulnerar la Doctrina Calvo, afirmada en el derecho interamericano consuetudinario, respecto de la igualdad de los nacionales y extranjeros ante las instancias jurisdiccionales.

Reitero a usted la seguridad de mi alta consideración.

¹ Cfr. _____). Judgment, 31 March 2004, I.C.J. Reports, 2004.

² Num. "Whether or not the Vienna Convention rights is not a matter that this Court need decide. The Court would, however, observe that neither the text nor the object and purpose of the Convention, nor any indication, in the *travaux préparatoires*, support the conclusion that Mexico draws from its contention in that regard."

"For these reasons, Mexico's fourth and fifth submissions cannot be upheld." _____ nums. 124 *in fine* y 125.

³ *Ad litterim*, _____ numeral 85 *in fine*.

⁴ _____ numeral 153, apartado 6.

016594

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

2012 MZO 21 AM 8 52

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

2012 MZO 20 PM 8 16

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

RECIBI DE UN ENVIADO
SIN ANEXO



**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011-
QUEJOSA Y RECURRENTE: F**

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Asunto: Intervención como *Amicus Curiae*

México, D.F., 20 de marzo de 2010.

**SR. MINISTRO GUILLERMO I. ORTÍZ MAYAGOITIA
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**

Doctor en Profesor por oposición de I
en la Facultad de de la bajo
protesta de decir verdad manifiesto no tener ningún interés personal en el asunto al rubro citado,
por lo que mi intervención sólo se funda en un ánimo puramente científico y en la prevalencia de
los intereses nacionales.

Respetuosamente deseo atraer la atención de su Señoría sobre el hecho de que utilizando como
referente objetivo la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia, la notificación
consular prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, presenta
algunas notas que han sido malinterpretadas por los observadores multidisciplinarios:

1. No es un derecho humano.² Así lo reconoció la propia Corte Internacional de Justicia, desechando las opiniones consultivas de instancias regionales, que incluso le habían pretendido dar el carácter de *jus cogens*, sin tener el espectro competencial suficiente para interpretar una convención universal, como la que se comenta.
2. "Ni los términos de la Convención ni su objeto y fin permiten pensar que "sin retardo" deba entenderse como "inmediatamente después del arresto o antes del interrogatorio".³
3. La notificación consular es un derecho interestatal. Los ciudadanos en lo individual no tienen interés jurídico para invocar la deficiencia en la notificación, sino que dado que es un derecho exclusivo del Estado, sólo a este le corresponde invocar cualquier reparación bajo este título. En otras palabras sólo el Gobierno de Francia puede dolerse como afectado ante las instancias respectivas.⁴

Debo agregar, que si la notificación consular es interpretada i.e. instaurada como una instancia adicional y exclusiva para los detenidos con una nacionalidad distinta de la mexicana, (práctica que ciertamente no encuentra sustento no sólo en el derecho internacional, sino en el derecho comparado), se terminaría por vulnerar la Doctrina Calvo, afirmada en el derecho interamericano consuetudinario, respecto de la igualdad de los nacionales y extranjeros ante las instancias jurisdiccionales.

Reitero a usted la seguridad de mi alta consideración.

¹ Cfr.), Judgment, 31 March 2004, I.C.J. Reports, 2004.

² Num. "Whether or not the Vienna Convention rights is not a matter that this Court need decide. The Court would, however, observe that neither the text nor the object and purpose of the Convention, nor any indication, in the *travaux préparatoires*, support the conclusion that Mexico draws from its contention in that regard."

"For these reasons, Mexico's fourth and fifth submissions cannot be upheld." nums. 124 *in fine* y 125.

³ *Ad litterim*, numeral 85 *in fine*.

⁴ numeral 153, apartado 6.

016595

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 MAR 21 AM 8 52

PRIMERA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

2012 MAR 20 PM 8 17

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

RECIBI DE UN ENVIADO
SIN ANEXO



**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011
QUEJOSA Y RECURRENTE:**

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Asunto: Intervención como *Amicus Curiae*

México, D.F., 20 de marzo de 2010.

SR. MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Doctor en Profesor por oposición de
de la de la , bajo
en la Facultad de protesta de decir verdad manifiesto no tener ningún interés personal en el asunto al rubro citado, por lo que mi intervención sólo se funda en un ánimo puramente científico y en la prevalencia de los intereses nacionales.

Respetuosamente deseo atraer la atención de su Señoría sobre el hecho de que utilizando como referente objetivo la sentencia ¹ dictada por la Corte Internacional de Justicia, la notificación consular prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, presenta algunas notas que han sido malinterpretadas por los observadores multidisciplinarios:

1. No es un derecho humano.² Así lo reconoció la propia Corte Internacional de Justicia, desechando las opiniones consultivas de instancias regionales, que incluso le habían pretendido dar el carácter de *jus cogens*, sin tener el espectro competencial suficiente para interpretar una convención universal, como la que se comenta.
2. "Ni los términos de la Convención ni su objeto y fin permiten pensar que "sin retardo" deba entenderse como "inmediatamente después del arresto o antes del interrogatorio".³
3. La notificación consular es un derecho interestatal. Los ciudadanos en lo individual no tienen interés jurídico para invocar la deficiencia en la notificación, sino que dado que es un derecho exclusivo del Estado, sólo a este le corresponde invocar cualquier reparación bajo este título. En otras palabras sólo el Gobierno de Francia puede dolerse como afectado ante las instancias respectivas.⁴

Debo agregar, que si la notificación consular es interpretada *i.e.* instaurada como una instancia adicional y exclusiva para los detenidos con una nacionalidad distinta de la mexicana, (práctica que ciertamente no encuentra sustento no sólo en el derecho internacional, sino en el derecho comparado), se terminaría por vulnerar la Doctrina Calvo, afirmada en el derecho interamericano consuetudinario, respecto de la igualdad de los nacionales y extranjeros ante las instancias jurisdiccionales.

Reitero a usted la seguridad de mi alta consideración.

¹ Cfr. *Judgment, 31 March 2004, I.C.J. Reports, 2004.*

² Num. "Whether or not the Vienna Convention rights is not a matter that this Court need decide. The Court would, however, observe that neither the text nor the object and purpose of the Convention, nor any indication, in the *travaux préparatoires*, support the conclusion that Mexico draws from its contention in that regard."

"For these reasons, Mexico's fourth and fifth submissions cannot be upheld." nums. 124 *in fine* y 125.

³ *Ad litterim*, numeral 85 *in fine*.

⁴ numeral 153, apartado 6.

016596

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

2012 MAR 21 AM 8 52

2012 MAR 20 AM 8 18

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

OFICINA DE CERTIFICACIÓN
JUDICIAL Y CORRESPONDIENTE

RECIBI DE UN ENVIADO
SIN ANEXO



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011
QUEJOSA Y RECURRENTE: I

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

01 01 00 00 00 00

Asunto: Intervención como *Amicus Curiae*

México, D.F., 20 de marzo de 2010.

SRA. MINISTRA OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Doctor en Profesor por oposición de
en la Facultad de de la bajo
protesta de decir verdad manifiesto no tener ningún interés personal en el asunto al rubro citado,
por lo que mi intervención sólo se funda en un ánimo puramente científico y en la prevalencia de
los intereses nacionales.

Respetuosamente deseo atraer la atención de su Señoría sobre el hecho de que utilizando como
referente objetivo la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia, la notificación
consular prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, presenta
algunas notas que han sido malinterpretadas por los observadores multidisciplinarios.

1. No es un derecho humano.² Así lo reconoció la propia Corte Internacional de Justicia, desechando las opiniones consultivas de instancias regionales, que incluso le habían pretendido dar el carácter de *jus cogens*, sin tener el espectro competencial suficiente para interpretar una convención universal, como la que se comenta.
2. "Ni los términos de la Convención ni su objeto y fin permiten pensar que "sin retardo" deba entenderse como "inmediatamente después del arresto o antes del interrogatorio".³
3. La notificación consular es un derecho interestatal. Los ciudadanos en lo individual no tienen interés jurídico para invocar la deficiencia en la notificación, sino que dado que es un derecho exclusivo del Estado, sólo a este le corresponde invocar cualquier reparación bajo este título. En otras palabras sólo el Gobierno de Francia puede dolerse como afectado ante las instancias respectivas.⁴

Debo agregar, que si la notificación consular es interpretada *i.e.* instaurada como una instancia adicional y exclusiva para los detenidos con una nacionalidad distinta de la mexicana, (práctica que ciertamente no encuentra sustento no sólo en el derecho internacional, sino en el derecho comparado), se terminaría por vulnerar la Doctrina Calvo, afirmada en el derecho interamericano consuetudinario, respecto de la igualdad de los nacionales y extranjeros ante las instancias jurisdiccionales.

Reitero a usted la seguridad de mi alta consideración.

¹ Cfr. *I.C.J. Reports*, 2004.

Judgment, 31 March 2004.

² Num. "Whether or not the Vienna Convention rights is not a matter that this Court need decide. The Court would, however, observe that neither the text nor the object and purpose of the Convention, nor any indication, in the *travaux préparatoires*, support the conclusion that Mexico draws from its contention in that regard."

"For these reasons, Mexico's fourth and fifth submissions cannot be upheld."

nums. 124 *in fine* y 125.

³ *Ad litterim*, numeral 85 *in fine*.

⁴ numeral 153, apartado 6.

016597

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 MZO 20 PM 8 19

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

RECIBI DE UN ENVIADO.
SIN ANEXO



PRIMERA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

2012 MZO 21 AM 8 51

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

D. F., a 15 de marzo del 2012.

ADP
517/11
14/3/12

Respetables representantes de los tres Poderes de la Unión y Partidos Políticos.

Nosotros, el pueblo de México, estamos sorprendidos con la noticia que leemos en los periódicos y escuchamos en la televisión. ¿Cómo es posible que quieran exonerar a la DELINCUENTE

¿Acaso nuestras autoridades son las más perr... del mundo?, ¿Qué, los mexicanos (autoridades) no tenemos DIGNIDAD?, ¿Qué pasa con la legalidad, justicia y honestidad?, de plano, ¿Conseguimos de valores?, ¿o de qué conseguimos?, ¿Acaso solo un indio ~~o~~ pequeño tuvo los pantalones bien puestos para ejercer su autoridad LEGAL y JUSTA? ¿por favor señores encargados de cumplir con la Constitución, realicen bien su trabajo, con honradez y justicia. ¿Hay algo muy poderoso tras las ideas de liberar a la...?, ya somos los número uno, en FORDITOS y CORRUPCIÓN, ¿ahora vamos por el número UNO, de ser un pueblo SIN DIGNIDAD? Por favor, ¿Acaso quieren que seamos el hazmerveir de los Franchutes y de todo el mundo?, todos sean o actúen un 10% de las acciones del Gobierno de las Américas, con eso hasta para que nosotros "pueblo", quedemos satisfechos. Por legalidad y DIGNIDAD, dejen a la... que cumpla con su sentencia, así nosotros "pueblo", creemos en ustedes, que abran con legalidad. Piensen en el dolor causado por esta () señora a las familias de los secuestrados. Ojalá nunca sea secuestrado un familiar de los ministros que tienen ideas de liberar a la...
• Sr. Calderón, Utd. es el líder de la Nación Mexicana, ¿Qué piensa al respecto?, ¿cuál cree que es su papel? ¿Cree Utd., que es necesario un cambio radical en la aplicación de justicia?, Por favor... ¡TENEMOS DIGNIDAD!

C.C.P. - PRI

C.C.P. - SUPREMA CORTE DE LA NAL. ✓

C.C.P. - PAN

C.C.P. - P.F.R.

C.C.P. - D.R.D.

C.C.P. - PRESIDENCIA.

C.C.P. - CÁMARA DE DIPUTADOS.

C.C.P. - CÁMARA DE SENADORES.

91- MARZO-2012
10:20 A.M.

016603

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 MZO 21 AM 9 04

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDIENTE

RECIBI POR CORREO, SIN ANEXOS,
CON EL SOBRE QUE SE AGREGA

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

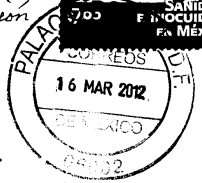
2012 MZO 21 AM 9 52

PRIMERA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

Rancho El Pueblo de
México.

075
66

C. Presidente de la
H. Suprema Corte de Justicia de la Nación
Pino Suárez # 2
Col. Centro, D. F.
C.P. 06610



México Correo
Ordinario



SPM-00-9999999000175904991-0000000000000

¡ Léala por favor es interesante!

Signature Required

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "K. Lee".



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

540
541
FORMA A-54

PROM:

AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011.

En veintidós de marzo de dos mil doce, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con cinco escritos signados por el promovente y copia de uno que carece de firma, con número de registro 016603, recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veinte y veintiuno del mes en curso. Conste. -----

México, Distrito Federal, a veintidós de marzo de dos mil doce. -----

Agréguese los cinco escritos signados por el promovente y la copia sin firma, con número de registro 016603, en calidad de amicus curiae. -----

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ténganse por hechas únicamente las manifestaciones contenidas en los escritos de firma, sin que haya lugar a considerar la copia del ocurso carente de firma. -----

En cumplimiento al proveído del veintiuno del mes en curso, envíense los presentes autos a la Ministra Ponente. -----

AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011.

- 2 -

Notifíquese.-----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO
ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza
y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes.-----

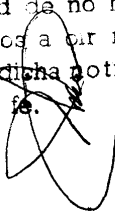


23 MAR 2012

Por lista de la misma
fecha, se notificó el acuerdo anterior a
los interesados. Conste.

LSJ.

Siendo las catorce horas de la fecha antes
indicada, y en virtud de no haber compa-
recido los interesados a las notificaciones,
se tiene por hecha dicha notificación por
medio de lista. Doy fe.



12-08
ADR
5/7/11
P-11

C. MINISTRA OLGA SANCHEZ CORDERO.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
P R E S E N T E.

de edad, profesionista con domicilio en el enunciado al rubro para oír citas y notificaciones, respetuosamente dirige a usted las siguientes disertaciones:

Desde mucho tiempo atrás había venido observando la incultura que priva ya en los comunicadores, eventualmente licenciados en ciencias de la comunicación que tratando de sobresalir en la mayoría de los casos, se deslenguan hasta cometer aberraciones contra moral, buenas costumbres y el derecho.

En los medios radiofónicos ya se dejan escuchar con palabras otrora reservadas al individuo de bajo mundo.

No debe sorprender que los reporteros y periodistas en el afán de lustrar su labor en casos de delincuencia, se sobrepasen a la norma cuando emiten una condena en contra de algún probable responsable que ha sido presentado ante el Ministerio Público erigiéndose en juzgadores.

El caso que se ventila aún y que concierne a la señora [redacted] no es la excepción, todavía existen las películas del caso titulado "presunto culpable" en donde también la policía ministerial ocupa un lugar preponderante en la fabricación de delincuentes, por ejemplo: Cuando un quejoso no se ubica en tiempo, espacio y lugar o cuando no reconoce a su victimario, el policía judicial designado en el caso detiene a alguien y presiona bajo amenazas de voltearle el asunto al quejoso si no dice que el detenido es el responsable de tal o cual hecho delictivo cometido en su agravio; esto es cotidiano en los ministerios públicos del Distrito Federal, tal como lo viví en carne propia.

Los periodistas que cubren la nota roja duplican la situación y nadie les ha dado un escarmiento legal por lo menos; es por ello que veo una sobresaliente razón en el proyecto del Excelentísimo Ministro Saldivar que revierte la sentencia impuesta a la señora [redacted] y, considero que DEBE DEJARSE EN LIBERTAD, para escarmiento y escuela de los periodistas y aprendices de ministerios públicos; para que al menos se dediquen a leer los

SIN TEXTO



IIPG10

elementales libros de derecho, para no seguir cometiendo arrebatos que perjudican la buena imagen de la justicia en México y el honor que le deben a la universidad que les expidió el título.

Algunas personas han emitido opiniones contrarias, como la de la señora ; pero desconocen las picardías que se cometen en los ministerios públicos en el afán de integrar en 48 horas una indagatoria; algunas otras lo hacen por razones políticas.

Por lo anterior, como mexicano consciente y amante de mi país, de la manera mas atenta solicito:

PRIMERO.- Se considere mi opinión a favor del proyecto de dictamen del Ministro Saldivar y,

SEGUNDO.- Sin promover la reposición del procedimiento que se iniciaría desde el Ministerio Público, se determine la libertad inmediata e incondicional de la señora por todos los vicios que contiene el procedimiento desde su detención.

Quedo infinitamente agradecido por la inmerecida atención que se sirva dispensar a esta mi intromisión.

ATENTAMENTE
20 de marzo del 2012

RECEIVED
SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y ENERGÍA
MEXICO
20 MAR 2012

018411

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 MZO 29 PM 12 08

OFICINA DE CERTIFICACIÓN
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibi: de un enviado en (2) Folios

cc:

un anexo en copia simple en (1) Folio

[Handwritten signature]

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 MZO 29 PM 2 29

PRIMERA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE

EDAD
SEXO

DOMICILIO



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS
DURAS O ENMIENDAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ESTADO DE REGISTRO
CLAVE DE ELECTOR
ESTADO DISTRITO
MUNICIPIO LOCALIDAD SECCION

ELECCIONES	FEDERALES
12	15
18	09

LOCALES	09	10	11	12	13	14	15	16	07	08	EXTRAORDINARIAS Y OTRAS
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------------------------

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE LA FEDERACION
SECRETARIA DE LA NACION
ACUERDOS
SECRETARIA SALUD

SIN TEXTO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOCIÓN:

AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011.

En nueve de abril de dos mil doce, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el escrito signado por el promovente, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el veintinueve de marzo del año en curso. Conste. -----

México, Distrito Federal, a nueve de abril de dos mil doce. -----

Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito signado por -----

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin reconocerle personalidad alguna, ténganse por hechas las manifestaciones contenidas en el escrito de cuenta. -----

Devuélvanse los autos a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. -----

Cumplase. -----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO ZALDIVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes. -----

LSJ





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

Oficio DGCVS/JE/0849/2012
México, D. F., abril 3 de 2012

Licenciado

Heriberto Pérez Reyes

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala

Presente

Con fundamento en los artículos 28, 29, 30 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 134, 135, 136 y 137 del Acuerdo General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del nueve de julio de dos mil ocho, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales garantizados en el artículo 6o. constitucional, y con la finalidad de dar respuesta a la solicitud presentada por

el 29 de marzo del año en curso, mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, tramitada bajo el Folio **solicito a Usted, de la manera más atenta, en mi calidad de Titular de la Unidad de Enlace, se verifique la disponibilidad de la información requerida, que a continuación se transcribe, tal y como lo manifestó dicha persona: "Lo que requiero es el escrito de expresión de agravios en el amparo directo en revision 517/2011", de la Primera Sala.**

La solicitante requiere la información en la modalidad de **correo electrónico.**

De encontrarse disponible la información en documento electrónico, ésta podrá ser enviada mediante comunicación electrónica a la siguiente dirección: **unidadenlace@mail.scjn.gob.mx.**

No obstante lo anterior, en caso de que la información no se encuentre disponible en documento electrónico, me permito requerir el cálculo de su costo, conforme a las tarifas aprobadas por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de este Alto Tribunal, o bien, del importe autorizado para su venta al público, a través del formato que fue remitido a la Dirección a su cargo por medio de la Circular CA-DGD-09/06 de fecha 7 de noviembre de 2006.

Por otro lado, en caso de resultar que la información sea clasificada como reservada o confidencial, se deberá contestar el informe fundando y motivando esta clasificación, de conformidad con los artículos 5, 6, 7 y 8 del Reglamento citado, debiendo tomarse en cuenta que conforme a lo previsto en el diverso 30 del Reglamento anteriormente citado, la responsabilidad respectiva recae en ese órgano de la Suprema Corte.

Lo omito manifestarle, respetuosamente, que de conformidad con la normativa antes indicada, el área a su cargo cuenta con el plazo de 5 días hábiles para rendir el informe respectivo, el cual se computa a partir del día hábil siguiente a la notificación del presente oficio.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta consideración.

Atentamente

Licenciado **Jorge Camargo Zurita**

Director General

C.c.p. - Ministerio D.G.C.V.S.

Adjunto

JCZ/CAC/CJ/04/00000000

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS
2012 ABR 3 PM 2 07
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

7 5 79 8 11

SIN TEXTO





2012 ABR 11 AM 10 56

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DE LA NACIÓN

ARTURO ZALDIVAR

C. LIC. JORGE CAMARGO ZURITA.

DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN Y
VINCULACIÓN SOCIAL DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
PRESENTE.

En atención a su oficio número DGCVS/UE/0849/2012, de fecha tres de abril del año en curso, relativo a la solicitud de folio , presentada mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, por

OF. NUM. 296.

respecto a la información consistente en el escrito de expresión de agravios del amparo directo en revisión 517/2011 del índice de esta Primera Sala.

Me permito hacer de su conocimiento que el amparo directo en revisión citado en el párrafo que antecede, se clasifica por el momento como reservado; lo anterior por encuadrar en el supuesto que prevén los artículos 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 7, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Una vez que se dicte la resolución correspondiente, se estará en posibilidad de proporcionar la información solicitada.

México, D. F., a 10 de abril de 2012.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA.

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA

C.c.p. Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.- Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento.

LSJ

ABR 11 10 00 AM 2012
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN Y
VINCULACIÓN SOCIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

SIN TEXTO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

Oficio DGCVS/UE/1052/2012
México, D. F., a 26 de abril de 2012.

Licenciado
Heriberto Pérez Reyes
Secretario de Acuerdos de la Primera Sala
Presente

Por instrucciones del Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de este Alto Tribunal, remito atentamente a Usted, el texto aprobado de la resolución dictada en la **Clasificación de Información** '2012-J, debidamente firmada por los miembros de dicho Comité, derivada de la solicitud presentada por [redacted] mediante la cual se establece lo siguiente:

"PRIMERO. Se confirma el informe del Secretario de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo señalado en la consideración II de esta clasificación.

SEGUNDO. Se confirma la reserva temporal del escrito de expresión de agravios del amparo directo en revisión 517/2011."

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta consideración.

Atentamente

Licenciado Jorge Camargo Zurita
Director General

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
2012 ABR 27 PM 2 07
PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

C.c.p.- Lic. Mario Alberto Torres López.- Director General de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Acceso a la Información y de
Protección de Datos Personales.- Para su conocimiento.
" " " Minutario D.G.C.V.S
" " " Archivo

JCZ/JCA/EC/ign

SIN TEXTO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

**CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
2012-J DERIVADA DE LA SOLICITUD
PRESENTADA POR**

México, Distrito Federal. Resolución del Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de abril de dos mil doce.

ANTECEDENTES:

I. El nueve de marzo de dos mil doce, la peticionaria, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y bajo el folio requirió en modalidad electrónica/vía sistema:

"El amparo Directo en Revisión 517/2011"

II. El doce de marzo de dos mil doce, el Coordinador de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información, una vez analizada la naturaleza y contenido de la petición, determinó prevenir por única ocasión al solicitante en los términos siguientes:

"prevéngase por única ocasión a la peticionaria para que aclare su solicitud, en el sentido de que, precise el documento que desea obtener del Amparo Directo en Revisión 517/2011 de la Primera Sala, es decir, el escrito de expresión de agravios, la resolución definitiva, la totalidad o alguna de las constancias que lo integran..."

El Coordinador de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información, el veintidós de marzo de dos mil doce, hizo del conocimiento de la requirente el citado acuerdo de prevención.

III. El veintinueve de marzo de dos mil doce, la requirente desahogó en la prevención formulada en el siguiente sentido:

"Lo que requiero es el escrito de expresión de agravios en el amparo directo en revisión 517/2011"

IV. El dos de abril de dos mil doce, el Coordinador de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información, una vez analizada la naturaleza y contenido de la petición, de conformidad con los artículos 27 y 31 del REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, acordó la apertura del expediente número **UE-J/282/2012**, para tramitar la solicitud de referencia; asimismo, giró oficio **DGCVS/UE/0849/2012** al Secretario de Acuerdos de la Primera Sala solicitándole verificar la disponibilidad de la información peticionada.



V. En respuesta, el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala, mediante oficio número 296 de diez de abril de dos mil doce, informó:

"...me permito hacer de su conocimiento que el amparo directo en revisión citado en el párrafo que antecede [amparo directo en revisión 517/2011], se clasifica por el momento como reservado; [...] Una vez que se dicte la resolución correspondiente, se estará en posibilidad de proporcionar la información solicitada..."

VI. El doce de abril de dos mil doce, el titular de la Unidad de Enlace, una vez recibido el informe del área requerida y debidamente integrado el expediente **UE-J/282/2012**, lo remitió a la Secretaría de Actas y Seguimiento de Acuerdos del Comité, para que fuera turnado al correspondiente integrante para elaborar el proyecto de resolución respectivo, lo que se realizó mediante proveído de dieciséis de abril del mismo año al Director General de Asuntos Jurídicos; asimismo, en misma fecha se amplió el plazo para responder la solicitud materia de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

este expediente, tomando en cuenta las cargas de trabajo que enfrentan las diversas áreas relacionadas con el tramite y análisis de la información requerida.

CONSIDERACIONES:

I. Este Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales es competente en términos de lo establecido en los artículos 12 y 15, fracciones I y III, del ACUERDO GENERAL DE LA COMISIÓN PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE NUEVE DE JULIO DE DOS MIL OCHO, RELATIVO A LOS ÓRGANOS Y PROCEDIMIENTOS PARA TUTELAR EN EL ÁMBITO DE ESTE TRIBUNAL LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, A LA PRIVACIDAD Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES GARANTIZADOS EN EL ARTÍCULO 6°. CONSTITUCIONAL, para conocer y resolver con plenitud de jurisdicción la presente clasificación de información, ya que la información solicitada fue clasificada como temporalmente reservada.

II. Como se advierte de los antecedentes de esta resolución, la peticionaria solicitó vía electrónica el escrito de expresión de agravios del Amparo Directo en Revisión 517/2011 del índice de la Primera Sala, respecto de lo cual el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala informó que no es posible entregar la información porque en ese expediente aún no se había emitido la resolución que pusiera fin y por ello se trataba de información reservada.

En efecto, con motivo de la clasificación de reserva de la información solicitada, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 3, fracción VI,

en relación con el 14, fracción IV de la LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, que disponen:

“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: (...)

VI. Información reservada: aquella información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los artículos 13 y 14 de esta ley; (...)

Artículo 14. También se considerará como información reservada: (...)

IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado; (...)

Además, debe tenerse presente que el REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL dispone en sus artículos 2°, fracción IX, 5, 6 y 7, lo siguiente:

“Artículo 2. Además de las definiciones contenidas en el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: (...)

IX. Información reservada: La que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley (...)

Artículo 5. Es pública la información que tienen bajo su resguardo la Suprema Corte, el Consejo y los Órganos Jurisdiccionales, con las salvedades establecidas en la Ley.

Artículo 6. Los expedientes de asuntos concluidos del Poder Judicial de la Federación podrán ser consultados por cualquier persona en los locales en que se encuentren y en las horas de labores, cumpliendo con los requisitos que garanticen la integridad de la documentación que contienen, los cuales serán fijados por las respectivas Comisiones de Transparencia.

Artículo 7. Las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones públicas podrán consultarse una vez que se emitan y los términos en





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

que se conceda el acceso a ellas serán determinados, inicialmente, por los respectivos módulos de acceso.

Tratándose de las resoluciones públicas dictadas cuando aún no se emite la respectiva sentencia ejecutoria, el módulo de acceso solicitará a la Suprema Corte, al Consejo o al respectivo Órgano Jurisdiccional, una versión electrónica de aquéllas, siendo obligación de dicho módulo suprimir de ésta, los datos sensibles de las partes y, en su caso, los demás datos personales de las partes (...)

Por otro lado, el primer párrafo del artículo 46 del ACUERDO GENERAL DE LA COMISIÓN PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL OCHO, RELATIVO A LOS ÓRGANOS Y PROCEDIMIENTOS PARA TUTELAR EN EL ÁMBITO DE ESTE TRIBUNAL LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, A LA PRIVACIDAD Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES GARANTIZADOS EN EL ARTÍCULO 60. CONSTITUCIONAL, dispone:

"Artículo 46. La documentación que se genere por los órganos de la Suprema Corte o que se aporte por terceros dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional, investigador, de responsabilidad administrativa o de adjudicación de contrataciones, estará reservada temporalmente hasta en tanto se emita la determinación que les ponga fin, en virtud de la cual, ante cualquier solicitud de acceso se resolverá sobre su naturaleza pública, confidencial o reservada. Tratándose de expedientes judiciales, la clasificación se realizará de conformidad con lo previsto en los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento (...)"

De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que la regla general prevista por la normativa aplicable en materia de acceso a la información bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que debe clasificarse como información reservada aquella contenida en los expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado y, en ese tenor, el reglamento invocado especifica que el análisis sobre la naturaleza pública, reservada o confidencial de las pruebas y demás constancias que

obren en un expediente judicial, puede realizarse hasta que la sentencia respectiva haya causado estado.

Por lo tanto, de acuerdo con lo informado por el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala, relativo a que aún no se emite resolución dentro del expediente de amparo directo en revisión 517/2011, debe concluirse que se trata de un expediente que está en trámite, de ahí que en términos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción IV de la LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL debe declararse información temporalmente reservada, por ende, confirmarse dicho informe, y hasta que se emita resolución definitiva podrá realizarse la clasificación de las constancias que lo integran.

Finalmente, tomando en cuenta el sentido de esta determinación, se hace del conocimiento del solicitante que dentro de los quince días hábiles siguientes al que tenga conocimiento de esta resolución, tiene derecho a interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 37 del REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.



Por lo expuesto y Fundado, este Comité resuelve:

PRIMERO. Se confirma el informe del Secretario de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo señalado en la consideración II de esta clasificación.

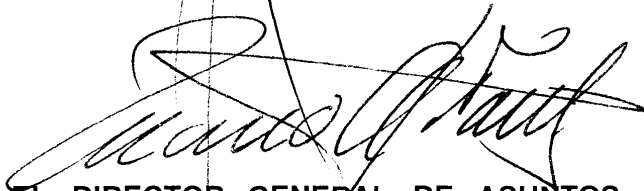


PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

SEGUNDO. Se confirma la reserva temporal del escrito de expresión de agravios del amparo directo en revisión 517/2011.

Notifíquese esta resolución a la Unidad de Enlace para que la haga del conocimiento de la solicitante y del Secretario de Acuerdos de la Primera Sala, así como para que la reproduzca en medios electrónicos de consulta pública.

Lo resolvió en sesión de veinticinco de abril de dos mil doce, el Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de tres votos del Director General de Asuntos Jurídicos en carácter de Presidente y ponente, del Director General de Casas de la Cultura Jurídica y de la Directora General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial. Firman el Presidente y ponente, con la Secretaria del Comité que autoriza y da fe.



EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS, LICENCIADO MARIO
ALBERTO TORRES LÓPEZ, EN CARÁCTER
DE PRESIDENTE Y PONENTE.

Renata Buiron V.

LA SECRETARIA DE ACTAS Y
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS,
LICENCIADA RENATA DENISSE BUERON
VALENZUELA.

SIN TEXTO



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
EXPEDIENTE: 517/2011

**C. MINISTRO PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE LA
H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.**

10 Saka

por mi propio derecho, en mi carácter de víctima del delito de secuestro cometido en mi perjuicio por la quejosa, calidad que se advierte de la averiguación previa y proceso penal de origen, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en calle

ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:

Que tomando en consideración que en la sentencia del Primer Unitario Penal del Primer Circuito Judicial, se condeno a la quejosa a la reparación del daño a favor del suscrito, mismo que según dicha resolución será cuantificable en ejecución de sentencia, por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, incisos b y c de la Ley de Amparo, vengo a solicitar respetuosamente se sirva reconocirme el carácter de **TERCERO PERJUDICADO** en el presente Juicio de Amparo en Revisión, toda vez que en mi carácter de víctima de la quejosa, tengo interés en la subsistencia del acto reclamado y que en su oportunidad quede firmada la condena de reparación del daño a la que fue condenada la quejosa, por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro de delincuencia organizada cometido en mi perjuicio y de otras personas que en igualmente fueron víctimas de dichas acciones, así como de la sociedad mexicana en general, particularmente por lo previsto en el inciso fracción primera del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, **procurar que el culpable no quede impune** y que los daños causados por el delito se reparen.

Me permito apoyar mi atenta solicitud en el siguiente criterio:

Novena Época
Registro: 182282
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIX, Enero de 2004
Materia(s): Penal
Tesis: I.6o.P.65 P
Página: 1636

TERCERO PERJUDICADO EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO PENAL. PARA QUE SE RECONOZCA TAL CARÁCTER AL OFENDIDO O A LA VÍCTIMA Y SE REALICE SU EMPLAZAMIENTO, DEBE SOLICITARLO EXPRESAMENTE.

El artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo establece que en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, tendrán el carácter de tercero perjudicado el ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad proveniente de la comisión de un delito, siempre que dichos actos afecten dicha reparación o responsabilidad. Ahora bien, tratándose de un amparo directo en materia penal, la víctima u ofendido de un delito, que tuvo el carácter de coadyuvante en el proceso penal, debe solicitar expresamente se le reconozca como tercero perjudicado para que se le emplace con este carácter; lo anterior es así, toda vez que en un gran número de procesos penales el ofendido o la víctima no comparecen al proceso, de donde en algunos casos sería imposible su emplazamiento como terceros

*7-junio-2012
2:58 pm*

SIN TEXTO



081130

perjudicados, al acudir el sentenciado al amparo directo contra la sentencia condenatoria aun existiendo condena a la reparación del daño, entre otros motivos, por ignorarse su domicilio o haberse cambiado sin dar aviso a la autoridad, lo que traería una dilación en el procedimiento de amparo, en el que por tratarse generalmente de actos en los que está de por medio la libertad del quejoso, debe buscarse la mayor celeridad en la resolución. Lo antes expuesto se robustece en el sentido de que las alegaciones que pudiera formular el ofendido o la víctima de un delito en el juicio de amparo directo con su carácter de tercero perjudicado no forman parte de la litis constitucional, sino que constituyen simples opiniones o conclusiones de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley reconoce a la demanda, por tal motivo el Juez constitucional no tiene el deber de analizarlas, toda vez que la condena a la reparación del daño como pena pública que no es más que la consecuencia al acreditarse plenamente los elementos del delito imputado y demostrarse plenamente la responsabilidad del procesado en su comisión, de esta forma lo alegado por el tercero perjudicado en nada influiría en el sentido del fallo que se pronuncie, porque al resolverse el amparo directo, el Tribunal Colegiado se limita a confrontar únicamente las consideraciones y fundamentos de la autoridad responsable ordenadora vertidas en el acto reclamado frente a los conceptos de violación, e incluso a suplir la deficiencia de la queja, si ésta se advierte, incluyendo el capítulo de la reparación del daño, sin tomar en cuenta alegato alguno esgrimido por la parte ofendida, pues como ya se dijo ello no forma parte de la litis constitucional. Lo antes expuesto no es obstáculo para que el tercero perjudicado, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo promueva el juicio de amparo en relación a su facultad de impugnar la condena a la reparación del daño cuando estime que ésta afecta sus intereses.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Reclamación 12/2003. 28 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: Ma. del Carmen Villanueva Zavala.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 413/2010, resuelta por la Primera Sala el 13 de abril de 2011.

En estas condiciones solicito se me tenga por apersonándome al presente juicio de amparo directo en revisión con el carácter de TERCERO PERJUDICADO, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Por otro lado, autorizo en los más amplios términos del artículo 27 de la Ley de Amparo al Doctor en Derecho y a los licenciados en derecho y

Por lo expuesto y fundado,

A USTED C. MINISTRO PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA, respetuosamente pido se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos del presente recurso, apersonándome al presente juicio de amparo directo en revisión en mi carácter de TERCERO PERJUDICADO, solicitando que dicho carácter me sea reconocido para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO.- Tenerme por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones o documentos y tener por autorizados a los profesionistas que se mencionan para los efectos que se precisan.

PROTESTO LO NECESARIO

México, D.F. a 4 de junio de 2012.

031130

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 JUN 7 PM 12 39

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibí de un enviado co(2) folios con
una copia del mismo

[Handwritten signature]

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION
2012 JUN 7 PM 2 10
PEREZ SALA
SECRETARIA DE JUSTICIA



**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
EXPEDIENTE: 517/2011**

**C. MINISTRO PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE LA
H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.**

por mi propio derecho, en mi carácter de víctima del delito de secuestro cometido en mi perjuicio por la quejosa, calidad que se advierte de la averiguación previa y proceso penal de origen, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en calle

ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:

Que tomando en consideración que en la sentencia del Primer Unitario Penal del Primer Circuito Judicial, se condeno a la quejosa a la reparación del daño a favor del suscrito, mismo que según dicha resolución será cuantificable en ejecución de sentencia, por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, incisos b y c de la Ley de Amparo, vengo a solicitar respetuosamente se sirva reconocerme el carácter de **TERCERO PERJUDICADO** en el presente Juicio de Amparo en Revisión, toda vez que en mi carácter de víctima de la quejosa, tengo interés en la subsistencia del acto reclamado y que en su oportunidad quede firme la condena de reparación del daño a la que fue condenada la quejosa, por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y de delincuencia organizada cometido en mi perjuicio y de otras personas que igualmente fueron víctimas de dichas acciones, así como de la sociedad mexicana en general, particularmente por lo previsto en el inciso b de la fracción primera del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, **procurar que el culpable no quede impune** y que los daños causados por el delito se reparen.

Me permito apoyar mi atenta solicitud en el siguiente criterio:

Novena Época
Registro: 182282
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIX, Enero de 2004
Materia(s): Penal
Tesis: I.6o.P.65 P
Página: 1636

TERCERO PERJUDICADO EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO PENAL. PARA QUE SE RECONOZCA TAL CARÁCTER AL OFENDIDO O A LA VÍCTIMA Y SE REALICE SU EMPLAZAMIENTO, DEBE SOLICITARLO EXPRESAMENTE.

El artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo establece que en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, tendrán el carácter de tercero perjudicado el ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad proveniente de la comisión de un delito, siempre que dichos actos afecten dicha reparación o responsabilidad. Ahora bien, tratándose de un amparo directo en materia penal, la víctima u ofendido de un delito, que tuvo el carácter de coadyuvante en el proceso penal, debe solicitar expresamente se le reconozca como tercero perjudicado para que se le emplace con este carácter; lo anterior es así, toda vez que en un gran número de procesos penales el ofendido o la víctima no comparecen al proceso, de donde en algunos casos sería imposible su emplazamiento como terceros

SIN TEXTO



perjudicados, al acudir el sentenciado al amparo directo contra la sentencia condenatoria aun existiendo condena a la reparación del daño, entre otros motivos, por ignorarse su domicilio o haberse cambiado sin dar aviso a la autoridad, lo que traería una dilación en el procedimiento de amparo, en el que por tratarse generalmente de actos en los que está de por medio la libertad del quejoso, debe buscarse la mayor celeridad en la resolución. Lo antes expuesto se robustece en el sentido de que las alegaciones que pudiera formular el ofendido o la víctima de un delito en el juicio de amparo directo con su carácter de tercero perjudicado no forman parte de la litis constitucional, sino que constituyen simples opiniones o conclusiones de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley reconoce a la demanda, por tal motivo el Juez constitucional no tiene el deber de analizarlas, toda vez que la condena a la reparación del daño como pena pública que no es más que la consecuencia al acreditarse plenamente los elementos del delito imputado y demostrarse plenamente la responsabilidad del procesado en su comisión, de esta forma lo alegado por el tercero perjudicado en nada influiría en el sentido del fallo que se pronuncie, porque al resolverse el amparo directo, el Tribunal Colegiado se limita a confrontar únicamente las consideraciones y fundamentos de la autoridad responsable ordenadora vertidas en el acto reclamado frente a los conceptos de violación, e incluso a suplir la deficiencia de la queja, si ésta se advierte, incluyendo el capítulo de la reparación del daño, sin tomar en cuenta alegato alguno esgrimido por la parte ofendida, pues como ya se dijo ello no forma parte de la litis constitucional. Lo antes expuesto no es obstáculo para que el tercero perjudicado, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo promueva el juicio de amparo en relación a su facultad de impugnar la condena a la reparación del daño cuando estime que ésta afecta sus intereses.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Reclamación ./2003. 28 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: Ma. del Carmen Villanueva Zavala.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 413/2010, resuelta por la Primera Sala el 13 de abril de 2011.

En estas condiciones solicito se me tenga por apersonándome al presente juicio de amparo directo en revisión con el carácter de TERCERO PERJUDICADO, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Por otro lado, autorizo en los más amplios términos del artículo 27 de la Ley de Amparo al Doctor en Derecho [Firma] y a los [Firma] en derecho [Firma] y

Por lo expuesto y fundado,

A USTED C. MINISTRO PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA, respetuosamente pido se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos del presente curso, apersonándome al presente juicio de amparo directo en revisión en mi carácter de TERCERO PERJUDICADO, solicitando que dicho carácter me sea reconocido para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO.- Tenerme por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones o documentos y tener por autorizados a los profesionistas que se mencionan para los efectos que se precisan.

PROTESTO LO NECESARIO

México, D.F. a 4 de junio de 2012.

SIN TEXTO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOCIÓN:

AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011.

En trece de junio de dos mil doce, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el escrito signado por el tercero perjudicado, recibido en Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el siete del mes en curso. Conste.-----

México, Distrito Federal, a trece de junio de dos mil doce.-----

Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito a que se refiere la razón de la Secretaría signado por el tercero perjudicado, en el que realiza diversas manifestaciones, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados en términos amplios.-----

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ténganse por hechas las manifestaciones contenidas en el escrito de cuenta, por señalado el domicilio y los autorizados que refiere para los fines que menciona.-----

Devuélvanse los autos a la **MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.** --

Notifíquese.-----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes.-----

LSJ.

15 JUN 2012 Por lista de la misma fecha, se notificó el acuerdo anterior a los interesados. Conste.

Siendo las catorce horas de la fecha antes indicada, y en virtud de no haber comparecido los interesados a las notificaciones, se tiene por hecha dicha notificación por medio de lista. Doy fe.



PRIMER JUICIO
PRIMERA CORTE
SECRETARÍA
DE L.

Señora Ministró Olga Sánchez cordero, me pongo a sus órdenes para suplicarle, ya que usted tiene la facultad para llevar el caso de la secuestradora pido que no se extradite ya que cometió muchos delitos en nuestro país.

10 Suka
12:05w
18/JUN/12

Me he informado por ciudadanos de nuestro país que la señora recibió apoyo consular, pero sus autoridades no se comunicaron 24 horas de después.

Yo vi aciertos de la justicia mexicana que el juicio se llevó de acuerdo a la constitución de los estados unidos mexicanos de la señora cometió delitos de amputarles dedos a víctimas y de que las víctimas no se presentaron al juicio las victimas.

En esto le pido que a la secuestradora no se le de amparo ni libertad, que la condena se ratifique y sea ejemplar, por lo tanto reciba saludos de un ciudadano que esta estudiando leyes, soy una persona con discapacidad visual y un ciudadano que le manda esta carta, espero que este bien y espero verla el jueves y entregarle esta misiva a usted y al ministro Juan Meza, Gracias.

Atte.

Un ciudadano Mexicano



SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION
15 JUN 2012
OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

RECIBI DE UN ENVIADO
SIN ANEXOS
ARTURO GUTIERREZ CRUZ

083154

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 JUN 18 AM 10 32

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 JUN 18 AM 11 21

PRIMERA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

RECIBI DE UN ENVIADO:
SIN ANEXO



SECRETARIA DE ACUERDOS
PRIMERA SALA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOCIÓN:

**AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011.**

En diecinueve de junio de dos mil doce, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el escrito del promovente con la impresión de la huella, recibido en Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el dieciocho del mes en curso. Conste. ---

México, Distrito Federal, a diecinueve de junio de dos mil doce. ---

Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito a que se refiere la razón de la Secretaría con huella del promovente, en el que realiza diversas manifestaciones. ---

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ténganse por hechas las manifestaciones contenidas en el escrito de cuenta. ---

Devuélvanse los autos a la **MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.** ---

Notifíquese. ---

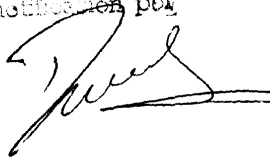
Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes. ---

LSJ.

20 JUN 2012 Por lista de la misma
fecha, se notificó el acuerdo anterior a
los interesados. Conste.



Siendo las catorce horas de la fecha antes
indicada, y en virtud de no haber compe -
recido los interesados a oír notificaciones,
se tiene por hecha dicha notificación por
medio de lista. Doy fé.



SECRETARÍA JUDICIAL
SECRETARÍA DE LA PR

AMICUS CURAIE

511/2011

MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION: JORGE PARDO, JOSÉ RAMÓN COSSÍO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LA REA

PRESENTE

Como ciudadano mexicano, solicitando se reconozca mi derecho bajo la más estricta responsabilidad para formular por escrito, en pleno ejercicio de todas mis Libertades y Garantías Constitucionales. Además por un sentido de libertad, dignidad y solidaridad en razón del caso que viene afectando a la señorita _____, Independientemente de la violación a la Convención de Viena en contra de la Ciudadana _____ y siendo este órgano competente, vengo a que se de entrada a este documento en la vía y forma propuestas, en el entendido tácito de que que no existe relación jurídica con la parte sentenciada. Más sin embargo si deseo exponer lo siguiente.

DIAGNOSTICO - INTRODUCCION -I

Las reclusas en México sufren una doble discriminación, pues además de ser relegendas por estar encarceladas, su condición de mujer las lleva a ser nuevamente discriminadas, porque los penales están pensados y contruidos para hombres, reveló durante esta año un estudio de la Cámara de diputados. De acuerdo con el Centro de Estudios para el Adelanto de Mujeres y la Equidad de Género las mujeres privadas de su libertad representan uno de los grupos sociales más marginados, debido a su condición de género, los espacios donde se compurgan sus penas no son suficientes ni adecuados, ya que es un sistema penitenciario creado por hombres y que responde a necesidades e intereses. Diversas reclusas han denunciado golpes, humillaciones, presiones para tener relaciones sexuales y acoso sexual por parte de personal del centro penitenciario e incluso se ha detectado que existen custodios que permanecen muchas horas dentro de la estancia de algunas internas y que, a cambio de favores sexuales, les permite ciertos privilegios, Se debe agregar a esto la excesiva población penitenciaria masculina ha provocado que las mujeres tengan que estar en lugares inadecuados y violatorios de sus derechos humanos, pues el porcentaje de hombres privados de su libertad han fluctuado

SIN TEXTO



Desde hace varios años del 90 por ciento en comparación con el de las mujeres que ha variado en 5 por ciento. Esta situación ha tenido repercusiones delicadas para las mujeres en virtud de que han sido tratadas con los parámetros masculinos y no desde su condición y posición de género. Estas circunstancias se traducen en un trato "discriminatorio e inequitativo". En el caso de las visitas íntimas se registra un proceso de discriminación hacia ese derecho, ya que la mayoría de las veces se les exige comprobar su relación sentimental, cuando no es así en el caso de los varones. Las mujeres privadas de su libertad se enfrentan a legislaciones androcentricas e inequitativas, así como sistemáticas violaciones a sus derechos. Aun cuando existe normatividad internacional que las protege, como en el caso de la ciudadana

El convenio de Estrasburgo

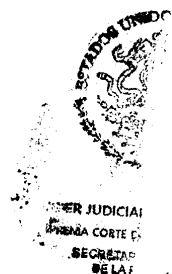
CONSIDERANDO II

Los ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberían tomar en cuenta los criterios fijados en el caso / , al dictar cualquier resolución sobre el amparo a la ciudadana

En el sentido de que el montaje televisivo orquestado por la Policía federal constituyó una violación grave a la presunción de inocencia de la acusada, pero también el derecho a la verdad que tiene la sociedad mexicana. Se que existen ministros que consideran que la resolución del amparo de en contra de la sentencia de 60 años de prisión es aplicable a la tesis que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso (LXXXIX/96) misma que consagró el derecho a la información y determinó que dicha garantía está

"íntimamente relacionada con el respeto a la verdad, que debe ser la base del desarrollo de la conciencia ciudadana. LAS DECLARACIONES DE LAS VICTIMAS Y LOS POLICIAS QUE PARTICIPARON EN EL MONTAJE TRANSMITIDO EN TELEVISION UN DIA DESPUES DE LA DETENCIÓN SON PRODUCTO DE UNA DEFORMACION DE LA REALIDAD PROVOCADA POR LA PROPIA POLICIA FEDERAL así lo declaró en su momento el ministro Arturo Zaldívar. Y esta rigurosa argumentación expone violaciones a los derechos humanos mediante su visión garantista del proceso penal. Yo opino que los derechos de las victimas y de las personas presuntas responsables no se oponen de ninguna forma por lo que es

SIN TEXTO



Obligación de policías defensores, fiscales y juzgadores respetar los derechos humanos. El arresto de [redacted] fue ilegal una farsa mediática montada con fines perversos, si en este caso la única prueba son dichos, como valoramos el hecho de que los testigos no han dado las mismas versiones de los mismos hechos sino según las simpatías por unos o por otros según sea la memoria de cada uno.

Al final viendo el retrato que le hizo en prisión el artista [redacted] creo que debemos ser capaces de sentir, como dice Le Clezio "compasión por la familia de [redacted]" por ella misma y esperar que sea posible en un futuro próximo dar a la ciudadana [redacted] el socorro y la consolación de estar cerca de su familia, lo que ella como todos los seres humanos merece máxime que la señorita [redacted] es inocente. Justicia donde se ponderen las garantías de los procesados, justicia para una sociedad agraviada y humillada por la impunidad que prevalece en el país, precisamente porque no se cumplen los fines del derecho, el episodio de la señorita [redacted] prefigura y ejemplifica, a su manera, el escaso respeto del gobierno federal a derechos y garantías de presuntos culpables y hasta de ciudadanos manifiestamente inocentes en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada por el presidente Calderón y que se ha traducido en un incremento brutal a la violación de los derechos humanos en el país.

DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA UNO
COMANDO III

Señores ministros les pido respetuosamente consideren lo siguiente, en el procedimiento judicial mexicano, además de ser la confesión la prueba reina de las pruebas (aun ahora), puede observarse un énfasis casi exclusivo en la prueba testimonial. En materia Penal, en muchos casos la coartada de defensa se inicia con la declaración de la persona acusada, para después corroborarla con testigos. Para muchos abogados es impensable que su cliente no declare, se queda sin cliente, por eso la práctica de fabricar testigos. Se podría constatar con cientos de expedientes en el ministerio Público, (que quiere demostrar eficacia con números por captura de delincuentes) presiona tanto a testigos

SIN TEXTO



Como a víctimas para que declaren en el sentido que les indique, por lo que es común que la víctima o los testigos primero señalan no poder identificar a la persona agresora, pero después ya se acuerdan con lujo de detalle. ¿porque no se retractan ante el juez? Porque serian acusados de declaración en falsedad que se agrava cuando el o la persona identificada es condenada falsamente. No es un problema de dogmática o teoría penal, ni contraponer el debido proceso con la verdad histórica sino la practica de todo un siglo en el litigio mexicano.

Por ultimo reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional.

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;

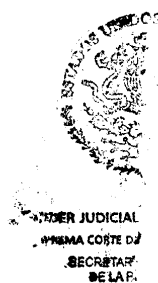
 Convención Americana Sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos

Con fundamento en la convención citada anteriormente y.

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

SIN TEXTO



000000

5

3

1 0 0 1 1 0 0 0 0

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

A USTEDES C. MINISTROS atentamente pido se sirvan.

UNICO. Tenerme por presentado, en términos del presente ocurso.

PROTESTO LO NECESARIO
MEXICO DISTRITO FEDERAL A LA FECHA DEL SELLO



048899

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 SEP 5 PM 3.41

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 SEP 6 AM 9 35

PROYECTO DE
SECRETARIA DE JUSTICIA

III (5) Lm.



SECRETARIA JUDIC
SUPREMA CORTE
SECRETARIA DE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOCIÓN:

AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011.

En diez de septiembre de dos mil doce, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el escrito signado por el promovente, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el cinco del mes en curso. Conste.

México, Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil doce. -----

Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito signado por

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin reconocerle personalidad alguna, ténganse por hechas las manifestaciones contenidas en el escrito de cuenta. -----

Devuélvanse los autos a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. -----

Notifíquese. -----

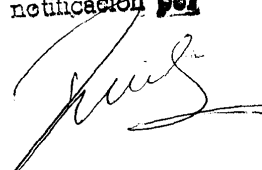
Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes. -----

LSJ

12 SEP 2012 Por lista de la misma
fecha, se notificó el acuerdo anterior a
los interesados. Conste:



Siendo las catorce horas de la fecha antes
indicada, y en virtud de no haber compe -
recido los interesados a oír notificaciones,
se tiene por hecha dicha notificación **por**
medio de lista. Doy fé.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

Oficio DGCVS/UE/3638/2012
México, D. F., a 4 de diciembre de 2012

Licenciado
Heriberto Pérez Reyes
Secretario de Acuerdos de la Primera Sala
Presente

Hago de su apreciable conocimiento que en fecha 29 de noviembre del año en curso, se recibió mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, la solicitud tramitada bajo el Folio

, en la que textualmente se requirió:

"Copia del AUTO Y OFICIO dictados por el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, amparo directo 2010, mediante el cual en cumplimiento al párrafo cuarto del artículo 89 de la Ley de Amparo, remitió tales autos y escrito de agravios a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo del Amparo Directo en Revisión, CUYO AUO Y OFICIO HIZO CONSTAR EXPRESAMENTE SI SU SENTENCIA NO CONTIENE DECISIÓN SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY NI INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, habida cuenta que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho público el contenido de los datos del referido expediente de amparo directo mediante difusión del PROYECTO DE SENTENCIA EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011, QUEJOSA Y RECURRENTE:

MINISTRO

PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA".

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 28, 29, 30 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 134, 135, 136 y 137 del Acuerdo General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del nueve de julio de dos mil once, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales establecidos en el artículo 6o. constitucional, solicito a Usted, de la manera más atenta, en mi calidad de Titular de la Unidad de Enlace, que emita un informe, en el plazo de 5 días hábiles, emitidos a partir del día hábil siguiente a la notificación del presente oficio; en el que determine la existencia de la información, la clasificación de la misma, debiendo fundar y motivar esta tomando en consideración su naturaleza pública, parcialmente pública, confidencial o reservada, en el entendido que, conforme a lo previsto en el diverso 30 del Reglamento anteriormente citado, la responsabilidad respectiva recae en el órgano de la Suprema Corte a su elección; la modalidad o modalidades disponibles, ajustándose, en la medida de lo posible, a la solicitud del petionario, y, en su caso, el costo de su reproducción.

Asimismo, en caso de que no obre el documento en sus archivos, deberá indicar si existe algún otro dato o registro relacionado con cualquiera de los elementos de localización que aportó el petionario, o bien, indique si conoce el área u órgano de la Suprema Corte que pudiera tener bajo resguardo la información de mérito.

Considerando que el solicitante requiere la información en la modalidad de correo electrónico, de encontrarse disponible, podrá ser enviada mediante comunicación electrónica a la dirección:

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE JUSTICIA
PRIMERA COFEE DE
SECRETARÍA
DE LA P.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

unidadenlace@mail.scjn.gob.mx. Sin embargo, en caso de que no se encuentre disponible en dicho soporte, me permito requerir el cálculo de su costo en la modalidad existente, conforme a las tarifas aprobadas por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de este Alto Tribunal, o bien, del importe autorizado para su venta al público, a través del formato que fue remitido al área a su cargo por medio de la Circular CA-DGD-09/06 de fecha 7 de noviembre de 2006.

Asimismo, hago de su apreciable conocimiento que esta solicitud fue remitida al Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, con el objeto de agilizar la entrega de información al solicitante.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta consideración.

Atentamente

~~Licenciado Jorge Camargo Zurita~~
Director General



PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

2012 DIC 4 PM 2 25

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

C.c.p.- Licenciado Rafael Coello Cetina. Secretario General de Acuerdos.- Para su conocimiento.
... Minutario D.G.C.V.S.
... Archivo CETAI

JCZ/AGC/LCA/rcof



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

Dic 7 11 08 AM 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN
CAMARGO ZURITA.
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN Y
VINCULACIÓN SOCIAL DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
PRESENTE.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SRIA. DE ACIDOS.
PRIMERA SALA.

OF. NUM. 24.



En atención a su oficio número DGCVS/UE/3638/2012, de fecha cuatro de diciembre del año en curso, relativo a la solicitud de folio presentada mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, consistente en "Copia del AUTO Y OFICIO dictados por el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, amparo directo /2010, mediante el cual en cumplimiento al párrafo cuarto del artículo 89 de la Ley de Amparo, remitió tales autos y escrito de agravios a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo del Amparo Directo en Revisión CUYO AUO Y OFICIO HIZO CONSTAR EXPRESAMENTE SI SU SENTENCIA NO CONTIENE DECISIÓN SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY NI INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, habida cuenta que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho público el contenido de los datos del referido expediente, de amparo directo mediante difusión del PROYETCO DE SENTENCIA EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011, QUEJOSA Y RECURRENTE:

MINISTRO PONENTE:

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA".

Me permito hacer de su conocimiento que el amparo directo en revisión 517/2011, citado en el párrafo que antecede, se clasifica por el momento como reservada, lo anterior por encuadrar en el supuesto que prevé el artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra dice:

"Artículo 14. También se considera como información reservada:

[...]

IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado."

Ya que al recibir su petición, dicho amparo directo en revisión, se encuentra en estudio en la Ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, por lo que cuando se dicte la resolución correspondiente se

estará en posibilidad de proporcionar la información solicitada.

Lo que comunico a usted para los efectos legales a que haya lugar.

Le reitero mi atenta consideración.

México, D. F., a 6 de diciembre de 2012.

**EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA.**

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.

PODERADO CIENTÍFICO DE INVESTIGACIÓN
SERIALIZA EL DOCUMENTO
12/12/2012 10:00:00 AM
12/12/2012 10:00:00 AM

c.c.p. Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.- Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento.

LSJ





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

Dic 7 11 08 AM 2012

DR. JORGE RAMÍREZ ZURITA.
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN Y
VINCULACIÓN SOCIAL DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
P R E S E N T E .

SRIA. DE ACIDOS.
PRIMERA SALA.

OF. NUM. 24.



LA FEDERACIÓN
STICIA DE LA NACIÓN
E ACUERDOS
ERA SALA

En atención a su oficio número DGCVS/UE/3638/2012, de fecha cuatro de diciembre del año en curso, relativo a la solicitud de folio presentada mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, consistente en "Copia del AUTO Y OFICIO dictados por el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, amparo directo ____/2010, mediante el cual en cumplimiento al párrafo cuarto del artículo 89 de la Ley de Amparo, remitió tales autos y escrito de agravios a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo del Amparo Directo en Revisión CUYO AUO Y OFICIO HIZO CONSTAR EXPRESAMENTE SI SU SENTENCIA NO CONTIENE DECISIÓN SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY NI INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, habida cuenta que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho público el contenido de los datos del referido expediente, de amparo directo mediante difusión del PROYETCO DE SENTENCIA EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011, QUEJOSA Y RECURRENTE:

MINISTRO PONENTE:

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA".

Me permito hacer de su conocimiento que el amparo directo en revisión 517/2011, citado en el párrafo que antecede, se clasifica por el momento como reservada, lo anterior por encuadrar en el supuesto que prevé el artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra dice:

"Artículo 14. También se considera como información reservada:

[...]

IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado."

Ya que al recibir su petición, dicho amparo directo en revisión, se encuentra en estudio en la Ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, por lo que cuando se dicte la resolución correspondiente se

estará en posibilidad de proporcionar la información solicitada.

Lo que comunico a usted para los efectos legales a que haya lugar.

Le reitero mi atenta consideración.



México, D. F., a 6 de diciembre de 2012.

**EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA.**

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.

c.c.p. Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.- Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento.

LS



ORDEN JUDICIAL
SUPREMA CORTE
SECRETARÍA
DE LA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

Oficio DGCVS/UE/3734/2012
México, D. F., a 14 de diciembre de 2012.

Licenciada

Renata Denisse Bueron Valenzuela
Secretaría de Actas y Seguimiento de Acuerdos
del Comité de Acceso a la Información
y de Protección de Datos Personales
Presente

Con base en la solicitud con Folio 1 presentada por I mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, en la que solicita la información relativa a "Copia del AUTO Y OFICIO dictados por el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, amparo directo 12010, mediante el cual en cumplimiento al párrafo cuarto del artículo 89 de la Ley de Amparo, remitió tales autos y escrito de agravios a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo del Amparo Directo en Revisión, CUYO AUTO Y OFICIO HIZO CONSTAR EXPRESAMENTE SI SU SENTENCIA NO CONTIENE DECISIÓN SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY NI INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, habida cuenta que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho público el contenido de los datos del referido expediente de amparo directo mediante difusión del PROYECTO DE SENTENCIA EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011, QUEJOSA Y RECURRENTE:

MINISTRO PONENTE:
ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA." y conforme a lo previsto en el artículo 137 del Acuerdo General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del nueve de julio de dos mil ocho, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales garantizados en el artículo 6º de la Constitución, respetuosamente le remito el expediente **UE-J/1251/2012**.

En ese sentido, considerando que se han recibido las respuestas de los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinados competentes para conocer de la presente solicitud:

a) El Secretario de Acuerdos de la Primera Sala, mediante **OF. NÚM. 24**, señala:

"Me permito hacer de su conocimiento que el amparo directo en revisión 517/2011, citado en el párrafo que antecede, se clasifica por el momento como reservada, lo anterior por encuadrar en el supuesto que prevé el artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra dice:

"Artículo 14. También se considera como información reservada:

[...]

IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado."

Ya que al recibir su petición, dicho amparo directo en revisión, se encuentra en estudio en la Ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, por lo que cuando se dicte la resolución correspondiente se estará en posibilidad de proporcionar la información solicitada."

b) La titular del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, mediante OFICIO No. CDAACL-ASCJN-O-1567-12-2012, señala:



"... se realizó una minuciosa búsqueda del **Amparo Directo en Revisión 517/2011** en el inventario de expedientes que obran bajo resguardo del Archivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del **Amparo Directo /2010** del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el inventario de expedientes que obran en el Archivo de Concentración del Primer Circuito, y no existe registro de su ingreso, es decir, no han sido remitidos dichos expedientes para su resguardo por la Primera Sala de este Alto Tribunal y por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, respectivamente.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 30, párrafo segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 153, fracción I, y 154 del Acuerdo General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del nueve de julio de dos mil ocho, ante la situación que se expone, le solicito de la manera más atenta remita el presente informe al Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de este Alto Tribunal."

Por lo anterior, solicito a usted de la manera más atenta se dé el turno correspondiente a fin de que se elabore el proyecto de resolución que debe emitir el Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 fracción III, 149, 153 y 154 del Acuerdo antes mencionado y el artículo 30 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, **considerando que del informe del Secretario de Acuerdos de la Primera Sala, se desprende que, por el momento no puede proporcionar la información requerida por el solicitante, en virtud de que el amparo directo en revisión 517/2011, se encuentra en estudio en la Ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, por lo que clasifica la información como reservada, hasta que no haya causado estado.**

La titular del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, señala que no cuenta con la información requerida por el solicitante, ya que no le ha sido remita para su resguardo el expediente respectivo, por la Primera Sala de este Alto Tribunal.

No omito manifestarle que se deberá dar respuesta al solicitante a más tardar el día 4 de enero de 2012.

Finalmente, hago de su apreciable conocimiento que, del 15 de diciembre de 2012, hasta el 1 de enero de 2013, no correrán los plazos para el trámite de las solicitudes de acceso a la información, suspendiéndose éstos a partir del próximo 2 de enero de 2013.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta consideración.

Atentamente

Licenciado Jorge Camargo Zurita
Director General

C.c.p.- Lic. Heriberto Pérez Reyes.- Secretario de acuerdos de la Primera Sala.- Para su conocimiento y en su caso atención.
" " " Lic. Diana Castañeda Ponce.- Titular del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes.- Para su conocimiento y en su caso atención.
" " " Minutario D.G.C.V.S.
" " " Archivo

JCZ/CAGS/ldm/mcl

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS
2013 ENE 2 AM 10 16
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

2-enero-13
3:13 pm

572-10w
4/ENE/13
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
EXPEDIENTE: 517/2011

2013 JAN -3 A 10:40

MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN
SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

, promoviendo en mi carácter de **TERCERO PERJUDICADO** en el Juicio de Amparo Directo en Revisión al rubro señalado, mismo que actualmente se encuentra ante esta ponencia a su digno cargo para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, ante Usted C. Ministra con el debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:

Que tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que a la fecha no se ha dictado la resolución correspondiente en el expediente en que se actúa, por medio del presente escrito, en mi carácter de **TERCERO PERJUDICADO** por medio del presente escrito vengo a formular los alegatos siguientes, solicitando respetuosamente sean tomados en consideración en el momento de dictar la resolución que en derecho corresponda.

ALEGATOS:

PRÉAMBULO:

En el presente escrito de alegatos, se expondrán las razones por las que se considera que **NO ES PROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN** promovido por la defensa de la C. Igualmente, en caso de declarar el recurso de mérito procedente, se exponen los argumentos que a nuestro juicio determinan que no es jurídicamente posible que dicha resolución conlleve a declarar la inmediata libertad de la quejosa o bien, se le absuelva de las acusaciones y pruebas que existen en su contra y que fueron desahogadas conforme a derecho. Lo anterior, porque se ha probado fehacientemente durante el desarrollo del proceso penal, que sí participo en los hechos que se le imputan y respecto de los cuales ya fue condenada, siendo oída y vencida en juicio, sobre todo, al haber estado asistida por su defensor y traductor durante el proceso, ante la autoridad judicial competente, no habiendo desvirtuado las pruebas aportadas y no pudo probar su inocencia.

Por ello, aun cuando se demostrara que existieron pequeñas irregularidades que pudieron haber viciado el proceso, dichas deficiencias tienen que ser declaradas **INOOPERANTES E INSUFICIENTES** para declarar la nulidad total del proceso penal de origen. En todo caso y en el supuesto no concedido, se debe declarar la nulidad sólo respecto a la probanza o diligencia viciada, pero no de todo el proceso, y de existir responsables por la comisión de alguna falta administrativa o delito castigado por la legislación penal, durante la detención de la quejosa, se debe castigar ésta conforme a derecho, pero de ninguna forma, este hecho desvirtúa que la quejosa sí participo en la

SIN
TEXT



ANEXO JUDICIAL DE I
SUPLENTE CORTE DE JUST
SECRETARIA DE
DE LA PRIMA

comisión de los delitos que se le imputan, que en efecto estuvimos secuestrados, que se intentó cobrar rescate por nuestra libertad, que fuimos liberados por los agentes de la policía y por tanto, debe ser condenada por los delitos cometidos, como ya fue determinado por tres instancias jurisdiccionales.

2.- PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN.

Antes de analizar el tema de la procedencia del presente Recurso de Revisión, es importante recordar que el Juicio de Amparo Directo, también conocido como amparo de legalidad, de casación o amparo uniinstancial, tiene su fundamento constitucional en las fracciones V y VI en relación a la fracción III inciso a) del artículo 107 Constitucional, y su fundamento legal en los artículos 158, 159 y 160 de la Ley de Amparo. Este medio de control constitucional **procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones durante la secuela del procedimiento que trasciendan a la sentencia y afecten las defensas jurídicas del quejoso; por violaciones en la sentencia o en el fallo mismo.**

En este sentido, **las sentencias dictadas en un amparo directo son inatacables**, por ello se le denomina amparo de única instancia, salvo el caso de excepción expreso de cuando la sentencia de amparo se ocupe de la inconstitucionalidad de una norma general o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, tal y como lo establece la fracción IX del artículo 107 de la Ley Fundamental y la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo, que no es el caso del Juicio de Amparo Directo promovido por en contra de una sentencia definitiva que puso fin al procedimiento penal que se seguía en su contra.

Es decir, de acuerdo con el artículo 158 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías uni instancial procede contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, cuando no sean conformes a la letra de la ley, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho, o bien, cuando comprendan acciones, excepciones y cosas que no fueron objeto del juicio o no las comprenda todas por omisión o negación expresa, comúnmente a este juicio se le conoce como amparo de fondo. Procede también el Juicio de Amparo Directo por violaciones al procedimiento penal que trasciendan al resultado del fallo impugnado, en la inteligencia que si la violación de que se trate no encuadra en ninguno de los supuestos contenidos en las fracciones del citado artículo 160, entonces serán violaciones de imposible reparación, que tendrán que impugnarse en amparo indirecto.

De conformidad con el citado artículo 158, párrafo final del la Ley de Amparo, **en la vía directa se puede impugnar normas generales cuando dentro del juicio surjan cuestiones que no sean de imposible reparación sobre la inconstitucionalidad de leyes, tratados internacionales y reglamentos en el amparo directo que proceda en contra de las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio**; en este tipo de amparo la inconstitucionalidad de la norma no se plantea como acto reclamado, sino a manera de concepto de violación, ya que el acto reclamado sólo lo será la sentencia definitiva.

SIN TEXTO



Ahora bien, de las constancias del expediente se advierte que en su demanda de Amparo Directo, la defensa de la quejosa **sólo expresó conceptos de violación sobre cuestiones de legalidad**, respecto de la sentencia definitiva que resolvió el proceso penal instaurado en su contra. Es decir, sólo expresó conceptos de violación sobre violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación a diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, por violaciones procesales (in procedendo). En ningún momento se hizo valer la inconstitucionalidad de una norma general; ni mucho menos la interpretación directa de un artículo de la Constitución. Entonces, como se ha dicho, conforme lo ordenan la Ley de Amparo y la propia Constitución, **dicho el Recurso de Revisión no se ajusta a la normatividad de la materia y por ello debe declararse improcedente**, como se analizará más adelante.

En efecto, por regla general las sentencias pronunciadas en amparo directo son irrecurribles, a menos que decidan algún punto sobre inconstitucionalidad de una norma general (o leyes) o la interpretación directa de un precepto de la Constitución; supuesto en el que **excepcionalmente procede el Recurso de Revisión** en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX de la Constitución Federal, así como el artículo 83, fracción V de la Ley de la Materia; **por lo que si la sentencia de Amparo sólo se ocupa de cuestiones de legalidad, como en el caso a estudio, no procede dicho Recurso de Revisión.**

Quando en la demanda de Amparo Directo se plantea la inconstitucionalidad de una norma general o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, en contra de la resolución que dicte el Tribunal Colegiado que defina dicha cuestión, **procede el Recurso de Revisión**, debiendo el recurrente transcribir en el recurso la parte de la sentencia impugnada que califique u omita la calificación de la inconstitucionalidad de la ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, como lo ordena el artículo 88 de la Ley de Amparo, de no cumplir con esta exigencia el recurso debe ser rechazado. Es decir, para que proceda el Recurso de Revisión se requiere como condición *sine qua non*, que en la sentencia de Amparo Directo –pronunciada por un Tribunal Colegiado– se aborden cuestiones de inconstitucionalidad alegadas por la quejosa, y en caso de negar el amparo, es procedente la Revisión ante la Corte, hipótesis que de la simple lectura del expediente se advierte que no se actualizan.

En el caso concreto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación **carece de competencia** para conocer del **Recurso de Revisión** interpuesto en contra de la sentencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de fecha 10 de febrero de 2011, pues este medio de impugnación resulta **NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE** de conformidad con el citado artículo 83 fracción V de la Ley de Amparo, **al no actualizarse ninguno de los supuestos que establece dicho artículo** como lo son: contra resoluciones de amparo directo que se pronuncien contra constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, decretando claramente que la materia del recurso, se limitará, exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. Por tanto este Máximo Tribunal se encuentra jurídicamente imposibilitado para analizar los agravios expresados por la

SIN TEXTO



quejosa, en razón de que no se actualizan los extremos de ley para que la Corte analice y resuelva el citado medio de impugnación, por lo que lo legalmente procedente es que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declare IMPROCEDENTE el recurso, **sin entrar al fondo del asunto, ya que lo contrario se estarían violentando los derechos humanos de los ofendidos, trasgrediendo la garantía de Seguridad Jurídica, de Cosa Juzgada y de Imparcialidad.**

Si bien es cierto que de conformidad con la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja en materia penal opera a favor del reo, esto no puede darse de manera absoluta, ni indiscriminada, como para llegar al extremo de admitir un medio de impugnación en un Amparo Directo que no está jurídicamente contemplado para el caso a revisión, ya que de lo contrario se **estaría violando el procedimiento de este medio de control constitucional, dejando a los terceros perjudicados en estado de indefensión.**

Lo anterior resulta claro en la especie, ya que la defensa de no tan sólo **no hizo valer en la demanda de garantías la inconstitucionalidad de una norma general, ni la interpretación directa de algún precepto de la Constitución, sino tampoco transcribió ni la parte de la sentencia que califique la inconstitucionalidad de una norma o la interpretación directa de un precepto de la Constitución,** requisito esencial para la procedencia y admisión del recurso en cuestión. En conclusión, tampoco aquí es correcto alegar la procedencia del recurso en base al principio de suplencia de la queja.

Lo anterior, no obstante que el Recurso de Revisión en el que sea actúa **indebidamente admitido por la Presidencia** del este Alto Tribunal, al mandarlo para su resolución a la ponencia correspondiente, lo legalmente procedente es que en la resolución correspondiente, atendiendo a los mencionados artículos de la Ley de Amparo que se han mencionado, se decretara el desechamiento de dicho medio de impugnación, sin que esta tenga la obligación que estudiar los inatendibles agravios expresados por la recurrente, pues se encuentra jurídicamente imposibilitada para tal efecto en razón de que la verdad legal ya fue determinada por las autoridades judiciales federales competentes y confirmada por el Tribunal Colegiado que conoció del Juicio de Amparo Directo.

OTROS ASPECTOS A VALORAR:

Todos y cada unos de los agravios hechos valer por la defensa de la condenada en el presente Recurso de Revisión, **DEBEN SER DECLARADOS INFUNDADOS POR INATENDIBLES**, tomando en consideración que, como ya se dijo, no es procedente el recurso de revisión en el que se actúa, por lo que no pueden ser analizados, ni valorados por este Máximo Tribunal. Sin embargo a continuación se exponen sucintamente las razones por los cuales deben ser declarados infundados y carentes de sustento jurídico.

1.- DETENCIÓN ILEGAL.

Este argumento, ya fue valorado por el Tribunal Colegiado competente y deberá ser declarado infundado en virtud de que la quejosa

SIN TEXTO



fue detenida en FLAGRANCIA, tomando en cuenta que su detención se llevó a cabo ajustando a la ley mientras portaba un arma de fuego, en compañía de su pareja sentimental , encontrando el personal que los aseguró en el lugar donde cohabitaban que es el ,” a las 3 víctimas del delito de secuestro, quienes más tarde reconocieron y señalaron a como la persona que les daba de comer y que incluso, por lo que al suscrito me dio a escoger entre cortarme una oreja o un dedo para enviárselo a mi padre. Cabe mencionar que el procedimiento de detención estuvo apegado al Marco Constitucional establecido en los artículos 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llevándose un procedimiento en donde no se realizó ninguna violación grave que los dejara en estado de indefensión, en donde las pruebas de cargo se desahogaron conforme a la ley para que el Juez de la causa llegara a la convicción de sentenciarla por los delitos de SECUESTRO, PORTACIÓN Y POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA.

2.- OBLIGADOS A DECLARAR.

Este argumento resulta falso y también ya fue valorado por el Tribunal Colegiado competente, puesto que la quejosa en su declaración ministerial del 08 de diciembre de 2005 negó su participación en los hechos, situación que revela que **NO FUE PRESIONADA NI INDUCIDA PARA DECLARARSE CULPABLE**, pues tuvo plena libertad para declarar lo que deseara y ella decidió NEGAR su participación en los hechos, asistida claramente por supuesto de su defensor y traductor, con lo que se le dio de manifiesto que tuvo la oportunidad de ser escuchada y que pudo declarar y tuvo plena libertad para hacerlo y manifestarse lo que ella deseara. Por lo que es irrelevante el supuesto argumento de que se le obligó a declarar, porque ella declaró lo que a su derecho convino, es decir, negar los hechos, negación que fue desvirtuada por las pruebas desahogadas en la causa penal de origen.

3.- MANIPULACIÓN DE LOS VIDEOS.

Al respecto cabe resaltar que el contenido de los vídeos que fueron transmitidos en un programa de noticias de la televisión abierta mexicana, no fueron tomados en por el Magistrado del Tribunal Unitario ni en beneficio ni en perjuicio de además de que estimó que dichas imágenes no son las que sustentan la resolución impugnada en Amparo; y en todo caso, es responsabilidad penal y/o administrativa de la autoridad que permitió el filme y de la empresa que lo hizo, sin que ello baste como argumento suficiente para dejar en libertad a los sentenciados, pues es de mayor importancia y peso la protección a las víctimas del secuestro, que las violaciones que fueron alegadas por como el montaje, la inasistencia consular y la “retardada” puesta a disposición del Ministerio Público.

4.- PUESTA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La palabra clave en este punto, es la “inmediata” o “sin demora” puesta a disposición del inculcado ante el Ministerio Público, debiendo precisarse que del estudio de las constancias que obran en el expediente, se advierte que tanto como su pareja sentimental , fueron puestos a disposición del Ministerio Público en MENOS DE 6 HORAS; y esto fue debido a que en el momento de que los agentes

SIN TEXTO



aprehensores se dirigían a ponerlos a disposición de la autoridad investigadora, les informó que tenía secuestrados a 3 personas más en el y que si no regresaban por ellos, correrían peligros sus vidas; razón por la que, evidentemente, no se puso a los imputados INMEDIATAMENTE a disposición de la autoridad competente, mediando una causa de fuerza mayor, en este caso la de preservar la vida y la integridad física de los secuestrados, que es un derecho humano más valioso que el de los inculpados de ser puesto a disposición INMEDIATAMENTE de la autoridad, término, que como vemos, resulta subjetivo y que finalmente la demora no fue tan larga y sobre todo fue motivada por una situación de mucho peso.

En relación con este punto tomando en consideración que de lo que se duele la quejosa que no encuadran en el catálogo de violaciones al procedimiento en materia penal del artículo 160 de la Ley de Amparo, que hacen procedente en el amparo directo. En todo caso, por no trascender a la sentencia y afectar supuestamente las defensas jurídicas de la quejosa por ser de imposible reparación, debieron haberse combatido a través del juicio de amparo indirecto; y como no se hizo en el momento procesal oportuno, **ya no deben ser materia de estudio.**

5.- AVISO CONSULAR.

El artículo 128, fracción IV, parte final, del Código Federal de Procedimientos Penales, establece que tratando de detenciones y en el caso de que sea un extranjero, la detención se comunicará *de inmediato* a la representación consular o diplomática que corresponda. En el caso, no es procedente conceder el amparo a la quejosa por supuesta violación formal a este principio, puesto que en el caso concreto Sí se dio aviso a la Embajada al día siguiente de su detención, cuando se obtuvo respuesta de la referida representación; sin embargo, los intentos por comunicarse a la Embajada se dieron desde antes, sólo que no se obtuvo respuesta, sino hasta el día posterior a su detención, sin que ello signifique una violación a su derecho, ya que si bien es cierto, en su primera declaración ministerial careció de **ASISTENCIA CONSULAR**, también lo es, que estuvo asistida de su DEFENSOR Y TRADUCTOR.

De igual modo, debe observarse que la quejosa no fue consignada ante el Juez durante el término constitucional de 48 horas, debido al arraigo judicial decretado por 90 días, el día 10 de diciembre de 2005. De manera que sí el arraigo judicial está permitido constitucionalmente en caso de delincuencia organizada, la demora en el ejercicio penal es un presupuesto que esta jurídicamente justificado.

En todo caso, todas estas formalidades del procedimiento penal, en caso de que no fueren respetadas, traen como consecuencia una **NULIDAD RELATIVA**; en todo caso, y en el **supuesto jamás concedido de que se decida entrar al fondo de un Recurso de Revisión Improcedente y se declare fundado**, procedería solamente un **AMPARO PARA EFECTOS**, para que únicamente se subsanen las supuestas violaciones procesales, sin que se decrete la nulidad de todo el proceso penal, ni el valor de las probanzas ahí aportadas, esto claro, en el caso de no haberse consumado irreparablemente por el cambio de situación jurídica, pero ello no fue considerado en su sentencia dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Primer Circuito.

SIN TEXTO



6.- CUESTIONES DE FONDO EN EL PROCESO DE

Ahora bien, resulta importante destacar que la autoridad judicial federal competente encontró plenamente acreditados los delitos que se le atribuyen a la quejosa, así como su plena responsabilidad al respecto, ya que si bien es cierto, las víctimas no pudieron reconocer su rostro, porque siempre llevaba la cara cubierta, cierto es también, que las víctimas proporcionaron datos para su identificación que fueron plenamente coincidentes, tales como: *su peculiar voz, con acento extranjero, color y textura de sus manos, color de cabello.*

Sumándose a lo anterior, la testimonial a cargo del suscrito que desde mi primer declaración de 09 de diciembre de 2005, que fue ratificada ante la presencia judicial el día 30 de mayo de 2006, narre la forma en que me secuestró y como me tuvieron privado de la libertad, reconociendo a la ahora quejosa como la persona que participó en los hechos, quien además me pinchó un dedo con la intención de cortármelo, de lo cual se dio fe judicial, además de haberla reconocido plenamente cuando la tuve a la vista en la *Cámara de Hessel* el día 09 de diciembre de 2005.

Por lo que toca a los otros 2 secuestrados, víctimas y ofendidos (menor de edad) y de su madre, si bien es cierto, en sus primeras declaraciones dijeron no conocer a no obstante ello, en ampliación de declaración manifestaron las razones por las que no habían mencionado a en el estado del estado anímico en que se encontraban, corrigiendo en el sentido de que si la reconocían como una de las personas que los cuidó en el lugar donde se encontraban secuestrados.

Estos argumentos fueron apoyados por otras testimoniales que concuerdan con las actuaciones policiales y ministeriales, acreditan la participación de en los secuestros, por lo que, consecuentemente, la privación de su libertad derivada de la sentencia reclamada, está justificada y resuelta en definitiva por el Tribunal completamente competente, y los conceptos de violación que la quejosa consideró ya fueron analizados en su totalidad por el Tribunal Colegiado competente.

7.- DERECHOS HUMANOS DE LOS INDICIADOS Y DE LAS VÍCTIMAS.

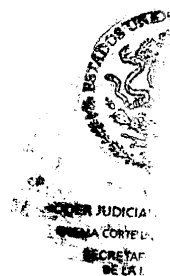
A).- DERECHOS HUMANOS DE LOS INDICIADOS.

Se debe partir del principio de que los derechos humanos que toda autoridad debe observar, son inherentes a la persona y otros a sus derechos procesales.

Se debe diferenciar porque las violaciones a los primeros, es decir, a los derechos humanos personales, traen como consecuencia una *nulidad absoluta* del acto de autoridad (Amparo liso y llano) y los segundos, una *nulidad relativa* (un amparo para efectos) de reponer el procedimiento, que muchas veces no es posible decretar, puesto que cesan sus efectos irreparablemente, en virtud de un cambio de situación jurídica, o etapa procesal, dentro del propio procedimiento penal.

En el caso que nos ocupa, de comprobarse que existieron violaciones en el procedimiento, en todo caso procedería otorgar *Amparo para efectos*, sólo

SIN TEXTO



para subsanar los errores en el procedimiento. Sin embargo, aún y cuando quedara demostrado que existieron tales violaciones y deficiencias procesales, este hecho **no debe anular todo el proceso**, ni puedo servir como argumento para defender la no culpabilidad de pues de las demás pruebas se desprende que efectivamente participó en la comisión de los hechos ilícitos que se le imputan, y declarar su inocencia en virtud de las faltas procesales que se refirieron y que supuestamente vician el proceso, esto traería consigo un negativo mensaje de impunidad hacia la Sociedad y dejaría verdaderamente lacerados y mutilados los derechos de las víctimas.

B).- DERECHO DE LAS VÍCTIMAS.

El principal derecho humano que posee la víctima, consiste en que se le haga justicia ante los agravios de los que fue sujeto y la protección de sus derechos humanos, comprendiéndose, la vida, la libertad, la integridad física y psíquica, así como su patrimonio, por lo que **cuando al imputado se le concede el Amparo liso y llano, por una violación formal, RESULTA INEQUITATIVO, y se convierte en una violación mayor al derecho humano de la VÍCTIMA; que consiste en que se castigue al culpable, englobando ello que se administre justicia por tribunales competentes, en los plazos y términos que fijen las leyes, de forma pronta, completa e imparcial, conforme lo establece el artículo 17 constitucional.**

Por otra parte, las víctimas u ofendidos tiene derechos subjetivos públicos establecidos en el artículo 20, inciso c), de la Constitución General de la República y, consecuentemente, en un juicio de amparo promovido por el activo del delito; tienen el derecho de tener el carácter de terceros perjudicados en el amparo directo e indirecto o en el recurso de revisión relativo que se fallará, ya con las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, y conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo vigente, así como los artículos 1, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos, **reconocen el derecho de las víctimas a ser oídos y a que se les reconozcan sus derechos reconocidos por la normativa interna y en los tratados internacionales.**

En consecuencia, los Tribunales de la Federación tienen el deber de resolver los juicios de amparo, salvaguardando no sólo los derechos humanos del delincuente, **sino también de las víctimas u ofendidos**, y en el caso concreto, deben tener el carácter de terceros perjudicados por tener interés jurídico en todo el procedimiento penal y el derecho a que el Estado les imparta justicia, gratuita, pronta y expedita.

Además, la violación de los derechos humanos de las víctimas genera un deber de reparación adecuada a favor de ellas o de sus familiares, a cargo de los poderes públicos competentes. Asimismo, las víctimas tienen derecho al acceso a la justicia y trato justo por parte de los Tribunales de la Federación como lo ha establecido la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de delitos y del Abuso del Poder, en su resolución 2004, de 29 de noviembre de 1985.

8.- ANALISIS DEL GRADO DE AFECTACION O NO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SEGÚN LA CONVENCION

SIN TEXTO



AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. RESPETO AL DEBIDO PROCESO.

En el caso a estudio a la quejosa desde que fue detenida se le respeto su integridad física y psíquica, entendido esto, en razón de que cuando fue detenida por los elementos de seguridad, en ningún momento le causaron alguna lesión física o moral que afectara su integridad ya que incluso en lo que se ha llamado como "recreación" del momento de la detención, no se observa que recibiera malos tratos o expusiera la detenida haber sido objeto de alguna lesión o tortura.

Sin que ello obste, el hecho que en declaración ministerial y preparatoria la sentenciada refiriera que al momento de ser detenida, los policías captores la golpearon en la cabeza, le jalaban los cabellos y le acariciaron el cuerpo, toda vez que no aportó medio de prueba que lo hiciera evidente, ya que contrario a lo anterior, obra en contraposición el dictamen de estado físico de la sentenciada que le fuera practicado inmediatamente (10:20) de que fuera puesta a disposición del autoridad ministerial (10:16) en el cual se certifica que la antes señalada no presento huellas de lesiones traumáticas externas recientes y sin que a interrogatorio con el galeno manifestara alguna molestia o lesión causada en su detención.

Ahora bien, si bien es cierto que cabría la posibilidad de haber violado sus derechos relativos a su integridad moral, al haber sido exhibida ante los medios de comunicación y de esta forma a la sociedad, señalándola como participante de un secuestro sin que hasta ese momento se le acreditara su responsabilidad en el mismo, ello no le puede restar valor al cúmulo probatorio que sirvió para fincarle responsabilidad en definitiva, toda vez que lo que generaría, sería una responsabilidad para los servidores públicos que lo efectuaron, sin que ello torne ilícito la detención de la sentenciada y todas las pruebas que de ella se obtuvieron, en todo caso, la quejosa tiene los medios legales a su alcance para demandar por la vía civil a las personas que la exhibieron si es que considera que se le causó algún daño moral o de otra naturaleza.

Así, se aprecia en esta parte, similitud con el caso contra Alemania, puesto que en aquel asunto, el Tribunal resolvió que efectivamente la policía había incurrido en excesos, y que serían castigados y así ocurrió, pero que eso no tenía nada que ver con el proceso y con la culpabilidad del indiciado. En este supuesto, ocurre de igual forma, pues la exhibición ante los medios de , suponiendo sin conceder, que hubiera constituido un exceso de las autoridades que participaron, en todo caso habría que fincar responsabilidad para los servidores públicos que lo realizaron, pero su culpabilidad y participación en las actividades delictivas que se le imputan está más que comprobado con todo el cúmulo de pruebas exhibidas durante el Procedimiento.

desde el momento de ser detenida y hasta la conclusión de juicio no alegó a su favor que sufriera tortura, pena, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tampoco le resta valor a los medios de convicción que sirvieron para incriminarla, el hecho de que alegara a su favor que fue golpeado al interior del

SIN TEXTO



" el día que fueron detenidos, sin embargo su codetenido nada refirió al médico que lo dictaminó respecto de las lesiones que presentó y que tardaban en sanar menos de quince días, y ante la autoridad ministerial manifestó expresamente no ser su deseo querellarse por la lesiones que presentaba en ese momento.

No obstante lo anterior, circunstancialmente debe tomarse en consideración que l al rendir su deposado ministerial acepta su participación en diversos secuestros y que efectivamente el " se utilizaba como domicilio para tener privadas de la libertad a sus víctimas.

También debe observarse que las víctimas de secuestro y manifestaron que fueron rescatados de su cautiverio, el día 09 de diciembre de 2005, del " domicilio rentado por y que venía compartiendo desde meses atrás con

Por lo que desde ese momento, tuvo conocimiento que los diversos delitos (Delincuencia Organizada y Privación Ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro) que se le imputaban, los cuales están considerados por la Ley como graves, (artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales), por ende, no tenía derecho a gozar del beneficio de su libertad provisional bajo caución.

El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente en la época de los hechos, en su fracción primera, establecía que el imputado que en todo proceso del orden penal, puede solicitar de manera inmediata se le otorgue su libertad provisional bajo caución siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad la ley expresamente prohíba conceder ese beneficio; dispositivo Constitucional que guarda relación con el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, igualmente vigente en la época de los hechos, deponía entre otras cosas, que el delito de Delincuencia Organizada y el de Privación Ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro son considerados como graves, luego entonces la quejosa no podía haber obtenido su libertad provisional al disponerlo así las leyes legalmente expedidas con anterioridad al hecho, al encontrarse vigentes y regir el hecho realizado bajo esa vigencia.

Se reitera en el caso de la sentenciada l, su detención no fue arbitraria ya **que al momento de ser detenida se le encontró en flagrante delito en posesión de artefactos bélicos** y en forma inmediata al conocerse por parte de los elementos captores de su participación en la privación ilegal de la libertad de diversas personas, fue puesta a disposición de la autoridad ministerial.

Así, al ser detenida tuvo que ser sometida a prisión preventiva, una vez que la autoridad ministerial la pusiera a disposición del Juzgado de conocimiento, quien al momento de resolver su situación jurídica determinó que había elementos suficientes para sujetarla a proceso penal, lo cual en nuestro sistema penal tiene como consecuencia el encarcelamiento, por así preverlo el artículo 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos

SIN TEXTO



Mexicanos, vigentes en la época de los hechos que en esencia señalan que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva por orden de un Juez, el cual en forma oficiosa lo realiza en los casos de delincuencia organizada.

Una vez que la quejosa se puso a disposición de la autoridad ministerial se le hizo de su conocimiento las razones y delitos por las que fue detenida previo a tomarle su declaración ministerial de 09 de diciembre de 2009, lo cual consta en constancia recabada ante el agente del Ministerio Público de la Federación quien actuó con testigos de asistencia, el defensor público Federal que asistió a la sentenciada y el perito traductor que se le proporciono en el acto de la diligencia.

No hay que olvidar que al momento de ser detenida (instantes después de las 5:30 am) en compañía de quien al ser trasladados ante la autoridad ministerial les refirió a sus captores que debían regresar al " porque en ese lugar tenían privadas de su libertad a unas víctimas, porque de no ser así sus cómplices tenían instrucciones de privar de la vida a las víctimas, por lo que se solicitó más apoyo policial para trasladarse a ese lugar, (7:15 am) del cual permitió el acceso lográndose el rescate de , y , de ahí que posteriormente fueron trasladados a las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (10:16 am) para que los detenidos y las víctimas rindieran su declaración sobre los hechos.

Se destaca que la inmediatez a que se refiere el artículo 20 constitucional, para poner a disposición de la autoridad competente al indiciado, en ningún momento se violenta en contra de la sentenciada, ya que debe tomarse en consideración el tiempo de espera que realizaron los elementos de seguridad para recibir el apoyo y poderse trasladar al domicilio en el que se encontraban las víctimas, el tiempo que llevó trasladarse de un punto geográfico a otro, el tiempo que se invirtió para inspeccionar el domicilio y el tiempo que se lleva para trasladar a las Víctimas e indiciados ante la autoridad ministerial, por lo que no puede atenderse a un sentido estricto el termino inmediato, debido a las inclemencias y complicaciones que puede revestir poner ante una autoridad al responsable de un ilícito.

El 03 de marzo de 2006, el agente del Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal contra la sentenciada, haciendo así del conocimiento al Juez de instrucción su probable participación en los delitos de secuestro y delincuencia organizada, solicitando en su caso librara el mandamiento de captura lo que hizo así al siguiente día y cumplimentándose el mismo, el ocho de del mismo mes y año, día en que la autoridad judicial calificó de legal la detención de la sentenciada y la sometió proceso el once de esa misma anualidad, al decretarle auto de plazo constitucional por los mismos delitos consignados.

Luego entonces a si tuvo acceso ante el Juzgado de conocimiento para que calificara en su caso si su detención era considerada ilegal y en su caso dejarla en libertad, lo que no aconteció al calificar de legal su detención y posteriormente sujetarla a proceso. No

SIN TEXTO



obstante lo anterior, la sentenciada tuvo la posibilidad de recurrir la anterior determinación ante un Tribunal de Alzada o de Control Constitucional, derecho que nunca hizo valer.

En el caso concreto, a _____ hasta antes de dictarse sentencia firme, ésta fue considerada inocente y tratada como tal, en todas las fases del proceso penal, revirtiendo la carga de la prueba al agente del Ministerio Público de la Federación, quien aportó y robusteció las pruebas que la inculparon en definitiva, derecho que le permitió a ella, ofrecer las probanzas que desacreditaran su culpabilidad.

Sin embargo, con el cúmulo probatorio recabado en las etapas de investigación y durante el desarrollo del proceso, en el que se desahogaron las diversas pruebas ofrecidas por las partes, **se estableció legalmente su culpabilidad, al ser considerada responsable de los hechos imputados**, toda vez que el 25 de abril de 2008, el entonces Juez conocedor de la causa (Juez 5° de Distrito en el D.F.), le dictó sentencia condenatoria por la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada, Privación Ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro (en agravio de 4 víctimas), Portación y Posesión de Arma de Fuego, Posesión de cartuchos, ambos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, imponiéndole la pena total de noventa y seis años de prisión y 1475 días multa.

El 02 de marzo de 2009, el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de apelación interpuesto por _____ y su defensa particular, confirmó su responsabilidad penal respecto a los delitos de Delincuencia Organizada, Privación Ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro (en agravio de 3 víctimas) y Portación de Arma de Fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, absolviéndola de los delitos restantes, imponiéndole así la pena total de setenta años de prisión y 6400 días multa. **Resolución que conforme a la Constitución Federal y la Ley de Amparo, fue combatida por la sentenciada en amparo directo 2010, ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, quien el 10 de febrero de 2011, resolvió negar el amparo a dicha quejosa, después de analizar los conceptos de violación esgrimidos.**

9.- RESPETO A LOS DERECHOS DE

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

Desde el primer día en que _____ fue puesta a disposición de la autoridad ministerial (_____), por ser considerada probable responsable de la comisión de los delitos que se le imputaron, y al rendir su declaración inicial, estuvo asistida por un Perito Profesional en materia de traducción del idioma _____ el cual fue designado por la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, para estar presente y asistir a la

SIN TEXTO



sentenciada en dicha diligencia, por ser ésta de nacionalidad .
Asimismo dentro de su declaración preparatoria y en el desahogo de las
diversas diligencias llevadas a cabo ante el Órgano Jurisdiccional, fue
asistida por un perito traductor en el idioma Español-
Español. -

En esta sentido, también es cierto que dentro de su
declaración ministerial (), manifiesta que comprendía y hablaba el
idioma también es que, eso no fue óbice para las diversas
autoridades conocedoras de los hechos, que le asignaran al Perito
Traductor, para que la asistiera en las diferentes actuaciones procesales y
pudiera comunicarse correctamente tanto con su abogado, como con el juez,
asumiendo plenamente su defensa tanto material como técnicamente,
además que siempre se veló para que perdurara ese canal de
comunicación.

**b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación
formulada.**

A partir del inicio de la investigación penal, se le comunicó a
con precisión y detalle la acusación formulada en su
contra, así como las razones que llevaron a la autoridad investigadora a
considerarla probable responsable de los hechos que se le atribuían, así
como los motivos que presumían su participación, los indicios y medios
probatorios; sobre todo la determinación legal que se le dio a los hechos, por
los cuales fue investigada.

En consecuencia al término de la etapa procesal y siendo desahogado el
cúmulo probatorio existente en la causa, la multireferida sentenciada fue
señalada penalmente responsable de la comisión de los ilícitos de
Delincuencia Organizada, Privación Ilegal de la Libertad en la
modalidad de Secuestro y Portación de Arma de Fuego de uso
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

**c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para
la preparación de su defensa.**

En efecto, al momento en que la defensa de tomo protesta
del cargo, tuvo el tiempo y los medios adecuados, para desvirtuar los hechos
que le fueron imputados a su representada, tan es así que pudo acceder a
documentos y pruebas para poder con ello garantizar una adecuada
defensa, y poder contrarrestar los medios de convicción existentes por parte
de la Representación Social de la Federación.

Ahora bien, durante el proceso y ya contando la quejosa de mérito con
Defensa Particular, misma que también tomo protesta del cargo como tal,
fue informada con anticipación de las actuaciones judiciales, para poder
participar en el desahogo de cada una de ellas, así como también, en su
oportunidad tuvo acceso al expediente judicial, justamente con el propósito
de examinar en cualquier estado del proceso, las pruebas que obraban
dentro del mismo, y con ello contradecir los hechos que le fueron imputados
a su representada.

SIN TEXTO



EL PODER JUDICIAL
PRIMA CORTE DE
SECRETARIA
DE LA PI

Aun y cuando nuestra ley adjetiva federal en su artículo 147, es clara en señalar que la instrucción deberá terminar en el menor tiempo posible, cuando exista auto de formal prisión y el o los delitos tengan señalada una pena máxima que exceda de dos años de prisión, es de observarse que si el proceso duró más tiempo, fue porque la sentenciada

en su momento procesal oportuno renunció a los plazos establecidos en la ley de la materia, los cuales le permitieron desahogar las pruebas por ella ofrecidas.

d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.

Al momento en que , compareció ante la autoridad ministerial, por la probable comisión de los delitos que le fueron imputados, fue enterada de sus derechos, así como de los hechos que se le imputaban y de las personas que depusieron en su contra, rindiendo el 09 de diciembre de 2005 su declaración ministerial, en la cual tomó la decisión de nombrar al Defensor Público Federal, para que la asistiera durante el desarrollo de dicha diligencia, pudiendo comunicarse con éste libre y privadamente, antes, durante y después de la citada diligencia.

Sin pasar por desapercibido que durante la instrucción la sentenciada nombro defensor particular para la asistiera en el desarrollo de las diversas diligencias llevadas a cabo ante el Órgano Jurisdiccional.

Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

Aun y cuando , no nombrara defensor para que la asistiera cuando rindió sus declaraciones ante la autoridad ministerial y el Órgano Jurisdiccional, por el simple hecho de tener la calidad de imputada, tiene el derecho irrenunciable a que el Estado de manera oficiosa le nombrara Defensor para que la asista en las diligencias a desahogarse. Lo que en el presente caso a estudio no sucedió, toda vez que la sentenciada de mérito nombró Defensa Pública para su ministerial y la Particular para ser asistida durante la secuela procedimental.

f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

Precisamente en la etapa de instrucción e inmediatamente después de haber resuelto la situación jurídica de la defensa particular de ésta, ofreció sus respectivas probanzas, la cuales fueron admitidas por el Órgano Jurisdiccional.

Admitidas que fueron las mismas, el Juez conocedor de la causa auxilió para lograr la comparecencia de los testigos de cargo y descargo, ofrecidos por las partes; seguido que fue lo anterior, y agotadas que fueron las medidas tendientes a localizar y procurar la comparecencia de los testigos, se

SIN TEXTO



procedió al desahogo de dichas probanzas, diligencias varias en las cuales, al momento de la participación de la defensa, ésta tuvo el derecho adecuado y eficaz para examinar a los testigos, sin que se deje atrás los demás elementos de prueba desahogados, mismos que en su conjunto, no lograron desvirtuar la acusación ministerial que sirvió de base para dictar sentencia condenatoria a

g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

De las constancias de autos se advierte que a la quejosa, estando a disposición de la autoridad ministerial antes de rendir su primigenia declaración, se le comunicó detalladamente el hecho objeto de imputación, las pruebas existentes y las disposiciones penales aplicables, por consiguiente fue exhortada para conducirse con verdad, sin embargo al momento en que el Órgano Investigador le hace del conocimiento los hechos que se le imputaban negó los mismos, además de argumentar no saber las actividades ilícitas desarrolladas por su entonces pareja sentimental (coprocesado).

De lo que se concluye que la sentenciada tuvo el poder de decisión sobre su propia declaración, en la cual estuvo asistida por un defensor que participo antes y durante dicha diligencia, teniendo con ello el derecho a la no autoincriminación, mismo que ocurrió ya que la sentenciada se negó a declarar los hechos, a declararse culpable o a confesar los mismos.

h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

La sentencia condenatoria dictada el 25 de abril de 2008, por el entonces Juez Proveedor de la causa (Juez 5º de Distrito en el D.F.), en la que resolvió que es penalmente responsable de la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada, Privación Ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro, Portación y Posesión de Arma de Fuego, Posesión de cartuchos, ambos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, fue recurrida por la ahora quejosa.

Por lo que atento a lo anterior el 02 de marzo de 2009, el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de apelación confirmó su responsabilidad penal respecto a los ilícitos de Delincuencia Organizada, Privación Ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro (en agravio de 3 víctimas) y Portación de Arma de Fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, absolviéndola de los delitos restantes, imponiéndole así la pena total de setenta años de prisión y 6400 días multa.

Resolución que a su vez fue combatida por la sentenciada en amparo directo /2010, ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, quien el 10 de febrero de 2011, resolvió negar el amparo a dicha quejosa.

De lo anterior se advierte que, durante todas las etapas del proceso y dentro del término de ley, la sentenciada

SIN TEXTO



tuvo derecho a recurrir las diversas resoluciones emitidas en su contra, permitiendo con ello que las mismas pudieran ser revisadas por un Juez o Tribunal distinto y uno más de Control Constitucional.

i). La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

durante toda la secuela procedimental negó los hechos que le fueran imputados por el Órgano Investigador, aun así siempre se ha manifestado inocente, desde su primigenia declaración hasta la ampliada ante el Órgano Jurisdiccional. Cabe señalar que en ningún momento realizó confesión alguna respecto a los ilícitos por los que fuera condenada.

Por lo que ante tal negativa, le revirtió la carga probatoria al agente del Ministerio Público de la Federación, quien acreditó su plena responsabilidad en los hechos que se le imputaron.

j). El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

, por sentencia de 25 de abril de 2008, fue declarada penalmente responsable de la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada, Privación Ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro, Portación y Posesión de Arma de Fuego, Posesión de cartuchos, ambos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, resolución que fue combatida y el 02 de marzo de 2009, el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió confirmó su responsabilidad penal respecto a los ilícitos de Delincuencia Organizada, Privación Ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro y Portación de Arma de Fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, absolviéndola de los delitos restantes. Inconformándose con la anterior resolución interpuso amparo directo /2010, ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, mismo que el 10 de febrero de 2011, resolvió negar el amparo a dicha quejosa.

K). El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Todas las diligencias desahogadas durante el proceso penal que le fue instruido a , fueron llevadas a cabo de manera pública, es decir, sin que se restringiera el acceso al público, fomentando con ello la transparencia e imparcialidad del asunto en específico, además de las decisiones que se pudieran tomar en un momento dado, sin dejar a un lado la confianza de las partes procesales.

CONCLUSIONES RESPECTO DE LAS PRUEBAS.

De las pruebas que existen en el expediente de manera indubitable y directa se acredita sin lugar a dudas lo siguiente: Que las personas fueron secuestradas durante un periodo determinado, que la cuenta del número telefónico que se usaba en el estaba a nombre de y

SIN TEXTO



✓

✓

✓

✓

desde ahí hizo diversas llamadas telefónicas, incluso a Francia, que vivía en el _____ desde nueve meses antes de su detención, que en ese _____ donde vivía y su pareja se desarrollaron los secuestros de _____ y _____, mismos que fueron liberados el día 9 de diciembre de 2005, que _____ veía como se compraba la comida que se consumiría por los residentes de la casa mencionada y ésta comida era en cantidad muy superior a la que puedan consumir dos personas (_____ y ella).

Como consecuencia de lo anterior se puede demostrar indiciariamente, mediante indicios graves, unívocos y concordantes que permiten concluir de acuerdo a todas las teorías, a la racionalidad y a la experiencia que no podía dejar de conocer que ahí se celebraron los secuestros.

Todos estos argumentos que prueban de manera más allá de toda duda razonable, se entrelazan y complementan con argumentos a los que el proyecto del Ministro Zaldívar les pretende quitar todo valor probatorio y que son las declaraciones de las víctimas que se encuentran en las páginas de su proyecto de sentencia, y que demuestran lo siguiente:

1. Se encuentra mediante prueba directa, indirecta, y diversos testimonios únicos, claros y concordantes que _____ participó en los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

2. Para llegar a la conclusión anterior no es necesario, de ninguna manera tener en consideración ninguna prueba viciada. Ya que las declaraciones de los hechos probados son concluyentes, las declaraciones de los testigos son posteriores a los hechos.

3. Todas las pruebas viciadas pueden ser eliminadas y aun así la convicción del juzgador sobre la participación de _____ se sostiene.

OTROS CASOS INTERNACIONALES QUE SE PRETENDEN COMPARAR AL ASUNTO

CASO

Entre las muchas personas sentenciadas a muerte en los Estados Unidos, hay cincuenta y dos de nacionalidad mexicana. Todas ellas cometieron crímenes en territorio norteamericano y fueron halladas culpables por distintos tribunales y conforme las pruebas que presentaron varios fiscales.

Pero esos presos también tienen otro punto en común: no fueron informados, sin demora, de sus derechos a la protección consular, y a todos se les condenó a morir sin haber podido recibir el beneficio de la asistencia legal que podía brindarles el país donde nacieron.

Nueve de estos mexicanos eran adolescentes al momento de su arresto. Casi todos poseen escasa o nula educación formal y, por tanto, al momento de su aprehensión carecían de las herramientas para solicitar la asistencia consular a la que tenían derecho y que, de haberla recibido, pudo significar para ellos la diferencia entre la vida y la muerte.

SIN TEXTO



En virtud de esa falta de intervención consular que merecían por ley, en tanto detenidos y sometidos a proceso penal, el Estado mexicano llevó su reclamo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas con sede en la ciudad holandesa de La Haya.

Este proceso judicial conocido como el "Caso *Es*", es, en realidad, continuación de la Opinión Consultiva solicitada por México a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En aquella ocasión el tribunal regional decidió en favor del concepto de dignidad del hombre, consagrando un nuevo derecho humano fundamental: el derecho a la asistencia consular desde el principio de la detención de un no nacional en el territorio de un Estado firmante de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1969.

Durante el transcurso de este caso, en febrero del 2003, la CIJ ordenó de manera vinculante una serie de medidas provisionales dirigidas a los EE. UU. La más trascendente, prohibiéndole el señalamiento de fecha de ejecución de tres, de los cincuenta y dos reos mexicanos a los que se les había infringido el derecho de contactarse con el consulado más próximo de su país.

Durante el proceso, México argumentó que este precepto no se respetó en ninguno de los juicios que condujeron a la pena capital a sus cincuenta y dos connacionales. E inclusive aseguró que de haberse notificado a tiempo, y si la representación consular hubiera procedido en forma oportuna, muy probablemente el sentido de la sentencia habría sido otro. De allí el agravio sufrido, puesto que como país fue afectado en sus derechos cuando Estados Unidos lo privó de otorgar protección consular a sus ciudadanos.

Estados Unidos se defendió a través del equipo que comanda descendiente del ex presidente del mismo nombre, quien se desempeña como consultor jurídico del Departamento de Estado. Y en ese marco llegó al extremo de pretender que los derechos individuales consagrados por la Convención de Viena no formen parte de las garantías que se conceden a una persona sujeta a proceso penal.

Las connotaciones de este contencioso no pueden ser mayores. Sobre todo si se tiene en cuenta la intensa relación bilateral entre ambos estados. Lo cual se traduce en el comercio y en los 8 millones de mexicanos que viven en suelo de los Estados Unidos y que satisfacen la demanda de mano de obra que no cubre el mercado local. Y ni hablar de los 10 mil millones de dólares anuales de remesas que aquéllos envían a sus familias en México.

En contra de lo que podría pensarse, esa falta de aviso consular está mucho más arraigada de lo que parece. Sin ir más lejos, una investigación de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires reveló el año pasado que ninguno de los extranjeros detenidos en cárceles o comisarías provinciales accedió al derecho de ser asistido por el cónsul de su país o a cumplir la sentencia en su lugar de origen. Son 687 detenidos de 21 países diferentes.

Finalmente, el 31 de marzo pasado la Corte falló en contra de los Estados Unidos y ordenó la revisión judicial de las condenas impuestas en suelo de ese país, a la vez que rechazó el argumento de que la vulneración del derecho a la notificación consular pudiera rectificarse planteándola simplemente en una petición de indulto.

SIN TEXTO



De este modo, los quince jueces de la CIJ tutelaron los derechos de los ciudadanos mexicanos detenidos y condenados a muerte en suelo extranjero. Pero esa protección, en un plano simbólico, va más allá. Puesto que también abraza al verdadero eslabón débil del actual proceso de mundialización: los millones de personas migrantes, en su mayoría pobres y sin instrucción formal, carentes de toda cobertura legal.

Sin embargo, en el asunto de la analogía con este proceso no aplica, puesto que SI TUVO ASISTENCIA CONSULAR y aunque se pretende desvirtuar esto, por una supuesta notificación tardía al consulado que se produjo 26 horas después, argumentando la afectación al debido proceso, ello resulta erróneo, máxime que como ya se ha dejado expresado, al rendir declaración estuvo asistida de un defensor público y de un traductor, negando en todo momento su participación en los secuestro, con lo que se demuestra que ello no afectó su derecho a una defensa eficaz que es lo que tutela la Convención de Viena, y no admite su relación con el CASO. pues este último, se refiere al reclamo que hizo el gobierno mexicano a la Corte Europea de Justicia, ya que Estados Unidos había condenado a muerte a 52 mexicanos que NUNCA tuvieron asistencia consular.

CASO CONTRA ALEMANIA.

En el caso que nos ocupa, ya hay quienes han hallado en ejemplos extranjeros, a nosotros a quienes tanto nos mueven las actitudes foráneas, y muestran el caso conocido como vs Alemania, en el cual se dejó claro: una violación a los derechos del detenido antes del juicio, no implica la inexistencia de un debido proceso.

Después eso dijo por once votos contra seis, la Corte Europea de Derechos Humanos. Los tratos inhumanos o la tortura no impiden el derecho a un juicio justo.

El 27 de septiembre de 2002, sequestró al hijo de un de años, y lo asesinó. Poco después, exigió de sus padres de euros como rescate.

El 29 de septiembre es entregado el dinero; el 30 de septiembre, se compra un ticket de avión y no da señales de contactar con el niño, a quien todavía creían vivo. La Policía decide aprehenderlo. confiesa el secuestro, pero no revela el paradero de.

El 1 de octubre, comisario de lo criminal, ordena coacción en el interrogatorio. El oficial encargado amenaza al acusado con 'dolores inimaginables' si no confesaba el paradero del niño.

condujo a las autoridades hasta el lago donde había dejado el cuerpo debajo de un muelle. El caso de sumió a Alemania en un controvertido debate en torno a la coacción en situaciones extremas.

, en ese entonces, era estudiante de leyes; un año después fue condenado a cadena perpetua. No obstante, su defensa acusó a la policía de haber usado medios no permitidos para conseguir la información. En Alemania —suscriptora de la Convención Antitortura de Naciones Unidas— la tortura es ilegal; también lo es la amenaza con tortura.

y su subalterno fueron amonestados y multados; de todos modos, el abogado defensor de llevó el caso al Tribunal Federal, al Constitucional y finalmente a la Corte Europea de Derechos Humanos

SIN TEXTO



exigiendo una indemnización por tortura. Y el tribunal europeo le dio la razón: el argumento de la utilización de la tortura como medio para salvar a alguien es inconstitucional, pues 'el honor de una persona es intocable'.

"Que me hayan amenazado y empujado me traumatizó", declaró [redacted], a sus [redacted] años, a la salida de la audiencia en donde el tribunal de Hesse, basándose en el veredicto de la Corte Europea, le reconoce el derecho a una compensación de [redacted] euros. "Este veredicto es una señal clara a favor de los derechos humanos", declaró el abogado defensor.

Como fuere, el diario [redacted] hizo eco del otro lado de la moneda: "muchos ciudadanos se ven heridos en su percepción de la ley... es muy difícil de aguantar que una persona reclame incansable y exitosamente sus derechos, cuando ella misma robó a un muchachito el derecho a la vida".

"Aunque el caso es emocionalmente controvertido, 'decisiones como ésta son el precio que debemos pagar si queremos vivir en un estado de derecho', explicó a la agencia DPA, [redacted], catedrático de Filosofía del Derecho.

El estado de derecho vive de imponerse prohibiciones categóricas, que no pueden ser suspendidas en situaciones extremas', añade, 'por brutal que haya sido el autor del delito'".

Con base en historias de este tipo quienes sostienen el desvanecimiento de la condena por los errores en el procedimiento (errores deliberados, abusivos y violatorios de los derechos del detenido) quedan mal parados. Torturado pero satisfecho por la multa en su favor, [redacted] purga prisión por el tiempo natural de su vida.

Aun así en el caso de [redacted] la Corte Europea de Derechos Humanos determinó que los malos tratos a un detenido, no afectan el debido proceso. Ganten fue sentenciado por el homicidio de un menor luego de que la policía había obtenido su confesión colocándole una pistola en la cara y que las pruebas de su culpabilidad fueron producto de un trato inhumano, con violación a su derecho de un juicio justo.

Este caso, tampoco resulta aplicable análogamente el asunto de [redacted], ya que como se ha observado durante el proceso incriminatorio, a [redacted] no se le impuso tortura, ni malos tratos, ni físicos; psicológicos o verbales, quien de haberlos sufrido, pudo haberlo así manifestado durante sus declaraciones, sin embargo, ello no ocurrió.

Así que siguiendo los lineamientos de las Cortes Internacionales, ni se le violó a [redacted] su derecho a la notificación consular, ni su derecho de probar y alegar, ni tampoco su derecho a un juicio justo, así que las supuestas faltas procesales que se refieren y que pretenden viciar el procedimiento, no pueden anular TODO el proceso seguido en su contra.

CONCLUSIONES FINALES.

Por las razones expuestas en el apartado correspondiente es que resulta inadecuado e improcedente el presente recurso y no es jurídicamente posible que se analicen los agravios expresados por la defensa de la condenada, ya que de lo contrario se estaría violando el procedimiento del Juicio de Amparo Directo, creando un precedente para que todos los justiciables en cualquier materia que obtengan una resolución contraria a sus intereses en el Juicio de Amparo Directo, promuevan RECURSO DE

SIN TEXTO



REVISIÓN en contra de esa determinación sin haber esgrimido concepto de violación respecto de constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos o la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

Las sentencias pronunciadas en amparo directo sólo comprenden las cuestiones legales planteadas en la demanda, de acuerdo con el artículo 190 de la Ley de Amparo, y sus efectos son inter partes —aunque excepcionalmente una sentencia de amparo sí puede afectar derechos de terceros, que serán llamados a juicio—. En el caso que nos ocupa, el Séptimo Tribunal Colegiado Penal correctamente sólo se pronunció sobre las cuestiones planteadas por en sus conceptos de violación, que versaron exclusivamente sobre cuestiones de legalidad, violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, por vicios en el procedimiento en relación a los diversos preceptos del Código Federal de Procedimientos Penales, como se corrobora de los 18 conceptos de violación argumentados en la citada demanda, así como del proyecto de sentencia del Ministro Zaldívar (fojas 143), que en el apartado que interesa expresa: "... el efecto corruptor influyó en todo el proceso penal, sobre todo en el material probatorio..." o sea, se refiere a las violaciones del procedimiento (in procedendo).

En tanto que en la resolución que se dicte, que recaiga en el recurso de revisión del amparo directo, según lo ordena la fracción IX del artículo 107 constitucional, la materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. Por ello, suponiendo sin conceder, que se declararan fundados y operantes los agravios esgrimidos, revocándose la negativa del amparo, no debe llegarse al extremo de poner en libertad a la quejosa, por vicios en el procedimiento; antes bien, que la indebida valoración de pruebas ya fue estudiada y resuelta por el Tribunal Colegiado. Máxime, que el montaje televisivo, que el Ponente denomina como "escenificación ajena a la realidad", y según su dicho, fue el efecto corruptor del proceso penal, sobre todo en el caudal probatorio, no fue considerado, ni valorado en la sentencia del Colegiado que negó el amparo a la quejosa.

No debe desestimarse, que si bien es cierto, se debe velar por el justo juicio, el debido proceso, se debe vigilar también la protección de los derechos humanos tanto del indiciado como de las víctimas y cuando se decida sobre el recurso de revisión, se deben ponderar como lo exige la Constitución, los derechos humanos tanto del imputado como de las víctimas, y en caso de que se considere la violación de los derechos fundamentales de

se analice cuidadosamente el daño causado sin que ello, implique la desprotección de los derechos de las víctimas y en todo caso, si esta Máximo Tribunal, considerara que existen pruebas viciadas que hubieren sido valoradas por los jueces, se ordene que esas pruebas solamente, sean repuestas en el proceso, procurando que el culpable no quede impune y que los daños causados por los delitos imputados se reparen cuando sea procedente.

Sin embargo, de todo lo que se ha dejado anotado anteriormente, se colige que, suponiendo sin conceder, que existan violaciones en el procedimiento y pruebas que pudieran estar viciadas y por ende, deben declararse nulas, ello no debe significar que TODO el proceso está mal y que por tanto debe

SIN TEXTO



dejarse en libertad a una persona que ha sido reconocida como autora material de los delitos que se le imputaron y que además en su momento, cuando tuvo la oportunidad de alegar y presentar las pruebas conducentes a fin de demostrar su inocencia y con ello conseguir su libertad, no pudo hacerlo, puesto que su defensa no pudo desvirtuar todas y cada una de las pruebas que se desahogaron durante el proceso.

Por otro lado, resulta infundado y falso que la quejosa no tuvo asistencia consular ni fue puesta inmediatamente a disposición del Ministerio Público, por las razones mencionadas anteriormente, ya que la "posible demora" se debió a circunstancias, en el primer caso, fuera del alcance y voluntad de lo que intervinieron puesto que sí se hicieron las llamadas oportunamente a la Embajada, pero no fueron contestadas si no hasta el día siguiente de su detención, y por lo que hace a la "inmediatez" para la puesta a disposición del Ministerio Público, como ya se mencionó, se tuvo que decidir por un interés mayor, que era la de preservar la libertad y seguridad de las personas que todavía permanecían privadas de su libertad y que era importante poner a salvo sin demora.

No obstante ello, los indiciados fueron entregados en menos de 6 horas, tiempo bastante razonable, para el caso en donde además se liberaron a 3 víctimas, por lo que no es válido, ni lógica ni jurídicamente que se anule todo un proceso por una supuesta violación en la etapa de detención, ni que se dicte su libertad, cuando se ha demostrado suficientemente con pruebas, la existencia del delito y la responsabilidad penal.

No debe dejar de observarse, que en este caso, existen derechos del indiciado, pero también el de las víctimas y de la Sociedad en los procesos donde se pretende castigar la comisión de conductas delictuosas, y precisamente por ello, quien cometa un delito, debe ser castigado y el delito no debe quedar impune. Si existen fallas en el procedimiento, que se repongan, cuando así sea procedente, pero dichas faltas procesales no pueden anular todo un proceso, en donde además se ha dejado plenamente demostrada su participación en los hechos y donde su defensa no ha podido desvirtuar las pruebas que lo demuestran, aunado a que existen numerosas jurisprudencias y resoluciones de Tribunales Internacionales y Tribunales Constitucionales de muchos países, que no le dan el alcance que se le pretende dar a estas deficiencias, ya que en el caso que nos ocupa, las evidencias están ahí presentes y no existen tales irregularidades, porque en el procedimiento en todo momento estuvo asistida de un defensor, traductor y también por el Consulado, desde el momento que se pudo tener comunicación.

Los integrantes de nuestro Máximo Tribunal de Justicia no deben olvidar que así como resulta imperioso proteger los derechos del indiciado, también lo es, la protección de los derechos de las víctimas y de toda la Sociedad que en conjunto, que está esperando que se tome una resolución justa, apegada a derecho y que sobre todo, cumpla con la exigencia colectiva de no dejar impune los delitos cometidos que agravan indudablemente a las víctimas, a sus familiares, pero que también han dejado lacerada a nuestra sociedad que ya está cansada de ser objeto de incontables casos de secuestros y que no podemos permitir que supuestas violaciones procesales alienten la posibilidad de dejar sin castigo a los responsables de tan crueles actos.

SIN TEXTO



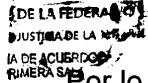
Ahora bien, para robustecer e ilustrar el panorama de quienes decidirán y resolverán mediante sentencia el presente asunto, me permito ofrecer las siguientes:

PRUEBAS.

1.- **DOCUMENTAL PRIVADA**, relativa a la traducción al idioma español del comunicado de prensa emitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de fecha 01 de junio de 2010, relativo a la Sentencia de la Gran Cámara en el caso contra Alemania, consistente en 07 páginas, emitido por , Perito Traductor debidamente autorizada por el H. Poder Judicial de la Federación, de fecha 03 de agosto de 2012, que se agrega al presente como **ANEXO UNO**.

2.- **DOCUMENTAL PRIVADA**, consistente en copia fotostática de la resolución emitida por la Corte Europea de Derechos Humanos, en el Caso contra Alemania, versión que fue rectificada el 03 de junio de 2010, aplicación número /05, integrada por 66 páginas, que se agrega al presente como **ANEXO DOS**.

3.- **DOCUMENTAL PRIVADA**, consistente en copia fotostática de la resolución emitida en el caso " " (y otros () Sentencia, Reportes, que se agrega al presente como **ANEXO TRES**.



Por lo antes expuesto,

A Usted C. Ministra ponente, respetuosamente pido se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en mi carácter de TERCERO PERJUDICADO en el presente Amparo Directo en Revisión, formulando los alegatos que a mi derecho corresponden.

SEGUNDO.- Por no existir impedimento legal alguno y toda vez que no se ha dictado la resolución correspondiente en el presente asunto, solicito sean tomados en consideración los presentes alegatos en el momento de dictar el fallo que a derecho corresponda.

SIN TEXTO



TERCERO.- Tener por exhibidas las pruebas que se agregan al presente libelo, ya que constituyen criterios orientadores para este Alto Tribunal, que apoyan los argumentos vertidos en el presente libelo.

CUARTO.- Por ser procedente en derecho, declarar improcedente el Recurso de Revisión que nos ocupa, o en caso contrario, Negar el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa.

PROTESTO LO NECESARIO
México, Distrito Federal, 7 octubre de 2012.



000455

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2013 ENE 4 AM 9 38

OFICINA DE CERTIFICACIÓN
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibi de un enviado de la Ponencia de la
Ministra OLGA SÁNCHEZ CONDADO DE GARCÍA VILLEGAS
en (24) Folios

con:
Diversos anexos en un total de (83) folios.

8



SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2013 ENE 4 AM 11 10

PRIMERA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

(Papel membretado de Tribunal Europeo de Derechos Humanos)

Comunicado de Prensa emitido por el Registrador

Sentencia de la Gran Cámara¹

contra Alemania (solicitud número 1105)

**AMENAZA POLICIAL DE VIOLENCIA CONTRA SOSPECHOSO DE SECUESTRO DE MENOR
RESULTO SER MALTRATO PERO NO AFECTO SU DERECHO A UN JUICIO JUSTO**

Por once votos a seis

Violación del Artículo 3 (prohibición de tortura y tratamiento inhumano)

No hay violación del Artículo 8 (derecho a un juicio justo)

de la Convención Europea de Derechos Humanos

Hechos principales

EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA

REQUERIMIENTO

El solicitante, , es una persona de nacionalidad alemana nacida en 1975. Actualmente se encuentra en prisión en Schwalmstadt (Alemania).

El caso se relacionó con su afirmación de que fue amenazado con maltrato por la policía para hacerlo confesar sobre el paradero de J., el hijo menor de una reconocida familia de banqueros en Frankfurt am Main, y que el juicio posterior contra él no fue justo. En julio de 2003, el señor (fue sentenciado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de J. El tribunal determinó que su culpa era de especial gravedad lo cual significa que el resto de su sentencia carcelaria no puede ser suspendida con libertad provisional después de 15 años de detención.

¹ Las sentencias de la Gran Cámara son definitivas (Artículo 44 de la Convención)

**SIN
TEXTO**



El menor, de años de edad, había conocido al solicitante, un estudiante de derecho en ese entonces, a través de su hermana. El día 27 de septiembre de 2002, el solicitante llevó a su departamento fingiendo que la hermana de había dejado una chaqueta allí. Después sofocó al menor.

Posteriormente, el solicitante depositó una solicitud de rescate en casa de los padres de requiriendo que le pagaran un millón de euros (EUR) por ver a su hijo nuevamente. Abandonó el cadáver de bajo el muelle de un estanque a una hora de Frankfurt. El día 30 de septiembre de 2002, alrededor de la 1 a.m., el señor recogió el rescate en una estación de tranvías. Fue puesto bajo vigilancia policial y fue arrestado algunas horas después.

El día 1 de octubre de 2002 uno de los oficiales de policía responsables de cuestionar al señor a instrucciones del Subjefe de la Policía de Frankfurt, advirtió al solicitante que se enfrentaría a un sufrimiento considerable si persistía en su rechazo por divulgar el paradero del menor. Consideraron que la amenaza era necesaria, ya que asumieron que la vida de se encontraba en gran peligro debido a la falta de alimentos y el frío. Como resultado de dichas amenazas, el solicitante divulgó dónde había escondido el cadáver del menor. Después de esa confesión, la policía condujo al estanque junto con el solicitante y obtuvo pruebas adicionales, especialmente los rastros de la llanta del auto del solicitante en el estanque y el cadáver.

Al inicio del procedimiento penal contra el solicitante, el Tribunal Regional de Frankfurt am Main decidió que todas sus confesiones hechas a lo largo de la investigación no podrían ser usadas como prueba en el juicio, ya que habían sido obtenidas bajo coacción, en violación del Artículo 3 del Código de Procedimientos Penales y el Artículo 3 de la Convención Europea. Sin embargo, el Tribunal permitió el uso en el procedimiento penal de pruebas obtenidas como resultado de las declaraciones extraídas al solicitante bajo coacción.

El día 28 de julio de 2003, el solicitante fue declarado culpable de secuestro y asesinato y fue sentenciado a cadena perpetua. A pesar del hecho que había sido informado al inicio del juicio de su derecho a permanecer en silencio y que todas sus declaraciones previas no podrían ser usadas como prueba contra él, sin embargo, el solicitante confesó nuevamente que había secuestrado y matado a Las determinaciones de hecho del tribunal se basaron esencialmente en dicha confesión. También fueron respaldadas por las pruebas obtenidas como resultado de la confesión por primera vez, a saber, el informe de autopsia y los rastros de llantas en el estanque, y por otras pruebas obtenidas como resultado de que el solicitante fue observado después de que había cobrado el dinero del rescate.

El solicitante presentó una apelación sobre puntos de derecho que fue desestimada por el Tribunal Federal de Justicia en mayo de 2004. Posteriormente presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional Federal, que se rehusó a examinarla por decisión del 14 de diciembre de 2004. El tribunal confirmó el fallo del tribunal regional, sin embargo, estableció que el amenazar al solicitante con dolor para obtener una confesión, constituyó un método prohibido de interrogatorio conforme a la ley nacional y violó el Artículo 3 de la Convención.

SIN TEXTO



En diciembre de 2004, los dos oficiales de la policía involucrados en la amenaza al solicitante fueron declarados culpables de coacción e incitación a coacción en el cumplimiento de su deber y se les dieron multas suspendidas de 60 y 90 pagos diarios de 60 y 120 Euros, respectivamente.

En diciembre de 2005, el solicitante pidió al tribunal regional ayuda legal para entablar procedimientos de responsabilidad oficial contra el *Land* de Hesse para obtener compensación por ser víctima de trauma por los métodos de investigación de la policía. El tribunal desestimó la solicitud, y en febrero de 2007, el tribunal de apelaciones desestimó la apelación del solicitante contra dicha decisión, sosteniendo en particular que el solicitante se enfrentaría a dificultades al establecer una relación causal entre las amenazas de tortura y el supuesto daño mental que requiere de tratamiento psicológico. El día 19 de enero de 2008, el Tribunal Constitucional Federal invalidó la decisión del tribunal de apelaciones y remitió el caso. Determinó en particular que el rechazo a otorgar la ayuda legal al solicitante había violado el principio de acceso igualitario al tribunal y que si la violación de su dignidad humana requería el pago de daños era una cuestión legal difícil, que no debía ser determinada en una solicitud de procedimientos de ayuda legal. El procedimiento remitido aún se encuentra pendiente ante el tribunal regional.

Demandas, procedimiento y composición del Tribunal

El solicitante se quejó de que había sido objeto de tortura al ser cuestionado por la policía en violación al Artículo 3. Basándose en el Artículo 6, además declaró que su derecho a un juicio justo había sido violado en particular por el uso de pruebas obtenidas como resultado de su confesión obtenida bajo coacción.

La solicitud fue presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el día 15 de junio de 2005. A los padres de una organización no gubernamental internacional, se les dio permiso de intervenir en el procedimiento como terceros.

En una sentencia del día 30 de junio de 2008, el Tribunal sostuvo por seis votos a uno que el solicitante ya no podía afirmar ser víctima de una violación del Artículo 3 de la Convención y que no había habido violación del Artículo 6 de la Convención.

El día 1 de diciembre de 2008, el caso fue remitido a la Gran Cámara, a solicitud del solicitante. El día 10 de marzo de 2009, se sostuvo una audiencia pública en el edificio de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La Sentencia fue emitida por la Gran Cámara de 17 jueces, compuesta de la siguiente manera:

(Francia), Presidente,
(Grecia),
el Reino Unido),
(Bélgica),
(Andorra),
Rusia),

SIN TEND



(Bosnia y Herzegovina),
(Alemania),
(Noruega),
(Lituania),
lovaquia),
(Letonia),
(Chipre),
ra (España),
(Albania),
(Irlanda),
(Montenegro), jueces,

y también

Decisión del Tribunal

Artículo 3

Tratamiento contrario al Artículo 3

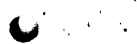
Había sido establecido por los tribunales alemanes que un oficial de la policía, actuando a instrucciones del Subjefe de la Policía de Frankfurt, había amenazado al solicitante con ser objeto de dolor intolerable para hacerle divulgar el paradero de J. El Tribunal consideró que estas amenazas inmediatas de maltrato deliberado e inminente tenían que haber causado al solicitante considerable temor y sufrimiento mental. Observó que, como lo establecen los tribunales alemanes, el jefe de policía había ordenado a sus subordinados en varias ocasiones usar la fuerza contra el solicitante, su orden por lo tanto no podía ser considerada como un acto espontáneo, sino que había sido calculado de manera deliberada.

DE LA FEDERACIÓN

El Tribunal aceptó que los oficiales de la policía habían sido motivados por el intento de salvar la vida de un menor. Sin embargo, la prohibición de maltrato aplicado independientemente de la conducta de la víctima o la motivación de las autoridades, no permitió excepción, ni siquiera cuando la vida de una persona se encontraba en riesgo. El Tribunal consideró que en este caso, las amenazas inmediatas contra el solicitante con el objeto de extraer información al mismo fueron suficientemente graves para ser calificadas como tratamiento inhumano y caen dentro del alcance del Artículo 3. Teniendo en cuenta su jurisprudencia y las opiniones tomadas por otros organismos internacionales de seguimiento de derechos humanos, se determinó, sin embargo, que el método de interrogación al que había sido sujeto el solicitante no había llegado al nivel de crueldad para alcanzar el grado de tortura.

La situación de víctima del solicitante

SIN TEXTC



El Tribunal quedó convencido de que los tribunales regionales, tanto en el procedimiento penal contra el solicitante como contra los oficiales de la policía, habían reconocido expresamente y de manera inequívoca que el interrogatorio del solicitante había violado el Artículo 3.

Observó, sin embargo, que los oficiales de la policía, habiendo sido encontrados culpables de coacción e incitación a la coacción, respectivamente, habían sido sentenciados únicamente a multas muy modestas y suspendidas. Los tribunales nacionales habían tomado en consideración una serie de circunstancias mitigantes, en particular el hecho de que los oficiales tenían por objetivo salvar la vida de J. Aunque el Tribunal aceptó que este caso no era comparable a casos que se relacionan con actos arbitrarios de brutalidad por parte de agentes estatales, sin embargo, consideró que el castigo de los oficiales de la policía no tuvo el efecto disuasivo necesario para impedir mayores violaciones de la Convención de esta clase. Además, el hecho de que uno de los oficiales de la policía había sido nombrado jefe de policía posteriormente, planteó serias dudas en cuanto a si la reacción de las autoridades reflejó de manera suficiente la gravedad involucrada en una violación del Artículo 3.

Con respecto a la compensación para remediar la violación de la Convención, el Tribunal destacó que la solicitud del solicitante de ayuda legal para entablar procedimientos de responsabilidad después de una remisión, había estado pendiente por más de tres años y no se había tomado aún ninguna decisión con base en los fundamentos de su pretensión de compensación. La omisión por parte de los tribunales nacionales de decidir con base en los fundamentos de la pretensión, planteó serias dudas en cuanto a la efectividad del procedimiento de responsabilidad de oficiales.

A la luz de estas determinaciones, el Tribunal consideró que las autoridades alemanas no dieron al solicitante suficiente resarcimiento para su tratamiento en violación del Artículo 3.

El Tribunal concluyó, por once votos a seis, que el solicitante aún podía afirmar ser víctima de una violación al Artículo 3 y que Alemania había violado el Artículo 3.

Artículo 3

Como el Tribunal había establecido en su jurisprudencia, el uso de pruebas obtenidas por métodos en violación del Artículo 3 planteó graves problemas en relación con la imparcialidad de los procedimientos penales. Por lo tanto, tenía que determinar si los procedimientos contra el solicitante en su conjunto habían sido injustos debido a que se había utilizado dicha prueba.

El Tribunal determinó que la protección efectiva de las personas del uso de métodos de investigación en violación del Artículo 3 puede requerir, como regla, la exclusión del uso en juicio de pruebas reales obtenidas como resultado de una violación de dicho Artículo. Consideró que esta protección y la imparcialidad de un juicio penal, únicamente estaban en riesgo si las pruebas obtenidas en violación del Artículo 3 tenían un impacto en el encarcelamiento o sentencia del demandado.

En este caso, fue la nueva confesión del solicitante en el juicio - y después de haber informado que todas sus declaraciones previas no podían ser usadas como pruebas contra el mismo - que

SIN TEXTO



ORDEN JUDICIAL DE LA
PRIMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARIA DE JUSTICIA

constituyó la base de su encarcelamiento y su sentencia. La prueba en controversia, por lo tanto, no había sido necesaria para demostrar que era culpable o determinar su sentencia.

Con respecto a la cuestión acerca de si la violación del Artículo 3 en el procedimiento de investigación había tenido influencia en la confesión del solicitante durante el juicio, el Tribunal observó que había subrayado en sus declaraciones en el juicio que estaba confesando libremente por remordimiento y para tomar responsabilidad de su delito, a pesar de las amenazas emitidas contra el mismo por la policía. Por lo tanto, el Tribunal no tuvo motivos para asumir que el solicitante no habría confesado si los tribunales hubieran decidido en el inicio excluir las pruebas en controversia.

A la luz de estas consideraciones, el Tribunal determinó que en las circunstancias particulares del caso, la omisión por parte de los tribunales nacionales de excluir la prueba impugnada, obtenida después de una declaración extraída por medio de un tratamiento inhumano, no había tenido influencia en el encarcelamiento y sentencia del solicitante. Ya que los derechos de defensa del solicitante habían sido respetados, su juicio en conjunto tenía que ser considerado justo.

El Tribunal concluyó, por once votos a seis, que no hubo violación del Artículo 6.

Artículo 41 (satisfacción justa)

El solicitante no reclamó ningún laudo por daños pecuniarios o morales, pero subrayó que el objetivo de su solicitud era obtener un nuevo juicio. Ya que no había habido violación del Artículo 6, el Tribunal consideró que no hubo base para que el solicitante solicitara un nuevo juicio o la reapertura del caso ante los tribunales nacionales.

Opiniones separadas

Los Jueces Tulkens, Ziemele y Bianku expresaron una opinión parcialmente de acuerdo, los Jueces Rozakis, Tulkens, Jebens, Ziemele, Bianku y Power expresaron una opinión parcialmente en desacuerdo, el Juez Casadevall expresó una opinión parcialmente en desacuerdo, a la que se unieron los Jueces Mijović, Jaeger, Jočlene y López Guerra. Las opiniones separadas se adjuntan a la sentencia.

La sentencia se encuentra disponible en los idiomas inglés y francés. Este comunicado de prensa es un documento producido por el Registro. No vincula al Tribunal. Existe información adicional acerca del Tribunal en su sitio de red (www.echr.coe.int).

Contactos de prensa

Nina Salomon (tel: + 33 (0)3 90 21 49 79) o

Stefano Piedimonte (tel: + 33 (0)3 90 21 42 04)

SIN TEXTO



ORDEN JUDICIAL DE L/
PRIMA CORTE DE JUSTI
SECRETARIA DE A.
DE L. RIVERO